

# **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

**UNIDAD DE POST GRADO**

## **La Tutela de los derechos conexos a la libertad personal a través del proceso de Hábeas corpus**

**TESIS**

**Para optar el Grado Académico de Doctor en Derecho y Ciencia Política**

**AUTOR**

**José Alberto Estela Huamán**

**Lima – Perú**

**2011**

## **DEDICATORIA**

Con todo el cariño de  
siempre a mi familia en  
general

# **ÍNDICE GENERAL**

**DEDICATORIA**

**INTRODUCCION**

<b>1. TEMA DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>1</b>
<b>2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</b>	<b>1</b>
2.1. Diagnóstico situacional	1
2.2. Preguntas de investigación	2
2.3. Objetivos de investigación	2
2.4. Justificación	3
2.5. Delimitación	4
<b>3. MARCO TEÓRICO</b>	<b>4</b>
3.1. Marco histórico	4
3.1.1. Interdicto de homine libero exhibendo	5
3.1.2. La Carta Magna (1215)	10
3.1.3. La Ley de Habeas Corpus (1679)	12
3.1.4. Habeas Corpus Amendment Act (1816)	13
3.1.5. Hábeas corpus en Perú	14
3.2. Marco legislativo peruano	16
3.2.1. Constitución Política de 1993	16
3.2.2. Código Procesal Constitucional	23
3.3. Tratados internacionales	34
3.3.1. Declaración universal de derechos humanos	34
3.3.2. Pacto internacional de derechos civiles y políticos	35
3.3.3. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre	35
3.3.4. Convención americana sobre derechos humanos	35

3.4. Marco teórico estricto	36
3.4.1. Concepto de hábeas corpus	36
3.4.2. Vinculación con la defensa de los derechos fundamentales	39
3.4.3. Características del hábeas corpus	42
3.4.4. La libertad personal como objeto de protección del hábeas corpus	44
3.4.5. Tipología de hábeas corpus	51
3.4.6. Derechos conexos a la libertad personal	59
3.4.6.1. Derechos fundamentales sustantivos conexos a la libertad personal	62
3.4.6.2. Derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal	74
3.4.7. Hábeas corpus contra resoluciones judiciales	96
3.5. Legislación comparada	125
3.5.1. Brasil	125
3.5.2. México	126
3.5.3. España	127
3.5.4. Argentina	128
3.5.5. Colombia	130
3.5.6. Chile	131
3.6. Marco conceptual	134
<b>4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS</b>	<b>136</b>
4.1. Hipótesis generales	136
4.2. Hipótesis específicas	138
<b>5. TIPO DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>140</b>
<b>6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>141</b>
<b>7. UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN. SELECCIÓN DE MUESTRA. UNIDAD DE ANÁLISIS</b>	<b>141</b>

<b>8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. TRABAJO DE CAMPO</b>	<b>146</b>
8.1. Técnicas de recolección de datos	146
8.2. Instrumentos de recolección de datos	146
8.3. Trabajo de campo	146
8.4. Contrastación de hipótesis	240
<b>9. ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS</b>	<b>245</b>
9.1 Ordenamiento de datos	245
9.2. Análisis de datos	250
<b>10. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCTRINA. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA TEORÍA. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA LEGISLACIÓN. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA JURISPRUDENCIA. ANTEPROYECTO DE LEY</b>	<b>254</b>
10.1. Aportes de la investigación a la doctrina	254
10.2. Aportes de la investigación a la teoría	255
10.3. Aportes de la investigación a la legislación	256
10.4. Aportes a la jurisprudencia	256
10.5. Anteproyecto de ley	257
<b>11. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL</b>	<b>258</b>
<b>12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>260</b>
12.1. Conclusiones	260
12.2. Recomendaciones	260

<b>13. BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>262</b>
<b>14. ANEXOS</b>	<b>272</b>
14.1. Matriz de datos de la hipótesis general 1	272
14.2. Matriz de datos de la hipótesis general 2	281
14.3. Matriz de datos de la hipótesis específica 1	290
14.4. Matriz de datos de la hipótesis específica 2	307

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación desarrolla el proceso de Hábeas Corpus, proceso dirigido a tutelar la libertad personal y los derechos conexos a ella, concepción que se regula en el artículo 200.1 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 26 del Código Procesal Constitucional.

El origen y la evolución del hábeas corpus está en el *interdicto de homine libero exhibendo*, en la Carta Magna de 1215, la Ley de Hábeas Corpus de 1679 y el *Hábeas corpus amendment act* de 1816.

En el Perú, lo encontramos en la Constitución de 1860, la Ley N° 2333 de 1916 y en las Constituciones de 1920, 1933 y 1979. La Constitución Política del Perú de 1993 perfeccionó en forma amplia el Hábeas Corpus haciéndolo extensivo a los derechos conexos a la libertad personal que pudieran ser amenazados de manera conexos a la libertad personal, perspectiva que ha sido asumida por el Código Procesal Constitucional Peruano y que se encuentra establecida en los incisos de su artículo 26 que contiene una serie de derechos fundamentales conexos que son resguardos por este proceso constitucional.

Esta investigación ha tomado en cuenta la defensa de los derechos fundamentales conexos expuestos por el Tribunal Constitucional, el cual desarrolla la tipología de Hábeas Corpus a través de ocho modalidades que permitirían resguardar la libertad personal y los derechos fundamentales vinculados a ella.

Sin perjuicio de la tipología desarrollada por el Tribunal Constitucional consideramos que el estudio del Hábeas Corpus y su ámbito de acción debería ser realizado a partir de dos tipos claramente establecidos: el Hábeas Corpus reparador –frente a la amenaza o vulneración de la libertad personal- y el Hábeas Corpus conexo –frente a la amenaza o vulneración de un derecho fundamental vinculado a la libertad personal.

Sobre la base de este fundamento, se desarrolla el estudio de la presente tesis, el cual parte de los derechos conexos a la libertad personal, clasificándolos en derechos fundamentales sustantivos y derechos fundamentales procesales conexos, los cuales son estudiados tanto a

partir de la doctrina nacional y extranjera, como también de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional. Ello no ha sido óbice para dejar de lado la experiencia legislativa comparada, por lo cual se ha incorporado las disposiciones legislativas desarrolladas en Brasil, México, España, Argentina, Colombia y Chile en torno a la materia objeto de estudio.

La presente tesis se avocó al estudio del proceso de Hábeas Corpus y de su acción sobre los derechos fundamentales conexos a la libertad personal, se estudió el marco teórico sobre la materia, el cual nos permitió elaborar dos hipótesis generales y dos hipótesis particulares como respuestas preliminares a la actual situación de los derechos conexos a la libertad personal y a la acción ejercida por el proceso de Hábeas Corpus para su defensa.

A efectos de contrastar dichas proposiciones, resultaba imprescindible que la investigación sobre su eficacia fuese constatada en un trabajo de campo. Por tal motivo, se consideró pertinente medir la eficacia de este proceso constitucional en las noventa y tres (93) resoluciones emitidas sobre procesos de Hábeas Corpus por el Tribunal Constitucional peruano durante los meses de enero y febrero de 2010.

Esta investigación, nos permitió elaborar conclusiones que respondían a lo que sucede en el trámite de estos procesos a efectos de verificar si la presunta afectación del derecho realmente se producía sobre el contenido esencial del derecho, cuya presunta vulneración se denunciaba; o, en todo caso, si el contenido de la demanda respondía a una actuación maliciosa de parte del recurrente o a una mala comprensión sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales y al objeto de protección de los procesos constitucionales.

Finalmente, las conclusiones nos permitieron elaborar propuestas dirigidas a superar los problemas advertidos en el trabajo de campo en relación al tema de nuestra investigación, las cuales han sido traducidas no sólo en enunciados, sino también en una propuesta legislativa que esperamos sea incorporada en nuestra legislación, a efectos de superar las irregularidades advertidas en torno al proceso de Hábeas Corpus como mecanismo de tutela de los derechos conexos de la libertad personal



## **1. TEMA DE INVESTIGACIÓN**

El proyecto de tesis se titula *“La tutela de los derechos conexos a la libertad personal a través del proceso de hábeas corpus”*.

## **2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

El artículo 2.24 de la Constitución Política consagra el derecho a la libertad personal, el cual constituye un derecho fundamental que debe ser tutelado tanto por agentes estatales como particulares. A efectos de que ello sea posible, nuestra legislación ha establecido una serie de parámetros que, por un lado, permiten su adecuado resguardo y, por otro, que establecen las condiciones que permiten su restricción.

En este sentido, el literal f) del mencionado inciso señala que “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. Ello excluye inmediatamente todo supuesto distinto como propio de aquel que pueda legitimar la restricción sobre la libertad personal.

Sin embargo, son conocidos los casos en los que a pesar de no darse los referidos presupuestos se priva ilegítimamente de la libertad personal. En razón de ello es que la Constitución Política a través de su artículo 200.1 establece que “la Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”.

Ahora bien, cabe precisar que la restricción de la libertad personal no se da sólo en lo que concierne a la limitación per se de la locomoción del ser humano, pues existen afectaciones a otros derechos fundamentales que terminan incidiendo sobre este atributo. Así, por

ejemplo, tenemos que la vulneración de derechos como el debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales o a la pluralidad de instancia dentro de un proceso penal pueden originar la restricción de la libertad personal.

Conscientes de esta situación, consideramos necesario abordar el estudio del proceso de hábeas corpus como mecanismo para la tutela de los derechos conexos a la libertad personal, debido a que en nuestro medio se ha enfocado el estudio de este proceso constitucional sólo en cuanto al resguardo de dicho atributo fundamental, mas no así sobre el análisis de las diversas situaciones conexas que pueden originar su vulneración.

## **2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN**

### **2.2.1. Preguntas generales**

1. ¿Cuál es el principal ámbito en el que se vulneran los derechos conexos a la libertad personal?
2. ¿Cuál es el derecho conexo a la libertad personal cuya afectación es más recurrida a través del proceso de hábeas corpus?

### **2.2.2. Preguntas específicas**

1. ¿Desconocen los juzgadores penales los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional relativos al respeto de los derechos conexos a la libertad personal?
2. ¿Cuál es la dimensión del debido proceso cuyo desconocimiento por los jueces penales genera el mayor número de casos de vulneración de los derechos conexos a la libertad personal?

## **2.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN**

### **2.3.1. Objetivos generales**

1. Establecer el principal ámbito en el que se vulneran los derechos conexos a la libertad personal.
2. Identificar el derecho conexo a la libertad personal cuya afectación es más recurrida a través del proceso de hábeas corpus.

### **2.3.2. Objetivos específicos**

1. Determinar si los juzgadores penales desconocen los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional relativos al respeto de los derechos conexos a la libertad personal.
2. Identificar la dimensión del debido proceso cuyo desconocimiento por los jueces penales genera el mayor número de casos de vulneración de los derechos conexos a la libertad personal.

## **2.4. JUSTIFICACIÓN**

La presente tesis tiene la siguiente justificación:

### **2.4.1. Justificación jurídica**

Nuestra investigación se justifica en la necesidad de determinar si el proceso de hábeas corpus es adecuado para restituir la afectación causada sobre la libertad personal en razón de la vulneración de otros derechos fundamentales vinculados a ella.

Si bien este planteamiento resulta hasta cierto punto complejo, el ejercicio profesional nos coloca frente a un sinfín de casos en los que se puede acreditar esta situación. Así, pues, tenemos la vulneración del debido proceso, pero también la restricción en el acceso de un

documento de identificación o el agravamiento de las condiciones en las que se cumple una pena.

Esta gama de situaciones justifican la realización del presente proyecto de investigación, ya que su cabal estudio nos permitirá avocarnos a un ámbito que hasta el momento no ha sido suficientemente desarrollado y que permitirá sentar las líneas básicas en el estudio de la plena vigencia de la libertad personal, al encontrarse vinculado este derecho a otros atributos fundamentales.

## **2.5. DELIMITACIÓN**

### **2.5.1. Delimitación por área:**

Derecho Constitucional

### **2.5.2. Delimitación geográfica:**

Perú

### **2.5.3. Delimitación dentro de la administración de justicia:**

Tribunal Constitucional

### **2.5.4. Delimitación temporal:**

Enero y febrero de 2010

## **3. MARCO TEÓRICO**

### **3.1. MARCO HISTÓRICO**

### 3.1.1. Interdicto de *homine libero exhibendo*

El antecedente más remoto del hábeas corpus lo encontramos en Roma. Así pues, tenemos la figura del *Interdicto de homine libero exhibendo*, cuyo objeto era exhibir al hombre libre que se retiene con dolo. Esta figura se otorgaba en los supuestos de restricción de la libertad de una persona libre, a efectos de ser interpuesto ante el pretor.

#### 3.1.1.1. Concepto

De acuerdo a Herrerías Tellerías, los interdictos eran “mandatos del pretor por medio de los cuales en casos particulares y determinados por el edicto, prescribía él mismo lo que debía hacer u omitirse. La demanda dirigida al pretor llevaba igualmente el nombre de *interdictum*. Entre las acciones y los interdictos existía, amén de otras diferencias, la muy principal de que en estos últimos el pretor daba inmediatamente, a petición del demandante, la orden o la prohibición que se había publicado de antemano en el edicto, es decir, se obligaba a hacer o a no hacer, según lo expresado en su edicto. En el caso de las acciones, como diferencia, entre otras, con el edicto, el pretor nombraba un juez para que éste instruyera el negocio”<sup>1</sup>.

Ya en cuanto al *interdicto de homine libero exhibendo*, Gonzáles Blanco y Álvarez Moreno señalan que “se promovía ante el pretor para el efecto de obtener que en particular que tenía secuestrado a un hombre libre lo pusiera en libertad (*poponitur tuendae libertatis causa: widelicet, ne homines liberi retineantur a quoquam*, que se propone por causa de defender la libertad: esto es, para que ninguno retenga los hombres libres)”<sup>2</sup>.

Noguera Alcalá recuerda que esta institución constituye el antecedente más remoto del hábeas corpus, el cual “concedía a todo hombre libre, púber o impúber, varón o hembra, estuviera o no sujeto a potestad ajena, recurrir al Pretor, el cual resolvía por edicto ordenar

<sup>1</sup> HERRERÍAS TELLERÍAS, Armando. “Orígenes externos del juicio de amparo”. En: Revista de la Facultad de Derecho de México. N° 19. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 1955, p. 37.

<sup>2</sup> GONZÁLES BLANCO, Carlos y ÁLVAREZ MORENO, José Ismael. “El amparo”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México D.F., 2006, p. 109.

a quien tuviere ilegalmente a otra persona exhibirla ante él (exhibe al hombre libre que retienes con dolo malo). Dicho instrumento constituye más un medio para asegurar fundamentalmente el status jurídico del hombre libre que uno destinado a establecer una garantía del individuo frente a la organización estatal”<sup>3</sup>.

Al respecto, abundan al señalar que “el efecto del *interdicto romano de homine libero exhibendo* era producir una obligación a cargo del secuestrador de exhibir materialmente a la persona del secuestrado ante el pretor, "de manera que pudiera ser visto y tocado", según términos textuales de las disposiciones relativas (*id est in publicum procedure, et videndi tangendique hominis facultatem praebere*). Desde este punto de vista la relación entre el habeas corpus y el interdicto romano es muy clara, porque los efectos de ambos procedimientos son idénticos: la presentación material del secuestrado. Sin embargo, tiene ya el interdicto romano con el habeas corpus la diferencia que concierne a que mientras el habeas corpus procedía contra particulares pero también contra autoridades, el *interdicto romano de homine libero exhibendo* sólo era procedente contra particulares”<sup>4</sup>.

Ahora bien, cabe destacar que el procedimiento era de orden sumarísimo, “dado que estaba en juego la libertad de una persona, no importando que a veces se involucrara un delito, pues separadamente y una vez puesto en libertad el sujeto y protegida, por lo tanto, su libertad, se seguía el procedimiento criminal de acuerdo con lo establecido por la ley Favia: *Neque hoc in.terdictunz aufert legis Favime executionem*”<sup>5</sup>. A su vez, la acción derivada del interdicto “traía como consecuencia sólo una resolución suspensiva y parcial, pues el fondo del asunto se seguía”<sup>6</sup>.

### 3.1.1.2. Supuestos de recurrencia

---

<sup>3</sup> NOGUERA ALCALÁ, Humberto. “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile”. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). N° 102. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1998, p. 193.

<sup>4</sup> GONZÁLES BLANCO, Carlos y ÁLVAREZ MORENO, José Ismael. “El amparo”. Op. cit., p. 110.

<sup>5</sup> HERRERÍAS TELLERÍAS, Armando. “Orígenes externos del juicio de amparo”. Op. cit., p. 40.

<sup>6</sup> Loc. cit.

Conforme expone Herrerías Tellerías, el interdicto de *homine libero exhibendo* procedía en dos supuestos:

#### **a. Particulares**

En ese supuesto, el *interdicto de homine libero exhibendo* se daba únicamente contra los particulares, es decir, “no defendía la libertad del hombre frente al Estado, pues no procedía contra las autoridades. Obligaba a las personas que privaban de la libertad a un hombre libre a exhibido ante el pretor: *Id est in publicum producere, et videnti tangendique hominis facdtatem praeberere*”<sup>7</sup>.

#### **b. Selección del beneficiario por el pretor**

Herrerías Tellerías apunta a que si bien el *interdicto de homine libero exhibendo* era general, “cuando eran varias, el pretor seleccionaba a aquélla que en su opinión debería proseguirlo: *Nemo prohibendus csf libevtati favere*”<sup>8</sup>.

### **3.1.1.3. Desarrollo en el Libro XLIII del Digesto**

Para mayor detalle, consideramos necesario presentar la redacción original del **Título XXIX del Libro XLIII del Digesto**, denominado “*De homine libero exhibendo*”, en el cual se encuentra el antecedente más remoto del hábeas corpus.

#### **a. Ley Primera: Detención arbitraria**

“Ley I.-Dice el Pretor: Exhibe el hombre libre que retienes con dolo malo.

1. Este interdicto se propone por causa de defender la libertad: esto es, para que ninguno retenga los hombres libres”.

---

<sup>7</sup> Loc. cit.

<sup>8</sup> Loc. cit.

## **b. Ley Segunda: Similitud con la condición de los siervos**

“Ley II.-No se diferencian mucho de los siervos aquellos a quienes no se les permite la libertad de ir por donde quieran”.

## **c. Ley Tercera: Relación con la Ley Favia**

“Ley III.-A lo que también miró la ley Favia: este interdicto no impidió la ejecución de la ley Favia; porque también se podrá pedir por él, y esto no obstante, proponer la acusación de la ley Favia: al contrario, el que pide por la ley Favia esto no obstante, podrá también usar de ese interdicto, y otro de la acción de la ley Favia.

1. Estas palabras: Quem liberum, se refieren a todo hombre libre, púber o impúber, varón o hembra, uno o muchos, que esté o no sujeto a ajena potestad; porque solo miramos si es libre.

2. El que tiene a otro en su potestad no se obliga por este interdicto; porque no parece que comete dolo malo el que usa de su derecho.

3. Si alguno retiene en su poder al que compró a los enemigos, no se obliga por este interdicto. Pero si le dio libertad sin recibir su importe, se ha de decir que tiene lugar el interdicto, si después que le dio la libertad lo quiere retener.

4. Si alguno retuviese al hijo que no está en su potestad, las más veces parecerá que lo hace sin dolo malo; porque la piedad paternal hace que lo retenga sin dolo malo, a no ser que el dolo sea evidente.

Por lo cual si alguno retuviese a su liberto o alumno, o al que se dio en satisfacción del daño, que aún era impúber, se ha de decir lo mismo.

Generalmente, el que tiene justa causa para retener en su poder al hombre libre, no parece que lo hace con dolo malo.

5. Si alguno retiene al que quiere ser retenido, no parece que comete dolo malo. Pero qué diremos del que retiene al que quiere ser retenido, porque es seducido o solicitado



con falacia y engaño, y no hace esto con buena y probable razón? Se dirá justamente que lo retiene con dolo malo.

6. El que ignora que tiene en su poder al hombre libre, carece de dolo malo; pero luego que lo sabe, no carece.

7. Pero si duda si es libre o siervo, o pende controversia sobre su estado, se ha de apartar de este interdicto, y tratar de la causa de su libertad; porque se determina con razón, que tenga lugar este interdicto siempre que se sabe de cierto que uno es libre. Pero si se controvirtiese sobre su estado, no conviene que se perjudique al conocimiento de otro juicio.

8. Dice el Pretor: Exhibas. Exhibir es sacar al público, y permitir que se vea y se toque el hombre. Exhibir es propiamente manifestar lo que está oculto.

9. Este interdicto compete a todos, porque a ninguno se le ha de impedir que favorezca la libertad.

10. Pero las personas sospechosas han de ser removidas con conocimiento de causa, si acaso la persona fuese tal que proceda por causa de calumnia, o se tema colusión.

11. Mas si quiere usar de este interdicto la mujer o el pupilo, solicitados por el ascendiente o pariente, por consanguinidad o afinidad, se ha de decir que se les ha de dar; para que puedan acusar en juicio público vindicando sus injurias, y las de los suyos.

12. Pero si hubiese muchos que quieran pedir al que tiene mayor interés, o al que es más idóneo, es mejor elegir el que lo es por la dignidad, parentesco o buena fe.

13. Si después que se pidió por este interdicto, quisiese otro pedir por él, es claro que no se le ha de permitir fácilmente, a no ser que pueda decir que el que pidió antes no lo hizo como debía.

Por lo cual se permitirá segunda vez el uso de este interdicto con conocimiento de causa, pues ni en los juicios públicos se permite pedir segunda vez: a no ser que el acusador primero haya sido condenado por prevaricador. Pero si el reo que fué condenado quiere más pagar el importe del pleito que exhibir el hombre, no es injusto que se pida muchas veces por este interdicto, o al mismo sin excepción, o a otro.

14. Escribe Labeon, que se ha de dar este interdicto contra el ausente; y si no se defendiese, se ha de proceder contra sus bienes.

15. Este interdicto es perpetuo.

#### **d. Ley Cuarta: Exhibición del hombre injustamente detenido**

“Ley IV.-Si alguno retuviese al hombre libre ignorando su estado, si lo retiene con dolo malo, se le precisará a que lo exhiba.

1. También dice Trebacio, que no se obliga el que compró al hombre libre con buena fe, y lo retiene.
2. El hombre libre no se debe retener en tiempo alguno con dolo malo: en tanto grado, que juzgan algunos que no se les ha de dar para que lo exhiban en un breve tiempo, en pena del que han dejado pasar.
3. Al acreedor no le compete interdicto para lo que exhiba el deudor; ni está obligado a exhibirlo el deudor que se oculta; porque se publican sus bienes por edicto del Pretor”.

#### **3.1.2. La Carta Magna (1215)**

La Carta Magna de 1215 estableció restricciones al poder consagrando el principio de la **libertad personal**. La Carta Magna disponía que ningún hombre libre podría ser detenido, preso, ni desposeído de lo que legalmente se halle en su poder, ni tampoco privado de sus libertades, sin previa ley que lo justifique.

Expedida el 15 de junio de 1215, este documento contiene los siguientes aspectos<sup>9</sup>:

##### **3.1.2.1. Sustento divino**

Así, pues, aprecia que el documento pretende sustentarse en el poder delegado de manos de Dios al señalar lo siguiente:

---

<sup>9</sup> PACHECO GÓMEZ, M. “Los derechos humanos documentos básicos”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 2000, pp. 39-49.

“Sabed que ante Dios, por el bien de nuestra alma y de la de nuestros antepasados y sucesores, para honor de Dios y exaltación de la Santa Iglesia y para mejor organización de nuestro reino, con el consejo de nuestros reverendos padres Esteban, Arzobispo de Canterbury, primado de toda Inglaterra y Cardenal de la Santa Iglesia de Roma; Enrique, Arzobispo de Dublín; Guillermo, Obispo de Londres; Pedro, Obispo de Winchester, y otros súbditos leales”.

### **3.1.2.2. Derechos de la Iglesia**

Se reconocen los siguientes derechos a favor de la Iglesia:

“En primer lugar hemos asentido ante Dios, y por esta nuestra presente carta, confirmada por nosotros y nuestros herederos para siempre, que la Iglesia de Inglaterra será libre y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades; y haremos que unos y otros sean, por tanto, observados; en consecuencia, la libertad de elecciones, que se ha creído muy necesaria para la Iglesia de Inglaterra, y por nuestra libre voluntad y agrado la hemos concedido y confirmado por nuestra carta, y obtenido la confirmación de ella por el Papa Inocencio III, antes de la discordia surgida entre Nos y nuestros barones; la cual carta observaremos y haremos que sea observada plenamente por nuestros herederos para siempre. Hemos concedido también a todos los hombres libres de nuestro reino, por Nos y nuestros herederos, para siempre todas las infrascritas libertades para que las tengan y posean, ellos y sus herederos de Nos y nuestros herederos para siempre”.

### **3.1.2.3. Ejercicio de libertades**

Se conceden las siguientes libertades a los ciudadanos de Londres:

“Los ciudadanos de Londres tendrán todas sus antiguas libertades y costumbres libres, tanto por tierra como por agua. Además, decretamos y concedemos que todas las demás ciudades, y burgos, y villas, y puertos, tengan sus libertades y costumbres libres”.

#### **3.1.2.4. Proscripción de la detención arbitraria**

Refiere lo siguiente sobre la detención personal:

“Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país”.

#### **3.1.2.5. Administración de justicia**

Sobre el particular refiere lo siguiente:

“Nombraremos jueces, comisarios, sheriffs o alguaciles tan sólo a los que conozcan las leyes del reino y los medios de observarlas bien”.

#### **3.1.2.6. Restitución de la libertad personal**

La Carta Magna refiere lo siguiente sobre la restitución de la libertad personal:

“Si alguno, sin previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado por Nos de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se los restituiremos inmediatamente; y si sobre este punto se suscitare alguna disputa, sea decidida la materia por los veinticinco barones que se mencionan más abajo en la cláusula para la conservación de la paz”.

#### **3.1.3. La Ley de Habeas Corpus (1679)**

La Ley de Hábeas Corpus fue el resultado de un singular caso descrito por Noguera Alcalá, quien detalla que “en el siglo XVII, la situación de la libertad personal se agrava, el caso paradigmático es el de los «Cinco Caballeros», consistente en que un grupo de cinco nobles ingleses fueron sometidos a prisión, por orden del Rey, ante la negativa a otorgar un

préstamo que el Parlamento no había sancionado, esto es, contraviniendo los términos de la Carta Magna. Interponiéndose el habeas corpus en su favor y siendo éste rechazado por la existencia de una orden especial del Rey, considerando que ello era suficiente causa. Este caso da lugar a la Petition of Righths, «Petición de Derechos», redactada por Sir Edward Coke, la cual impone el principio de la supremacía constitucional y muestra al Rey «el escenario de arbitrariedad y abuso que padecía el país». Esta Petición de Derechos fue aprobada por Carlos I, en junio de 1628. La petición VII y VIII se concreta en el habeas corpus, de octubre de 1640, modificado en 1679 y 1816, respectivamente”<sup>10</sup>.

Sobre la base de estas circunstancias, en 1679 se expidió la Ley de Hábeas Corpus, cuerpo normativo que establecía la siguiente protección respecto a la libertad personal:

*"Si una persona es arrestada y detenida en tiempo de receso por cualquier delito tendrá derecho por sí, o por otro en representación suya para dirigirse al lord, canciller o cualquier otro juez o magistrado, los cuales, vistas las copias de los autos de prisión o previo el juramento de haber sido denegadas dichas copias, precediendo una petición por escrito de la persona detenida o de cualquiera otra en su lugar, confirmada por dos testigos presentes en el acto de entregarla, tiene la obligación de expedir un habeas corpus que será remitido al lord canciller, juez o barón de los respectivos tribunales; y una vez presentado el writ, el funcionario o la persona a quien éste comisione presentará nuevamente el preso ante el lord canciller, los demás jueces o el designado por el susodicho writ, dando a conocer las causas de la prisión o detención. Cumplidas estas disposiciones, en dos días el lord canciller o cualquier otro juez pondrán en libertad al preso, recibiendo en garantía la suma que los jueces consideren conveniente, en atención a la calidad del preso o a la naturaleza del delito. La ley establece las penas al funcionario que no cumpla con el writ, como también la prohibición de volver a detener a la persona por el mismo delito, una vez puesto en libertad por habeas corpus".*

### **3.1.4. Habeas Corpus Amendment Act (1816)**

---

<sup>10</sup> NOGUERA ALCALÁ, Humberto. “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile”. Op. cit., p. 194.

A través del *Habeas Corpus Amendment Act* de 1816 se estableció el siguiente marco de protección sobre la libertad personal:

*"Considerando las importantes dilaciones en la respuesta de escritos de habeas corpus, en que han incurrido los sheriffs, carceleros, y otros oficiales encargados de la custodia de los súbditos del Rey que hubiesen cometido, o fuesen sospechosos de perpetrar, conductas delictivas; dilaciones llevadas a cabo a través del rechazo de ulteriores recursos (alias and pluries) de habeas corpus, y por otros subterfugios contrarios a sus deberes y a las leyes conocidas de la tierra y orientados a eludir su condescendiente obligación respecto a tales escritos, resultando en consecuencia que muchos súbditos del Rey han sido por estos hechos retenidos en prisión durante un largo período para su angustia y vejación, en supuestos en los que debían quedar en libertad bajo fianza, por lo cual, para la protección y un más rápido desagravio de todas las personas encarceladas por cualquier acto criminal, o a las que se hagan sospechosas de conductas delictivas, se declara por la Excelencia Real, por y con el consejo y consentimiento de los lores espirituales y temporales y los comunes, reunidos en el actual Parlamento".*

### **3.1.5. Hábeas corpus en Perú**

#### **a. Constitución de 1860**

El artículo 18 de la Constitución de 1860 establecía que “nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de juez competente, o de las autoridades encargadas de conservar el orden publico, exepcto infraganti delito; debiendo, en todo caso, ser puesto el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia del él, siempre que se les pidiere”.

#### **b. La Ley 2333 (1916)**

El 10 de febrero de 1916 se expidió la Ley 2333 cuyo artículo 7 establece el siguiente marco de protección sobre la libertad personal:

“Todas las garantías contenidas en el Título IV de la Constitución del Estado, darán lugar a recursos destinados a amparar a los habitantes de la República que fueren en el goce de sus libertades hacer cesar las restricciones indebidas impuestas por cualquier autoridad. Son aplicables a estos recursos las disposiciones de la Ley de Habeas Corpus en cuanto a las autoridades que deben conocer de ellos, a las personas que pueden presentarlos y a las reglas de su tramitación”.

#### **c. Constitución de 1920**

Sobre la protección de la libertad personal, el artículo 24 de la Constitución de 1920 estableció que “nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito del juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto in fraganti delito, debiendo en todo caso ser puesto el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él siempre que se les pidiere”.

#### **d. Constitución de 1933**

El artículo 56 de la Constitución de 1933 establecía que “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en flagrante delito, debiendo en todo caso ser puesto el detenido, dentro de veinticuatro horas, o en el término de la distancia a disposición del juzgado que corresponda, el que ordenará la libertad o libraré mandamiento de prisión en el término que señale la ley”.

Sin embargo, es a través de su artículo 69 en el que encontramos al hábeas corpus, al prescribir que “todos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución, dan lugar a la acción de habeas corpus”.

#### **e. Constitución de 1979**

El artículo 295 aborda de manera más precisa la tutela del hábeas corpus sobre la libertad personal al precisar que “La acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus”.

#### **f. Ley 23506**

El 7 de diciembre de 1982 se expidió la Ley 23506 (Ley de Amparo y Hábeas Corpus), cuyo artículo 6.2 establece la procedencia de las acciones de garantía –entre ellas el hábeas corpus- contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular.

Asimismo, su artículo 12 precisa que “se vulnera o amenaza la libertad individual y en consecuencia procede la acción de HC, enunciativamente en los siguientes casos: Inciso 10) El no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o el de no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite g del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución así como de las excepciones que en él se consignan”.

### **3.2. MARCO LEGISLATIVO PERUANO**

Existen dos cuerpos normativos que desarrollan ampliamente el espectro de actuación del proceso de hábeas corpus. Nos referimos a la Constitución Política y al Código Procesal Constitucional.

#### **3.2.1. Constitución Política de 1993**

La Carta Política contiene las siguientes referencias sobre el proceso de hábeas corpus:

##### **3.2.1.1. Definición del hábeas corpus**



El proceso de hábeas corpus procede de acuerdo al artículo 200.1 de la Constitución ante el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnere o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

### **3.2.1.2. Supuestos de procedencia**

Los siguientes son los supuestos que enuncia la Constitución en cuanto a la interposición de demanda de hábeas corpus.

#### **3.2.1.2.1. Amenaza o vulneración de la libertad personal**

El artículo 2 inciso 24 de la Constitución consagra la libertad y la seguridad personales. Ello amerita que el legislador establezca ocho supuestos que resguardarán los mencionados atributos y que ameritarán la interposición de la demanda de hábeas corpus al ser vulnerados:

##### **a. Seguridad Personal**

Al respecto, se expresa lo siguiente:

- *“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”<sup>11</sup>.*

##### **b. Prohibición de esclavitud, servidumbre y trata de personas**

La Carta refiere lo siguiente:

---

<sup>11</sup> Artículo 2.24.a.

- *“No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”<sup>12</sup>.*

### **c. Proscripción de la prisión por deudas**

La Constitución anota lo siguiente:

- *“No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”<sup>13</sup>.*

### **d. Principio de legalidad**

Cabe destacar que:

- *“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”<sup>14</sup>.*

### **e. Presunción de inocencia**

- *“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”<sup>15</sup>.*

### **f. Presupuestos de detención**

Se expresan los siguientes supuestos y condiciones de detención:

---

<sup>12</sup> Artículo 2.24.b.

<sup>13</sup> Artículo 2.24.c.

<sup>14</sup> Artículo 2.24.d.

<sup>15</sup> Artículo 2.24.e.

- *“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.*

*Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.*

*En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”<sup>16</sup>.*

#### **g. Prohibición sobre la incomunicación**

La Constitución Política refiere que:

- *“Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida”<sup>17</sup>.*

#### **h. Proscripción sobre la violencia**

Detalla nuestra Carta Política lo siguiente:

- *“Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el*

---

<sup>16</sup> Artículo 2.24.f.

<sup>17</sup> Artículo 2.24.g.

*examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad”<sup>18</sup>.*

### **3.2.1.2.2. Amenaza o vulneración de la tutela procesal efectiva que genere la afectación de la libertad personal**

El artículo 138 de la Constitución aborda el estudio de la **administración de justicia**, precisando que “emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”. A su vez, detalla que “en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.

Sin embargo, son conocidos los casos de afectación de los derechos procesales dentro de una causa penal que repercuten directamente sobre la libertad personal al ser este el derecho que se encuentra en juego y en discusión.

Por tal motivo, se exige que los juzgadores resguarden los siguientes derechos fundamentales de orden adjetivo en las causas penales, a efectos de no ver restringida ilegalmente la libertad personal como consecuencia de las irregularidades suscitadas en el trámite:

#### **a. Independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional**

Al respecto, la Constitución refiere lo siguiente:

- *“La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni*

---

<sup>18</sup> Artículo 2.24.h.

*modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”<sup>19</sup>.*

#### **b. Debido proceso y tutela jurisdiccional**

La protección de este derecho es realizada sobre la base de esta referencia:

- *“Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”<sup>20</sup>.*

#### **c. Motivación de resoluciones judiciales**

Este derecho es resguardado por la siguiente cláusula:

- *“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”<sup>21</sup>.*

#### **d. Proscripción de la analogía de la ley penal**

Se establece lo siguiente en torno a ello:

- *“El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos”<sup>22</sup>.*

---

<sup>19</sup> Artículo 139.2.

<sup>20</sup> Artículo 139.3.

<sup>21</sup> Artículo 139.5.

<sup>22</sup> Artículo 139.9.

A ello, cabe agregar:

- *“El principio de no ser penado sin proceso judicial”<sup>23</sup>.*

#### **e. Conflicto entre leyes penales**

El cual se dirime a través de la siguiente premisa:

- *“La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”<sup>24</sup>.*

#### **f. Condena**

Se precisa el respeto de:

- *“El principio de no ser condenado en ausencia”<sup>25</sup>.*

#### **g. Cosa juzgada**

Al respecto, se expresa:

- *“La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”<sup>26</sup>.*

#### **h. Derecho de defensa**

---

<sup>23</sup> Artículo 139.10.

<sup>24</sup> Artículo 139.11.

<sup>25</sup> Artículo 139.12.

<sup>26</sup> Artículo 139.13.

El cual es protegido a través de esta cláusula:

- *“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”<sup>27</sup>.*

#### **i. Detención**

Sobre la cual opera el siguiente mandato:

- *“El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”<sup>28</sup>.*

#### **j. Derecho de los reclusos y sentenciados**

Al respecto se señala lo siguiente:

- *“El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados”<sup>29</sup>.*

Asimismo, se establece:

- *“El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”<sup>30</sup>.*

#### **3.2.1.3. Código Procesal Constitucional**

---

<sup>27</sup> Artículo 139.14.

<sup>28</sup> Artículo 139.15.

<sup>29</sup> Artículo 139.21.

<sup>30</sup> Artículo 139.22.

Vigente desde 2004, el Código Procesal Constitucional contiene dos bloques destinados a la protección de los derechos susceptibles de ser recurridos a través del proceso de hábeas corpus.

#### **3.2.1.3.1. Disposiciones generales sobre el hábeas corpus**

En este bloque encontramos una serie de disposiciones que regulan su marco de actuación dentro de los procesos constitucionales.

##### **a. El hábeas corpus como proceso constitucional**

El Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente:

- *“El presente Código regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia, previstos en los artículos 200 y 202 inciso 3) de la Constitución”.*

##### **b. Fines del proceso de hábeas corpus**

El cual se encuentra descrito por el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional:

- *“Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.*

##### **c. Principios que orientan al proceso de hábeas corpus**



Descritos por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional:

- *“Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, intermediación y socialización procesales”.*

#### **d. Órganos competentes para conocer el proceso de hábeas corpus**

De acuerdo al artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional:

- *“Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente Código”.*

#### **e. Interpretación de los derechos recurridos a través del hábeas corpus**

El artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional refiere lo siguiente:

- *“El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.*

#### **f. Reposición del derecho vulnerado a través del hábeas corpus**

Por su parte, el artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente:

- *“Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la*

*violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”.*

#### **g. Cese de la agresión durante el trámite del proceso de hábeas corpus**

A su vez, señala el artículo 1 del Código Procesal Constitucional que:

- *“Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda”.*

#### **h. Procedencia de la demanda de hábeas corpus**

Sobre el particular, el artículo 1 del Código Procesal Constitucional refiere:

- *“Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo”.*

#### **i. Hábeas corpus contra resoluciones judiciales**

El artículo 4 del Código Procesal Constitucional dispone:

- *“El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.*

A su vez, señala que se entiende por tutela procesal efectiva:

- *“Aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.*

### **3.2.1.3.2. Disposiciones particulares sobre el hábeas corpus**

#### **a. Supuestos de interposición de la demanda de hábeas corpus**

El artículo 25 del Código Procesal Constitucional establece los **supuestos** frente a los cuales procede la demanda de hábeas corpus, los cuales son:

- *“La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.*
- *El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.*
- *El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.*

- *El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.*
- *El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.*
- *El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.*
- *El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan.*
- *El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia.*
- *El derecho a no ser detenido por deudas.*
- *El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.*
- *El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución.*
- *El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.*

- *El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.*
- *El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el juez.*
- *El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución.*
- *El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.*
- *El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena”.*

#### **b. Derechos conexos a la libertad personal**

Refiere el artículo 25 del Código Procesal Constitucional lo siguiente en torno a los derechos conexos a la libertad personal:

- *“También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”.*

#### **c. Legitimación para la interposición de la demanda**

Al respecto, el artículo 26 del Código Procesal Constitucional señala:

- *“La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá*

*firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo”.*

#### **d. Demanda de hábeas corpus**

El artículo 27 del Código Procesal Constitucional señala lo siguiente:

- *“La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos”.*

#### **e. Competencia para el conocimiento de la demanda de hábeas corpus**

El artículo 28 del Código Procesal Constitucional refiere:

- *“La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin observar turnos”.*

#### **f. Turno sobre el conocimiento de la demanda de hábeas corpus**

Sobre el turno del conocimiento de la demanda de hábeas corpus, el artículo 12 refiere:

- *“El inicio de los procesos constitucionales se sujetará a lo establecido para el turno en cada distrito judicial, salvo en los procesos de hábeas corpus en donde es competente cualquier juez penal de la localidad”.*

#### **g. Competencia del Juez de Paz**

El artículo 29 dispone sobre la competencia del Juez de Paz:

- *“Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su sede el Juzgado donde se interpuso la demanda este dictará orden perentoria e inmediata para que el Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación”.*

#### **h. Trámite en caso de detención arbitraria**

El artículo 30 refiere sobre el trámite en caso de detención arbitraria:

- *“Tratándose de cualquiera de las formas de detención arbitraria y de afectación de la integridad personal, el Juez resolverá de inmediato. Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verificada la detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando constancia en el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión para que cumpla la resolución judicial”.*

#### **i. Trámite en casos distintos a la detención arbitraria**

El artículo 31 dispone sobre el trámite en casos distintos lo siguiente:

- *“Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración de la integridad personal, el Juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano en el término de un día natural, bajo responsabilidad.*

*La resolución podrá notificarse al agraviado, así se encontrare privado de su libertad. También puede notificarse indistintamente a la persona que interpuso la demanda así como a su abogado, si lo hubiere”.*

#### **j. Demanda de hábeas corpus por desaparición forzada**

El artículo 32 dispone el trámite en caso de desaparición forzada:

- *“Sin perjuicio del trámite previsto en los artículos anteriores, cuando se trate de la desaparición forzada de una persona, si la autoridad, funcionario o persona demandada no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el Juez deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a jueces del Distrito Judicial donde se presuma que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Asimismo, el Juez dará aviso de la demanda de hábeas corpus al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes”.*

Sin perjuicio de lo anterior, precisa:

- *“Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado”.*

#### **k. Normas especiales de procedimiento del hábeas corpus**

Las cuales están detalladas por el artículo 33:

- *“No cabe recusación, salvo por el afectado o quien actúe en su nombre.*



- *No caben excusas de los jueces ni de los secretarios.*
- *Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales.*
- *No interviene el Ministerio Público.*
- *Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en cualquier estado del proceso.*
- *El Juez o la Sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera.*
- *Las actuaciones procesales son improrrogables”.*

## **I. Contenido de sentencia fundada en el proceso de hábeas corpus**

El artículo 34 refiere lo siguiente sobre el contenido de sentencia fundada:

- *“La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho; o*
- *Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si el Juez lo considerase necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la ejercían; o*
- *Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del Juez competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención; o*
- *Que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse”.*

### **m. Apelación de sentencia en el proceso de hábeas corpus**

La cual es desarrollada a través del artículo 35:

- *“Sólo es apelable la resolución que pone fin a la instancia. El plazo para apelar es de dos días”.*

### **n. Trámite de apelación de sentencia en el proceso de hábeas corpus**

El artículo 36 dispone sobre el trámite de apelación lo siguiente:

- *“Interpuesta la apelación el Juez elevará en el día los autos al Superior, quien resolverá el proceso en el plazo de cinco días bajo responsabilidad. A la vista de la causa los abogados podrán informar”.*

## **3.3. TRATADOS INTERNACIONALES**

A continuación se detallará la protección sobre la libertad personal contenida en la Declaración universal de derechos humanos, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Declaración americana de los derechos y deberes del hombre y Convención americana sobre derechos humanos.

### **3.3.1. Declaración universal de derechos humanos**

Su artículo 8 establece lo siguiente:

*“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.*

### **3.3.2. Pacto internacional de derechos civiles y políticos**

El artículo 9.4 del Pacto establece:

*“Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”.*

### **3.3.3. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre**

Su artículo XXV, inciso 3, relativo a la detención arbitraria refiere lo siguiente:

*“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.*

### **3.3.4. Convención americana sobre derechos humanos**

El artículo 7.6 expresa lo siguiente:

*“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.*

Por su parte, su artículo 25 establece sobre la protección judicial que:

*“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.*

### **3.4. MARCO TEÓRICO**

#### **3.4.1. CONCEPTO DE HÁBEAS CORPUS**

Consagrado en el artículo 200º inciso 1 de la Constitución, el hábeas corpus se erige como una garantía constitucional debido a que su objeto de actuación es la tutela de la libertad personal, consagrada en el artículo 2º inciso 24 de la Carta Política.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos con ella, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”<sup>31</sup>.

Su incorporación en nuestro ordenamiento obedece a que, conforme refiere García Belaúnde, “a mediados de la década del veinte, el célebre Duguit, anotaba no sin razón, que el respeto a la libertad individual era el supuesto necesario para el ejercicio de los demás derechos. Esa afirmación hecha dentro de un contexto distinto y distante, adquiere actualidad en nuestro continente”<sup>32</sup>.

Así pues, “todavía son frecuentes los abusos de los derechos humanos y ellos se dan sobremanera en lo relacionado con la libertad individual en todas sus variantes. Más aún, todo régimen que actúe bajo el respaldo de la fuerza, lo primero que hace es afectar los

<sup>31</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 08688-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>32</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. En: *Revista de estudios políticos*. N° 97. Madrid, 1997, p. 115.

derechos humanos y de manera especial la libertad individual. En tal sentido, en continentes como los nuestros, inestables y movedizos, la libertad personal es fundamental y se ve de continuo avasallada. Por eso es que en nuestra América el Habeas Corpus, a diferencia de lo sucedido en otras latitudes, ha adquirido un relieve singular y se le considera como instrumento fundamental para el funcionamiento de todo sistema democrático. Eso puede explicar no sólo su desarrollo y vigencia —por más que se le pueda desconocer en la práctica— sino también sus contornos y su especial desarrollo e incluso lo que podríamos llamar convencionalmente sus deformaciones, que en más de una oportunidad ha sido advertidas por el observador extranjero”<sup>33</sup>.

En esa medida el referido autor señala que el hábeas corpus “es una institución, si por tal entendemos una idea de obra o de empresa que se realiza y dura en un medio social y cuya implementación exige un poder que le depare un medio de acción que es aceptado por una determinada comunidad histórica”<sup>34</sup>. Ello le permite sostener a Susana Castañeda, “el hábeas corpus ha constituido, y constituye en diversos ordenamientos jurídicos, el mecanismo específico de protección de la libertad personal. En el caso peruano, en su evolución histórica, el ámbito de protección se ha extendido a la defensa de la libertad individual y derechos constitucionales conexos”<sup>35</sup>.

En efecto, el hábeas corpus es un proceso que no restringe su ámbito de acción en la libertad personal, sino que extiende su actuación hacia derechos conexos a dicha libertad, en razón de que —como señala Landa Arroyo— “supone la existencia de un núcleo duro de derechos fundamentales en torno a la libertad personal, directamente tutelados por el hábeas corpus, tales como la libertad y seguridad personales, la integridad personal y la libertad de tránsito, las cuales muchas veces son vulneradas en conexión con otros derechos fundamentales”<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Loc. cit.

<sup>34</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en el Perú”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1979, pp. 104-105.

<sup>35</sup> CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés. “Prólogo”, en *Proceso de hábeas corpus*, Grijley, Lima, 2008, p. 7.

<sup>36</sup> LANDA ARROYO, César, “El hábeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional peruano”, en *Constitución y fuentes del Derecho*, Palestra, Lima, 2006, p. 401. Citado por AA.VV. “Proceso de hábeas corpus”, *Gaceta Jurídica*, Lima, 2008, p.p. 10-11.

La experiencia comparada nos permite apreciar un concepto sobre el hábeas corpus, al definirlo como “un mecanismo de control externo, puesto que está a cargo de funcionarios que no conocen la actuación, no tienen ninguna injerencia en el proceso, no han ordenado la captura del imputado, ni este se encuentra a su disposición”<sup>37</sup>. Ello responde a que el proceso de hábeas corpus “se define como la acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolonga ilícitamente la privación de su libertad”<sup>38</sup>.

Así, pues, el colegiado ha precisado que “el inciso 1) del artículo 200° de la Constitución Política del Estado ha creado el procedimiento de hábeas corpus como remedio procesal destinado a la protección de la libertad individual y de los derechos conexos con él. Como tal, tiene por propósito esencial, aunque no exclusivo, tutelar al individuo ante cualquier privación arbitraria del ejercicio de su derecho a la libertad individual y, particularmente, de la libertad locomotora. Sin embargo, allí no culmina su objetivo, pues también mediante este remedio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente”<sup>39</sup>.

Es de destacar que la inclusión del hábeas corpus en la Carta Política –afirma Quispe Astoquilca, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional– encuentra “sustento constitucional [...] en el título denominado ‘garantías constitucionales’. Si bien no es una garantía constitucional en sentido estricto, sino más bien una de derechos constitucionales, el hecho de proteger derechos reconocidos en la norma constitucional como es el caso de la libertad individual; en buena cuenta lo que pretende es asegurar la vigencia efectiva de la norma fundamental”<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE, Lynett. “El proceso penal”. Universidad del Externado. Bogotá, 1995, pp. 79-80.

<sup>38</sup> GARZÓN DIAZGRANADOS, Tulia y GUERRA TAMARA, Angélica. “Privación de la libertad y responsabilidad del Estado”. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2000, p.17.

<sup>39</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00726-2002-HC/TC, f.j. 2.

<sup>40</sup> QUISPE ASTOQUILCA, Carlos Luis. “El hábeas corpus conexo”, en *Jus Jurisprudencia*, N° 2, Grijley, Lima, 2008, p. 260.

Por ello, Noguera Alcalá ha señalado que el hábeas corpus “abre las posibilidades de demandar ante órganos jurisdiccionales la amenaza, perturbación o privación del derecho a la libertad personal buscando preservarlo o restablecerlo, siendo así un medio idóneo para que el derecho a la libertad personal y seguridad individual sea efectivo en toda circunstancia que sea contraria a la Constitución y las leyes, constituyéndose en una garantía jurisdiccional o remedio procesal específico formando parte de lo que Cappellatti y Fix Zamudio denominan ‘jurisdicción Constitucional de la libertad’<sup>41</sup>.

Esto responde a la naturaleza constitucional de este proceso, ya que tiene por objeto “reponer las cosas o la situación al estado anterior a la violación (...) del derecho fundamental; reparar el daño causado”<sup>42</sup>.

Como vemos, el hábeas corpus se constituye en un proceso constitucional dirigido a tutelar la libertad individual y los derechos conexos a ella, sustentando su marco de actuación no solo en el contenido del artículo 200° inciso 1 de la Carta Política, sino en que a través de dicho proceso se tutelaré la libertad individual, sea que esta haya sido vulnerada o exista algún acto u omisión de la que se desprenda la realización de una amenaza cierta e inminente de realización en torno a la libertad individual o a algún derecho conexo.

### **3.4.2. VINCULACIÓN CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

El estudio del hábeas corpus se encuentra innegablemente vinculado con la defensa de los derechos fundamentales. Ello lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre una serie de causas tramitadas en procesos de hábeas corpus.

Así, por ejemplo, tenemos las **implicancias de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico**, al señalar que “*los derechos [fundamentales] constituyen componentes estructurales básicos del conjunto del orden jurídico objetivo. Se ha*

<sup>41</sup> NOGUERA ALCALÁ, Humberto. “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile”. Op. cit., p. 202.

<sup>42</sup> DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Hábeas corpus y personas privadas de libertad”. Lima, 2005, p. 10.

*reconocido el concepto de garantías para referirse a instrumentos adjetivos para hacer efectivos el ejercicio de los derechos reconocidos, entre los cuales cuenta, en especial, el proceso. Se les ha considerado como las seguridades jurídico-institucionales que la propia normatividad señala para posibilitar la vigencia de los derechos y libertades reconocidos u otorgados, destacando la oponibilidad erga omnes”<sup>43</sup>.*

De igual manera, el colegiado ha expuesto sobre las **implicancias de los derechos fundamentales en el poder público**, al precisar que *“el constitucionalismo contemporáneo se ha caracterizado por la voluntad de atribuirle una efectiva fuerza normativa a los derechos y libertades reconocidos en las Normas Constitucionales. La concepción de los derechos fundamentales determina, de este modo, la propia significación del poder público, al existir una íntima relación entre el papel asignado a tales derechos y el modo de organizar y ejercer las funciones estatales”<sup>44</sup>.*

En ese sentido, los derechos fundamentales son entendidos como **principios fundamentales** del ordenamiento, debido a que *“la Constitución ha consagrado dos principios fundamentales: uno político y otro jurídico; el primero, fundado en la soberanía popular, en virtud del cual su opción es por una democracia militante, que no acepta el abuso del ejercicio de derechos en desmedro del orden jurídico; y el segundo, fundado en la supremacía constitucional, en virtud del cual los derechos fundamentales de quienes atenten contra el Estado Constitucional de Derecho y el orden social pueden ser restringidos razonable y proporcionalmente”<sup>45</sup>.*

Para ello es necesario realizar la **interpretación pro homine en la eficacia de los derechos fundamentales**, entendida como que *“corresponde explicar qué deberes habían de cumplir los entes privados y públicos. La eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales obliga que, tanto en el ámbito estatal como en el privado, la interpretación pro homine autorice el desarrollo verdadero de la persona, amén de las circunstancias que*

---

<sup>43</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2877-2005-HC, FJ. 11

<sup>44</sup> Loc. cit., F.J. 15.

<sup>45</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 0003-2005-AI, FJ. 371



*pueden afectar su libre determinación, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución*”<sup>46</sup>.

Sin perjuicio de lo expresado, **los derechos fundamentales contienen límites**, puesto que *“ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto, por lo que el ejercicio de los derechos fundamentales puede ser objeto de la imposición de límites, ya sea para armonizar su ejercicio con otros derechos de su mismo rango, ya sea para lograr la efectividad de otros bienes, principios o valores constitucionales”*<sup>47</sup>.

Ello permite la **justificación de la intervención sobre los derechos fundamentales**, ya que *“la intervención en el ámbito prima facie protegido por un derecho fundamental, no obstante, no se constituye como una violación. Los derechos pueden ser limitados; sin embargo, para que una limitación no devenga en una violación constitucionalmente prohibida, es preciso que la intervención se encuentre justificada. La justificación constitucionalmente necesaria de una intervención en el ámbito de un derecho fundamental depende del régimen jurídico al que el derecho limitado se encuentre sujeto. En el caso de la libertad física, intervenido con la eventual aplicación de la pena contemplada en la disposición impugnada, esa justificación debe absolverse desde una doble perspectiva”*<sup>48</sup>.

En esa medida, los **procesos constitucionales** se erigen en mecanismos que permiten tutelar los derechos fundamentales, puesto que “ofrecen una clara especificidad dada por su materia (preceptos constitucionales) y por su finalidad (preservar el ordenamiento constitucional) que imponen un tratamiento procesal coherente y unificado. La posición del juez constitucional es tan singular que requiere de instrumentos específicos, diferentes de los medios procesales ordinarios. No sólo está por cumplir un rol trascendente sino que el ordenamiento político se halla comprometido. De allí que sea teórica y prácticamente

---

<sup>46</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 1776-2004-AA, FJ. 15.

<sup>47</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2877-2005-HC, FJ. 43.

<sup>48</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 0003-2005-AI, FJ. 225.

inconcebible la dispersión de instrumentos procesales de defensa de la Constitución que presenta el Derecho Constitucional”<sup>49</sup>.

Este argumento se desprende del **principio de supremacía constitucional**, el cual significa “que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella y no puede contrariarla. En el orden político se constituye en la fuente de legitimación del poder político, pues lleva implícita toda una filosofía que sirve de orientación no sólo a los gobernantes sino también a los gobernados”<sup>50</sup>

### 3.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL HÁBEAS CORPUS

Entre sus características, Noguera Alcalá considera adecuado señalar las siguientes:

- “a) **imprescriptibilidad**, no se pierde el derecho a accionar por el transcurso del tiempo;
- b) **inalienabilidad** (no es sujeto de transferencia a otros);
- c) **irrenunciabilidad**, no puede ser renunciado;
- d) **universalidad**, corresponde a todos los seres humanos;
- e) **inviolabilidad**, no admite ser limitado o afectado en su esencia;
- f) **efectividad**, es una exigencia derivada de las convenciones y constituciones, que requieren su realización eficaz;
- g) **interdependiente y complementaria**, se interrelaciona y apoya con otros derechos;
- h) **jurisdiccionalidad**, la tramitación y decisión corresponde a órganos jurisdiccionales; tribunales o Cortes Constitucionales;

<sup>49</sup> DÍAZ RICCI, Sergio. “Necesidad de un Código Procesal Constitucional”. En: VEGA GÓMEZ, Juan y CORZO SOSA, Edgar (Coordinadores). En: *Instrumentos de tutela y justicia constitucional*. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 2002, p. 156.

<sup>50</sup> RIVERA SANTIVANEZ, José. “Supremacía constitucional y sistemas de control de constitucionalidad”. En: CASTAÑEDA OTSU, Susana (Coordinadora). “Derecho Procesal Constitucional”. Jurista editores. Lima, 2003, p. 19.

i) **informalidad**, se debe centrar en lo sustantivo”<sup>51</sup>.

El fundamento de estas características lo encontramos en la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional de Colombia. Así, pues, el colegiado refiere lo siguiente sobre el hábeas corpus:

*“Una de las garantías más importantes para tutelar la libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el derecho de Habeas corpus, el cual no podrá ser suspendido ni limitado en ninguna circunstancia. La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la norma y le otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad”*<sup>52</sup>.

Sobre sus alcances, la Corte refiere lo siguiente:

*“cuyos alcances tienen por destino el definir si la captura se realizó con fundamentos ilegales de cualquier género, que se ocupa de las detenciones practicadas sin supuestos materiales que las justifiquen, o de las que han sido dispuestas con vulneración de las garantías constitucionales preestablecidas, o por haberse excedido en el plazo autorizado legalmente para la detención policial”*<sup>53</sup>.

No obstante, refiere que:

*“si las causales de Habeas corpus son las mismas de la libertad provisional y si éstas no pueden en este caso invocarse para tal efecto, el Habeas corpus desaparece por sustracción de materia, y si el Habeas corpus no procede tampoco para revisar la legalidad de las providencias judiciales que hubieren decidido sobre la privación de la libertad de los detenidos por cuenta de la antigua jurisdicción de orden público, entonces*

---

<sup>51</sup> Ibídem, p. 204.

<sup>52</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-620 de 2001.

<sup>53</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-010 de 1994.

*nunca habrá Habeas corpus, porque precisamente la fuente de violación de la libertad, que da origen a esta secular institución, son las providencias judiciales que de manera irregular nieguen la libertad*”<sup>54</sup>.

#### **3.4.4. LA LIBERTAD PERSONAL COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DEL HÁBEAS CORPUS**

El objeto de protección del hábeas corpus se delimita a la libertad personal y a los derechos conexos a ella.

##### **3.4.4.1. Libertad personal**

Consagrada en el artículo 2º inciso 24 de la Constitución Política, la libertad personal “ampara el estado de libertad física o corporal de la persona, entendido como una situación en la cual ella se encuentra libre de medidas como la detención, el arresto o el internamiento. Se protege la facultad de la persona de autodeterminar su situación en el espacio o, más precisamente, el derecho a no ser obligada a permanecer en un lugar determinado. Dicho [en otras palabras], se tutela el derecho a abandonar el lugar donde uno se encuentre; el derecho a marcharse”<sup>55</sup>.

Cabe indicar que además del reconocimiento que nuestra legislación realiza, la supranacional también lo hace, conforme se colige del dicho del Tribunal Constitucional al mencionar que el hábeas corpus “garantiza [...] la libertad personal ante cualquier restricción arbitraria (artículo 9º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 7º.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos)”<sup>56</sup>.

Ya en lo que resulta pertinente al campo de actuación de este proceso constitucional, el Tribunal sostiene que “el derecho reconocido en el inciso 24 del artículo 2º de la

<sup>54</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-557 de 1992.

<sup>55</sup> CASAL, Jesús María. “Libertad personal, seguridad individual y debido proceso en Venezuela”, en *Ius et praxis*, Vol. 5, Nº 1, Universidad de Talca, Talca, 1999, p. 167.

<sup>56</sup> Sentencia recaída en el Expediente Nº 08323-2005-HC/TC, f.j. 7.

Constitución protege la dimensión personal de la libertad física. Garantiza a todos, nacionales o extranjeros, la indemnidad frente a injerencias ilegales o arbitrarias que puedan perturbar el desarrollo de la vida individual, familiar o social”<sup>57</sup>.

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que la libertad personal no solo es un derecho subjetivo, sino “también constituye uno de los valores esenciales de nuestro Estado constitucional de Derecho, pues se instituye como base de diversos derechos fundamentales y justifica la propia organización constitucional”<sup>58</sup>.

Lo dicho en el párrafo precedente nos permite hacer nuestra la mención del colegiado, al señalar que “desde una concepción restringida, el hábeas corpus se entiende vinculado, únicamente, a la protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de derechos que se concentran en torno a dicho derecho”<sup>59</sup>. Como vemos, la libertad individual se encuentra dentro del marco primigenio de protección del hábeas corpus, ya que tutela todo tipo de acto o de omisión arbitraria que limite la libertad locomotora del ser humano.

Ello se corrobora al sostenerse que este derecho “garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias o ilegales. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad se extienden a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen y de la autoridad o persona que la haya efectuado”<sup>60</sup>.

Ello permite afirmar que “la plena vigencia del derecho a la libertad personal es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos

---

<sup>57</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 07039-2005-HC/TC, f.j. 16.

<sup>58</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06142-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>59</sup> QUISPE ASTOQUILCA, Carlos Luis. “El hábeas corpus conexo”, cit., p. 262.

<sup>60</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08323-2005-HC/TC, f.j. 7.

fundamentales”<sup>61</sup> y, en consecuencia, determina “toda demanda de hábeas corpus mediante la que se alegue la existencia de un reclutamiento ilegal, resultará por definición una violación a la libertad individual y por ende susceptible de tutela en el ámbito de dicho proceso constitucional cuando se verifique la falta de consentimiento por parte de la persona, pues establecer la obligación de participar en una actividad definida como voluntaria restringe de una manera u otra el ejercicio de la libertad individual de cada persona”<sup>62</sup>.

#### **3.4.4.2. Restricción de la libertad personal**

De lo dicho anteriormente, se desprende que procederá la demanda de hábeas corpus cuando se aprecie que un particular o un agente estatal limiten este derecho sin que medien criterios de razonabilidad que determinen la legalidad del mandato.

No obstante, debemos señalar que la libertad personal puede ser restringida. Para ello, deberán de mediar parámetros esenciales de restricción legal de este derecho, tales como los establecidos en el artículo 2º inciso 24 literal f) de la Carta Política:

##### **a. Detención judicial preventiva**

Conforme señala el mencionado artículo de la Constitución, a través de un mandato escrito y motivado de una autoridad judicial se podrá restringir la libertad personal. A fin de establecer la motivación, resulta imprescindible recurrir al artículo 139º inciso 5 de la Constitución que consagra el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Como señala Castillo Córdova, “el mandato de detención se convierte en una de las piezas claves para determinar afectaciones indebidas a la libertad individual, en su versión de libertad locomotora”<sup>63</sup>. Señala el autor que “la justificación que legitima la detención de un

---

<sup>61</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00019-2005-AI/TC, f.j. 11.

<sup>62</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 04388-2006-HC/TC, f.j. 3.

<sup>63</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”, Palestra, Lima, 2006, T. II, p. 539.

procesado sin que haya sentencia, es que con esa medida se posibilita la consecución de la finalidad del proceso penal. Significa esto que el procesamiento en libertad del denunciado supone un verdadero peligro para la consecución de la mencionada finalidad”<sup>64</sup>.

En tal sentido, se trata de una medida excepcional, ya que no es la regla general, en atención a que –como mencionaremos a continuación- nuestra legislación penal establece la concurrencia de ciertos requisitos para que proceda. En efecto, es en este punto que entra a tallar el contenido del artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991, el cual establece los siguientes **requisitos que deberán de obrar en todo mandato de detención**:

- **Suficiencia probatoria:**

Ello determina que el juzgador haya incorporado suficientes elementos probatorios de los que se desprenda la presunta vinculación de quien será detenido con el ilícito.

- **Sanción a imponerse**

El inciso 2 del artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991 establece que otro requisito que constituirá la motivación del mandato de detención será que la sanción a imponerse sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente del delito.

- **Peligro procesal**

El inciso 3 del mencionado artículo establece otro requisito que deberá constatararse en toda resolución que ordene la restricción de la libertad personal. Nos referimos al peligro procesal, concebido como aquella categoría atribuida a las personas que de cuyos actos se desprenda todo tipo de actuación temeraria, de dilación innecesaria o de elusión a la acción de la justicia.

---

<sup>64</sup> Loc. cit.

Este requisito resulta de suma importancia, ya que –como señala Castillo Córdova– para que el juez determine el peligro procesal, deberá de evaluar dos elementos: “el sujeto procesado (sus antecedentes penales o judiciales, su patrimonio, su nivel cultural y su formación personal, su entorno familiar y social, etc); y las circunstancias que definen el caso concreto (si ha sido un delito con pluralidad de agentes, si no se han conseguido totalmente los elementos de prueba, etc.)”<sup>65</sup>.

**Cuando no se acredite la concurrencia de estos tres requisitos para decretar la detención judicial preventiva, nos encontraremos frente a un claro supuesto de vulneración de la libertad personal, que deberá de ser tutelado a través del proceso de hábeas corpus.** Caso contrario, de mediar estos tres requisitos, se podrá considerar que la restricción de la libertad personal ha sido conforme a Derecho. Frente a esta situación, si es que arriba una demanda de hábeas corpus, esta debe de ser desestimada en razón de que no se acredita la vulneración de la libertad personal.

#### **b. Detención realizada por efectivos policiales en caso de flagrancia delictiva**

Como señala Teresa Molina, flagrancia “es la calidad de flagrante, y flagrante significa que se está ejecutando actualmente, en el mismo momento de estarse cometiendo el delito, sin que el autor haya podido huir. Un delito será, por tanto, flagrante en el mismo momento que se comete, después de lo cual dejará de serlo”<sup>66</sup>.

A su vez, Castillo Córdova señala que “se entiende que existe detención por flagrante delito cuando existe comisión actual del delito y en esas circunstancias el autor es descubierto y detenido; o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el delito; o cuando el agente es sorprendido con objetos o huellas que revelan que viene de ejecutarlo”<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> *Ibíd.*, p. 542.

<sup>66</sup> MOLINA, Teresa, “La entrada y registro practicada por la policía en el supuesto de la flagrancia y la posesión de drogas en domicilio particular”, en *Anuario jurídico y económico escorialense*, Nº 37, Real Centro Universitario escorial, Madrid, 2004, p. 141.

<sup>67</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”, p. 547.



Para ahondar en ello, recurrimos a Franco Alzamora, quien considera que para determinar la flagrancia delictiva debe tomarse en consideración los siguientes elementos:

- “La actualidad de la comisión delictiva está representada por lo que se ha denominado ‘**inmediatez temporal**’.
- El otro requisito, la ‘**inmediatez personal**’, está representado por la presencia del imputado en el lugar de los hechos.
- La evidencia se presenta cuando la autoridad policial presencia la ejecución del delito, total o parcialmente, o advierte -en atención a la temporalidad y aun cuando no ha presenciado el propio hecho delictivo- que el delincuente viene de ejecutarlo en esos momentos.
- Por lo general, en atención a las necesidades de la actividad policial, la flagrancia en sentido estricto no sólo abarca el momento mismo de la comisión del delito sino también la *cuasiflagrancia*, es decir, el instante posterior a la ejecución del mismo (cuando ha transcurrido un escaso lapso de tiempo entre su realización y el inicio de la persecución policial, o cuando el imputado es sorprendido con los efectos o instrumentos del delito)”<sup>68</sup>.

La detención efectuada por la Policía Nacional, sea en flagrancia delictiva o con motivo de una resolución judicial, no deberá de extenderse de las 24 horas o de 15 días (en delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo o espionaje). **En caso que la detención se prolongue más allá del máximo legal, nos encontraremos frente a una ilegítima restricción de la libertad personal**, pues como establece el artículo 2º inciso 24 literal f) de la Constitución, vencido dicho término, el detenido debe de ser puesto a disposición del juez correspondiente. *En tal sentido, procederá la interposición de la correspondiente demanda de hábeas corpus, en resguardo del derecho a la libertad personal, cuyo objeto será la reversión del estado ilegal de cosas, es decir, que el afectado sea puesto a disposición del juzgador.*

---

<sup>68</sup> FRANCO ALZAMORA, Carlos, “Consideraciones de carácter legal sobre la detención policial”, en *Revista de la Policía Nacional del Perú*, Nº 22, Lima, 1995, p. 25.

### **3.4.4.3. Principio de razonabilidad para evaluar la restricción de la libertad personal en un proceso penal**

Si bien el artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991 establece los requisitos que deben de confluir para la ejecución del mandato de detención, es claro que **existe cierta incertidumbre respecto a la determinación del peligro procesal.**

Aunque ya hemos mencionado, valiéndonos del comentario de Castillo Córdova, los factores que determinarían la existencia del peligro procesal, es cierto que **tal peligro deberá de ser medido a la luz de las particulares circunstancias de cada caso en concreto.**

Por tal motivo, el juzgador deberá de valerse de un parámetro esencial para la determinación del peligro procesal y así evitar una ilegal intromisión sobre la libertad personal del procesado, a fin de evitar la recurrencia al proceso de hábeas corpus en aras de retrotraer los hechos al momento anterior a su vulneración. **Dicho parámetro lo encontramos en el principio de razonabilidad.**

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que **“el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su razonamiento”<sup>69</sup>.**

En tal sentido, el juzgador deberá de apreciar el presunto “peligro procesal” tomando en consideración la actuación del procesado y las consecuencias que traería la expedición del mandato de detención o la ampliación del mismo en el desarrollo del proceso. Por tal motivo, son dos los factores a ser evaluados por el principio de razonabilidad: a) las circunstancias personales y actuación del procesado y b) la consecución de un objetivo constitucionalmente legítimo a través de la restricción de la libertad personal, cual es el normal desarrollo del proceso, en cuanto a celeridad y resguardo del debido proceso y demás garantías de orden procesal. En caso que ambos supuestos confluyan, el juez estará

---

<sup>69</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02192-2004-AA, F.J. 18.

legitimado a expedir el mandato de detención o a ampliarlo, ya que dicha resolución se encontrará debidamente fundamentada, resguardando el contenido del artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política.

### **3.4.5. TIPOLOGÍA DE HÁBEAS CORPUS**

Existen ocho categorías de hábeas corpus, las cuales son las siguientes:

#### **3.4.5.1. Hábeas corpus reparador**

Esta modalidad se utiliza, conforme ha establecido el Tribunal Constitucional, “cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc. En puridad, el hábeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida”<sup>70</sup>.

De acuerdo a Castillo Córdova, “la ampliación de los supuestos en los que procede el hábeas corpus, ha llevado a distinguir varios tipos de hábeas corpus. Se ha pasado de proteger exclusivamente a la persona contra detenciones arbitrarias a fin de conseguir su libertad (históricamente su finalidad original), a utilizar este proceso constitucional para situaciones diferentes a la detención. De entre los tipos de hábeas corpus que se han formulado, se encuentra el llamado hábeas corpus reparador, el cual ha sido definido como ‘el clásico hábeas corpus inglés, el que en sus inicios buscó la protección de los ingleses ante las arbitrariedades de la Corona y que motivó la dación del célebre Hábeas Corps act de 1679’<sup>71</sup>.

<sup>70</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02663-2003-HC/TC, f.j. 6.a.

<sup>71</sup> CASTILLO CÓRDOVA. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Op. cit., p. 585.

Al respecto, Donayre Montesinos señala que “procede ante las privaciones arbitrarias del derecho a la libertad personal. El acto lesivo más común ante el cual se inicia un proceso de este tipo es la detención arbitraria. Sin embargo, existen otros actos que, de ser practicados de forma indebida, resultan también lesivos de la libertad del individuo. De esta forma, es menester distinguir entre la detención y figuras como el arresto, aprehensión, retención o prisión, así como establecer la diferencia entre lo que podría considerarse una detención ilegal y una detención arbitraria”<sup>72</sup>.

Por tal motivo, el referido autor señala que la detención “consiste en la privación de la libertad de una persona en tanto se encuentra vinculada a la comisión de un acto delictivo, a fin de asegurar su presencia en el transcurso del proceso y los efectos jurídicos de la sentencia que se emita sobre el particular. Se trata de una medida cautelar personal que es dictada siempre y cuando se cumpla con determinados requisitos (...). Como se puede observar entonces, la detención guarda estrecha relación con la existencia de un proceso penal de por medio”<sup>73</sup>.

De otro lado, se precisa que la prisión “constituye la situación en la cual se encuentra el sujeto que, luego de que se le siguió el proceso penal correspondiente, fue condenado por una sentencia emanada de un órgano judicial”<sup>74</sup>, mientras que el arresto “constituye una forma de privación de la libertad personal ordenada por la autoridad competente como medida de apremio, para obligar a que el sujeto adopte una determinada conducta en un supuesto específico o como medida sancionadora”<sup>75</sup>. Finalmente, cabe señalar que la aprehensión constituye “un acto de colaboración con la justicia por parte de los particulares, en virtud del cual detienen a una persona en caso de flagrancia delictiva. Producida la aprehensión deben trasladar al sujeto ante la dependencia policial más cercana o, retener al delincuente hasta que las autoridades policiales se constituyan allí”<sup>76</sup>.

---

<sup>72</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Jurista editores. Lima, 2005, p. 191.

<sup>73</sup> Loc. cit.

<sup>74</sup> Loc. cit.

<sup>75</sup> Loc. cit.

<sup>76</sup> Loc. cit.

### 3.4.5.2. Hábeas corpus restringido

El hábeas corpus restringido “se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se le limita en menor grado’.

Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc”<sup>77</sup>.

Sagüés señala que este tipo de hábeas corpus “tiene por fin (por vía de prevención o de reparación) evitar perturbaciones o molestias a la libertad individual, que no configuren una detención o prisión”<sup>78</sup>.

Sobre el particular, Donayre señala que el hábeas corpus restringido se presenta “cuando se está ante actos que no constituyen una privación de la libertad personal, pero sí molestias o perturbaciones en su libre ejercicio, es decir, se tratan de restricciones irrazonables a este derecho que en sentido estricto no se presentan como una detención o prisión, pero indudablemente lo limitan u obstaculizan”<sup>79</sup>.

Así pues, “entre los actos susceptibles de ser cuestionados a través de esta modalidad de hábeas corpus podemos mencionar las vigilancias constantes a un ciudadano por más que se encuentra libremente transitando por la ciudad, los impedimentos de salida del país o de

---

<sup>77</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02663-2003-HC/TC, f.j. 6.b.

<sup>78</sup> SAGÜÉS, Néstor. “Derecho procesal constitucional. Hábeas corpus”. Volumen 4. 2° ed. Astrea. Buenos Aires, 1988, p. 144.

<sup>79</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 187.

conurrencia a determinados lugares, entre otros, todos ellos evidentemente arbitrarios o injustificados”<sup>80</sup>.

### 3.4.5.3. Hábeas corpus correctivo

Por su parte, el hábeas corpus correctivo es usado “cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena”<sup>81</sup>.

Donayre Montesinos refiere que el hábeas corpus correctivo “procederá ante la amenaza o violación del derecho a la vida o la integridad de las personas. Esta figura está pensada sobre todo a favor de las que se encuentran privadas de su libertad. De esta forma, constituye una importante herramienta a disposición de los detenidos, reclusos u otras personas que se encuentran en una relación de especial sujeción en establecimientos públicos o privados y que no deben ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes”<sup>82</sup>.

La aplicación de esta modalidad se apreció en el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs. la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y otro (Exp. N° 726-2002-HC/TC), donde el colegiado expresó señaló:

*‘Mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que este se haya decretado judicialmente’.*

---

<sup>80</sup> Ibídem, pp. 187-188.

<sup>81</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02663-2003-HC/TC, f.j. 6.c.

<sup>82</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 224.

De esta manera, se aprecia que procede “ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes.

Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados”<sup>83</sup>.

#### **3.4.5.4. Hábeas corpus preventivo**

Esta modalidad de hábeas corpus “podrá ser utilizada en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia.

Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta”<sup>84</sup>.

Así las cosas, en el caso Patricia Garrido Arcentales y otro contra el capitán PNP Henry Huertas (Exp. N° 399-96-HC/TC), el Tribunal Constitucional precisó:

*‘Que, en cuanto a las llamadas telefónicas a través de las cuales se amenazaría con detener a los recurrentes, según afirman, este Tribunal considera que no se han dado los supuestos para que se configure una situación que constituya amenaza a la libertad*

---

<sup>83</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02663-2003-HC/TC, f.j. 6.c.

<sup>84</sup> Loc. cit., f.j. 6.d.

*personal que haga procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir, tal y como lo consagra el artículo 4° de la Ley N.º 25398, se necesita que esta sea cierta y de inminente realización; se requiere que la amenaza sea conocida como verdadera, segura e indubitable, que se manifieste con actos o palabras que no dejen duda alguna de su ejecución y propósito e inminente y posible, esto es, que no deje duda sobre su ejecución en un plazo inmediato y previsible”.*

### **3.4.5.5. Hábeas corpus traslativo**

El hábeas corpus traslativo “es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido”<sup>85</sup>.

Donayre señala que “estaremos aun un hábeas corpus de tipo traslativo cuando lo que se pretenda es la libertad de aquella persona que se encuentra detenida o condenada, pero ya transcurrió el plazo previsto legalmente para la detención o el tiempo de su condena expiró, o cuya libertad ya fue declarada por el juez. En consecuencia, en este último caso estamos ante una decisión judicial que ha dispuesto la libertad del procesado o condenado, es decir, un mandato de excarcelación, pero a pesar de él se mantiene la situación privativa de la libertad”<sup>86</sup>.

Cabe señalar que fue empleada esta modalidad en el caso Ernesto Fuentes Cano vs. Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Exp. N° 110-99-HC/TC), donde el Tribunal Constitucional señaló:

*‘Que, el tercer párrafo del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Decreto Ley N.º 22128, dispone que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo*

---

<sup>85</sup> Loc. cit., f.j. 6.e.

<sup>86</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 216.



*razonable o a ser puesta en libertad y, en el caso de autos, se inicia el proceso en marzo de 1993, y en diciembre de 1997 se encontraba en el estado de instrucción, por haber sido ampliada esta; y el hecho de no haberse completado la instrucción no justifica que se mantenga privada de su libertad a una persona que ya lo había estado por más de veinte meses, no dándole cumplimiento así al artículo 137° del Código Procesal Penal, en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura”.*

### **3.4.5.6. Hábeas corpus instructivo**

Esta modalidad “podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no solo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición”<sup>87</sup>.

A través de esta modalidad, señala Donayre Montesinos, “se busca proteger el derecho de toda persona a no ser objeto de desaparición forzada. En estos casos, entonces, el juez pretenderá identificar a los responsables de dicha conducta delictiva a fin de que sean procesados y sancionados penalmente por la vía ordinaria”<sup>88</sup>.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó este criterio en el caso Ernesto Castillo Páez vs. República del Perú, (párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997:

*‘Habiendo quedado demostrado como antes se dijo (supra, párrafo 71), que la detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía del Perú y que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de este, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado,*

---

<sup>87</sup> Loc. cit., f.j. 6.f.

<sup>88</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 243.

*configurando con ello una violación del artículo 25° de la Convención en relación con el artículo 1.1. ”.*

#### **3.4.5.7. Hábeas corpus innovativo**

Esta modalidad Procede cuando, “pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante”<sup>89</sup>.

Sobre el particular, García Beláunde sostiene que dicha acción de garantía “debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando este ya hubiera sido consumado’. Asimismo, César Landa Arroyo [Tribunal Constitucional, Estado Democrático, Editorial Palestra, Lima 2003, pág. 193], acota que ‘a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual, sería legítimo que se plantee un hábeas corpus innovativo, siempre que el afectado no vea restringida a futuro su libertad y derechos conexos”<sup>90</sup>.

Donayre Montesinos refiere que el hábeas corpus innovativo procede “cuando a pesar de haber cesado o convertirse en irreparable la conducta lesiva del derecho a la libertad personal, es menester que el juez constitucional actúe a fin de evitar que conductas de esa naturaleza se repitan en el futuro contra el accionante. En consecuencia, de declararse fundado el proceso de hábeas corpus innovativo, el juez ordenará al responsable del agravio que no vuelva a incurrir en aquellas acciones u omisiones que dieron origen a la interposición de la demanda”<sup>91</sup>.

#### **3.4.5.8. Hábeas corpus conexo**

---

<sup>89</sup> Loc. cit., f.j. 6.g.

<sup>90</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo, “Constitución y Política”, Eddili, Lima 1991, p.148.

<sup>91</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 235.

El hábeas corpus conexo es requerido “cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc.

Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con este. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados”<sup>92</sup>.

#### **3.4.6. DERECHOS CONEXOS A LA LIBERTAD PERSONAL**

Vista la tipología de hábeas corpus, consideramos necesario enfocar el desarrollo del estudio sobre la base de los derechos conexos a la libertad personal.

Para ello, el tesista es de la opinión que la clasificación realizada por el Tribunal Constitucional debería adecuarse a una dividida en dos categorías: Nos referimos al hábeas corpus reparador y, por otro lado, hábeas corpus conexo.

Sobre esta última categoría debe destacarse que el hábeas corpus conexo debería englobar a todas las clases de hábeas corpus distintas al reparador, ya que su protección a través de este proceso constitucional se sustenta en su necesaria vinculación con la libertad personal, resultando de esta manera ociosa la clasificación en ocho categorías, pues bastaría con una simple que la contenga en dos clases de hábeas corpus.

Apoya nuestra posición la sentada por Néstor Pedro Sagüés, quien considera que la extensión de supuestos del hábeas corpus se debe a que “el desarrollo posterior del instituto [...] lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son próximas a

---

<sup>92</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02663-2003-HC/TC, f.j. 6.h.

un arresto, no se identifican necesariamente con él. De ahí que se reconozca que algunas figuras del hábeas corpus [...] abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos –constitucionales también- aunque de índole distinta”<sup>93</sup>.

Como señala la doctrina, si bien “la libertad individual constituye el objeto esencial del hábeas corpus [...], su campo de acción no puede ser delimitado de manera restrictiva, debido a que tal concepción determinaría la indefensión de los seres humanos frente a las agresiones infringidas en contra de derechos fundamentales que inciden sobre la libertad individual”<sup>94</sup>.

El Tribunal Constitucional encuentra sustento a esta postura al referir que “la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. Además, debe tenerse presente que no cualquier reclamo formulado denunciando una presunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo establece el artículo 5º.1 del Código Procesal Constitucional”<sup>95</sup>.

Por tal motivo, Quispe Astoquilca señala que “desde una perspectiva mucho más amplia, [sostenemos] que el hábeas corpus procede respecto de derechos constitucionales diferentes a la libertad individual, [...] empero siempre que de la alegada amenaza o vulneración a tales derechos se derive la amenaza o afectación a la libertad individual, esto es, que incida negativamente en la libertad individual”<sup>96</sup>. Ello porque –como señala Pereira Chumbe- “integran este concepto [de derecho conexo] todos aquellos derechos cuya afectación se

---

<sup>93</sup> SAGÜÉS, Néstor Pedro, *Derecho procesal constitucional: hábeas corpus*, Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 143.

<sup>94</sup> CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés. “Prólogo”, en *Proceso de hábeas corpus*, cit., p. 17.

<sup>95</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 10713-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>96</sup> QUISPE ASTOQUILCA, Carlos Luis. “El hábeas corpus conexo”, cit., p. 263.

encuentra vinculada, de manera directa, con la amenaza o vulneración de la libertad personal”<sup>97</sup>.

Ello ha hecho posible que “el Código Procesal Constitucional (artículo 25°) [haya] acogido esta concepción amplia de este proceso constitucional, cuando señala que ‘también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio’. De ahí que se debe admitir que también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la libertad personal”<sup>98</sup>.

Como vemos, la libertad personal constituye el marco de acción original del proceso de hábeas corpus; sin embargo, existen actos y omisiones que lesionan otros derechos fundamentales, ocasionando –por conexión- la vulneración o la amenaza de agravio posterior sobre la libertad individual. El mayor ejemplo de esta clase de agravio lo encontramos en la esfera procesal; así, pues, si es que durante la tramitación de un proceso penal no se tutelan adecuadamente los derechos al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, la Sala expedirá una sentencia que carecerá de una motivación suficiente y que quebrantará el procedimiento establecido en la ley. Esta afectación a los derechos procesales incidirá sobre la libertad personal si es que el fallo es condenatorio, imponiendo una pena efectiva sobre el procesado; punto en el cual podemos observar la afectación efectiva de la libertad personal con ocasión de un agravio original sobre los derechos procesales.

A continuación, desarrollaremos algunos de los derechos conexos a la libertad personal que podrán ser tutelados a través de la demanda de hábeas corpus.

---

<sup>97</sup> PEREIRA CHUMBE, Roberto Carlos, “El hábeas corpus para la defensa de los derechos conexos a la libertad personal”, en *Actualidad Jurídica*, N° 138, Lima, 2005, p. 146.

<sup>98</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09057-2005-HC/TC, f.j. 3.

### 3.4.6.1. **DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS CONEXOS A LA LIBERTAD PERSONAL**

De la revisión del artículo 25° del Código Procesal Constitucional consideramos que los siguientes constituyen derechos fundamentales sustantivos conexos a la libertad personal:

#### **a. Restricción de la libertad de tránsito**

El inciso 6 del artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: *“El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad”*.

De acuerdo a Castillo Córdova, “este dispositivo legal encuentra su fundamento en el artículo 2.11 de la Constitución Política (...) Del mismo modo, la norma internacional se ha encargado de recoger este derecho. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha dispuesto”<sup>99</sup> lo referido en la Carta de 1993.

Sobre el particular, debe destacarse que el derecho resguardado es la libertad de tránsito, concebido por el Tribunal Constitucional de la siguiente manera:

*“La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela por mediante el hábeas corpus, de los más tradicionales. Con el mismo se busca reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se encuentra también reconocido en los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de*

---

<sup>99</sup> CASTILLO CÓRDOVA. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Op. cit., p. 526.

*Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyendo uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal”<sup>100</sup>.*

Ahora bien, cabe señalar que este derecho puede ser limitado y restringido, aspecto sobre el cual el colegiado refiere:

*“Siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden sin embargo, y en determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); cuando provienen de particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia, o no, de determinados bienes jurídicos”<sup>101</sup>.*

Esta opinión encuentra eco en la doctrina, conforme se aprecia del dicho de Donayre, al sostener que “el Código Procesal Constitucional señala que la libertad de tránsito podrá verse limitada por mandato judicial. Ello se explica debido a que, por ejemplo, en el transcurso de un proceso penal, el juez está habilitado para, luego de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y evaluar la razonabilidad de su aplicación, adoptar una serie de medidas cautelares personales. Algunas de ellas afectan directamente la libertad de tránsito. El mandato de impedimento de salida es justamente una de aquellas”<sup>102</sup>.

## **b. Expatriación y separación del lugar de residencia**

---

<sup>100</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 3482-2005-HC, F.J. 5.

<sup>101</sup> Loc. cit., F.J. 18.

<sup>102</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 115.

El inciso 4 del artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: *“El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería”*.

Sobre la **expatriación de nacional**, el Tribunal Constitucional ha señalado:

*“La expatriación de un nacional (acción de sacar a la fuerza a un natural del territorio de su propio país) procede en los casos de comisión de atentados contra la seguridad nacional, la participación de un grupo armado dirigido por un extranjero, la alteración de hitos fronterizos, actos desleales con el país o la traición a la patria (casos previstos explícitamente entre los artículos 325° y 332° del Código Penal). Sobre la materia, este Colegiado reserva pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha modalidad punitiva”<sup>103</sup>.*

Al respecto, Donayre Montesinos destaca que “según el artículo 334 del Código Penal vigente serán sancionados con expatriación, excluyendo las modalidades culposas, los siguientes delitos: el atentado contra la integridad o soberanía nacional (artículo 325), la participación en grupo armado dirigido por extranjero (artículo 326), la inteligencia desleal con Estado extranjero (artículo 329), la revelación de secretos nacionales (artículo 330), el espionaje (artículo 331) y el favorecimiento bélico a Estado extranjero (artículo 332). Además, de conformidad con lo señalado en el artículo 364 del mismo Código Penal, el delito de rebelión también es susceptible de ser sancionado con expatriación”<sup>104</sup>.

Castillo Córdova señala que “la expatriación sólo puede ser predicada de los nacionales peruanos, mientras que para los extranjeros el término adecuado es el de expulsión. Una y otra se asemejan en el hecho que van a traer por consecuencia la separación de la persona

---

<sup>103</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2876-2005-HC, F.J. 16.

<sup>104</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., p. 108.



(nacional o extranjera) del territorio peruano. Para el caso de los extranjeros (...) hay que tener en cuenta la Ley de Extranjería (LE), Decreto legislativo 703”<sup>105</sup>.

Sobre la **expulsión de un extranjero**, el Tribunal Constitucional ha señalado:

*“La expulsión de un extranjero (acción de hacer salir por la fuerza a un no nacional del territorio patrio) procede como consecuencia de un acto subsecuente del cumplimiento de una condena con pena privativa de la libertad impartida por un tribunal nacional”*<sup>106</sup>.

Para la delimitación de las causales de expulsión de un extranjero, se requiere contar con los parámetros establecidos por **razones de extranjería**:

*“Son aquellas que, basándose en el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución, derivan de la falta de aptitud legal de un extranjero para ingresar al territorio nacional o para continuar residiendo dentro de él. Tales son los casos siguientes:*

- *Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional.*
- *Por haber sido anteriormente expulsado del territorio nacional por razones jurisdiccionales de poder de policía (reglas de migración).*
- *Por ser prófugo de la justicia por delitos tipificados como ilícitos comunes en la legislación nacional.*
- *Por haber sido expulsado de otro país por la comisión de delitos tipificados como ilícitos comunes en la legislación nacional o por infracciones a normas de extranjería homólogas a las nuestras.*
- *Por encontrarse incurso en razones de seguridad.*
- *Por registrar antecedentes penales o policiales por delitos tipificados como comunes en la legislación nacional.*

---

<sup>105</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Palestra. Lima, 2006, p. 521.

<sup>106</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2876-2005-HC, F.J. 16.

- *Por carecer de recursos económicos que le permitan solventar los gastos de permanencia en nuestro territorio*”<sup>107</sup>.

Castillo Córdova señala que “para el caso de los extranjeros, la imposición de la sanción no requiere la intervención del órgano judicial, pues será decretada por la entidad administrativa correspondiente, obviamente a través de un proceso administrativo en el que se haya respetado los derechos constitucionales del procesado”<sup>108</sup>.

### c. Retención de DNI

El inciso 10 del artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: *“El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República”*.

A través de este mandato, se procura tutelar el **derecho a la identidad**. Sobre el particular, la Real Academia Española comprende a la identidad como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”<sup>109</sup>.

Por su parte, Domínguez Guillén la considera “como el derecho a ser único e irrepetible, [pues] si bien todos somos iguales en dignidad y derechos, el milagro del derecho a la identidad hace a cada ser único en su especie en función de ciertas características que conforman su esencia física y moral”<sup>110</sup>.

De igual manera, Fernández Sesarego señala que la identidad es aquello “que diferencia a cada persona de los demás seres humanos, no obstante ser estructuralmente igual a todos ellos. Es, pues, el derecho a ser 'uno mismo y no otro’”<sup>111</sup>.

<sup>107</sup> Loc. cit.

<sup>108</sup> CASTILLO CÓRDOVA. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. Tomo II. Op. cit., p. 522.

<sup>109</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, en [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=identidad](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad).

<sup>110</sup> DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria. “Sobre los derechos de la personalidad”. En: *Dikaion: revista de actualidad jurídica*. N° 12. Madrid, 2003, p. 8.

<sup>111</sup> FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos (2006) La Constitución comentada. Gaceta Jurídica S.A. Lima. Págs. 18-19.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha definido a la identidad al señalar que *“es el derecho a que la proyección social de la propia personalidad no sufra interferencias o distorsiones a causa de la atribución de ideas, opiniones, o comportamientos diferentes de aquellos que el individuo manifiesta en su vida en sociedad”*<sup>112</sup>.

El derecho a la identidad tiene **proyección hacia otros derechos**, puesto que *“el artículo 2.1º de la Constitución expresamente refiere que toda persona tiene derecho a la identidad, derecho que comprende tanto al derecho a un nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos–, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica”*<sup>113</sup>.

Ello le ha permitido al colegio definir la **doble función del DNI** al considerar que *“el DNI es el documento que tiene una doble función: por un lado, permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto que posibilita la identificación precisa de su titular, mientras que por el otro, es un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú; dicho documento, además, es requerido para el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros trámites de carácter personal, con lo que la carencia del mismo conlleva una limitación de varios derechos ciudadanos, uno de los cuales está referido a la libertad individual”*<sup>114</sup>.

Sin embargo, “el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad (...) constituye sin duda un derecho cuya tutela puede generar algunos problemas. Y es que es bien sabido que hay un costo del derecho de tramitación del Documento Nacional de Identidad o el pasaporte, costo que debe estar amparado por la ley y responder al principio de razonabilidad, ya que no debe dejar de tomarse en consideración que en múltiples ocasiones se producen retenciones en virtud de no tener a mano el Documento Nacional de Identidad o no se puede salir del país sin el pasaporte. Estamos entonces ante situaciones

<sup>112</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01797-2002-HD, F.J. 3.

<sup>113</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 4444-2005-HC, F.J. 4.

<sup>114</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 526-2005-HC, F.J. 3.

que pueden presentarse lesivas del derecho a la libertad personal, si es que el Estado no atiende tales requerimientos en forma razonable y no adopta los recaudos correspondientes »<sup>115</sup>.

Por tal motivo, el Tribunal ha señalado la obligación del RENIEC de expedir el DNI, al considerar que:

*“[E]l RENIEC y sus funcionarios están en la obligación de proveer (...) un DNI; obviamente, ello procederá en la medida en que (...) [se] presente la documentación sustentatoria necesaria para tal efecto, siendo deseable que lo haga con la documentación que contenga los datos necesarios para su identificación y produzcan certeza respecto de su identidad, tales como su partida de nacimiento y/o de bautizo; en todo caso, la autoridad administrativa podrá requerir la documentación adicional que estime pertinente (certificados de estudios, etc.), siempre que ello no se convierta en un obstáculo irrazonable que impida solucionar la situación en la que la demandante se encuentra ”*<sup>116</sup>.

#### **d. Salud de personas detenidas**

El inciso 1 del artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: *“La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones”*.

Del contenido de este dispositivo se puede desprender la protección de la integridad y también de la salud de las personas detenidas.

Para efectos didácticos, se considera necesario hacer algunas referencias sobre la **integridad personal**. Este derecho, consagrado en el artículo 2°.1 de la Constitución ha sido definido por el Tribunal Constitucional de la siguiente manera:

---

<sup>115</sup> DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Op. cit., pp. 122-123.

<sup>116</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 526-2005-HC, F.J. 5.

*“El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política vigente. En puridad se trata de un atributo indesligablemente vinculado con la dignidad de la persona, y con los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo y bienestar. El reconocimiento de su importancia es tal, que obligó al legislador constituyente no sólo a establecer su protección a través de lo dispuesto en el referido precepto, sino también, adicionalmente, a ratificarlo tuitivamente a través de lo dispuesto en el apartado h) del numeral 23 del artículo 2° de la Constitución”<sup>117</sup>.*

Sobre la base de dicho presupuesto, el Tribunal Constitucional ha definido a la **salud** de la siguiente manera:

*“La salud tiene la característica de ser, por un lado, un derecho en sí mismo y, por el otro, condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. El derecho a la salud debe entenderse como la facultad que tiene toda persona para el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. A veces las condiciones de salud de una persona varían según el grado de libertad que vivan, o de la vivienda que habiten, del acceso a alimentación adecuada, a vestido y –claro está– a trabajo”<sup>118</sup>.*

En efecto, “según lo dispone la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, del 2000, abarca los siguientes elementos esenciales: disponibilidad (número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud), accesibilidad (en cuatro dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica –o asequibilidad– y acceso a la información), aceptabilidad (establecimientos deben ser respetuosos de la cultura de las minorías, comunidades y pueblos) y calidad (capacitación del personal, equipamiento hospitalario, medicamentos y suministro de agua potable). Entonces, como parte de la accesibilidad, encontramos que existe una proscripción de la

---

<sup>117</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2333-2004-HC, FJ. 2.

<sup>118</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 1711-2004-AA, FJ. 2.

discriminación, por lo que el derecho a la salud se termina integrando con el derecho a la igualdad”<sup>119</sup>.

Estos presupuestos son de utilidad para desarrollar el **respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad personal**, sobre lo cual el colegiado ha señalado:

*“La lejanía del establecimiento penal así como su ubicación en un lugar inhóspito y alejado de la ciudad, afecta el derecho a la visita familiar de los recursos sin el cual puede verse afectada la finalidad resocializadora y reeducadora de la pena, en clara contravención del principio constitucional del régimen penitenciario, enunciado en el artículo 139°, inciso 14), de la Norma Fundamental”*<sup>120</sup>.

Por tal motivo, el Tribunal refirió lo siguiente:

*“Debe considerarse que cualquier acto, como el cuestionado, que, al margen de su intencionalidad, incida o repercuta en esferas subjetivas o derechos que no están restringidos, afecta el derecho y principio a la dignidad. La condición digna es consustancial a toda persona y el hecho de que esté restringido el derecho a la libertad como consecuencia de una sanción penal, por más abominable y execrable que haya sido el hecho que motivara su aplicación, nunca enervará o derogará el núcleo fundamental de la persona, su dignidad. Es en este sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en "los términos del artículo 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos" (Caso Neyra Alegría y otros, párrafo N.º 60). Por esto, cualquier restricción de algún derecho constitucional o de cualquier esfera subjetiva del interno, tendrá condicionada su validez constitucional a la observancia del principio de razonabilidad”*<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> Loc. cit.

<sup>120</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 1429-2002-HC, FJ. 11.

<sup>121</sup> Loc. cit.

### e. Desaparición forzosa

Los derechos fundamentales se clasifican en nominados e innominados. Sobre estos últimos, cabe destacar que el artículo 3 de la Constitución Política los desarrolla al expresar que “la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.

Sobre los **derechos innominados**, el Tribunal Constitucional ha señalado que “para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales a consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de “desarrollo de los derechos fundamentales”, cuyo propósito no solo es prestarle reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino, incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3 de la Constitución”<sup>122</sup>.

Ello permite definir el **rango constitucional de los derechos innominados**, al señalar el colegiado que “la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales”<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 895-2001-AA, FJ. 5.

<sup>123</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 1417-2005-AA, FJ. 4.

Lo expresado por el Tribunal Constitucional permite la **inclusión del derecho a la verdad**, comprendido como un derecho fundamental que persigue conocer los sucesos ocurridos durante la violencia política, el destino de los desaparecidos y el procesamiento de los presuntos responsables.

Este derecho innominado tiene un carácter autónomo, reconocido por el colegiado a través del siguiente texto:

*“En el derecho a la verdad se encuentran comprometidos otros derechos fundamentales, como la vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, (...) tiene una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar”<sup>124</sup>.*

A su vez, refiere el **rango constitucional del derecho a la verdad**:

*“Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, éste también ostenta rango constitucional, pues es una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno”<sup>125</sup>.*

Ello porque **el derecho a la verdad se deriva del principio de dignidad**:

*“Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad humana, pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en la lesión de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los actos criminales. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un ser querido, o de lo que sucedió con él, es tal vez una de*

---

<sup>124</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2488-2002-HC, FJ. 14.

<sup>125</sup> Loc. cit., F.J. 15.



*las formas más perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y dignidad de los seres humanos”<sup>126</sup>.*

Cabe destacar que el derecho a la verdad cuenta con una **dimensión individual**:

*“El derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados. El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. El derecho a la verdad no sólo deriva de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44°, establece la obligación estatal de cautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones”<sup>127</sup>.*

De igual manera, cuenta con una **dimensión colectiva**:

*“La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”<sup>128</sup>.*

De estos mandatos brota la **obligación del Estado de investigar e informar**:

---

<sup>126</sup> Loc. cit., F.J. 16.

<sup>127</sup> Loc. cit., F.J. 9.

<sup>128</sup> Loc. cit., F.J. 8.

*“Existe una obligación específica del Estado de investigar y de informar, que no sólo consiste en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de hechos denunciados. Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha señalado que la no investigación y sanción a los autores y cómplices de las desapariciones forzadas constituye una violación al deber estatal de respetar los derechos reconocidos por la Convención Americana, así como al de garantizar su libre y pleno ejercicio”<sup>129</sup>.*

#### **3.4.6.2. DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES CONEXOS A LA LIBERTAD PERSONAL**

El desarrollo de esta parte del estudio se desprende de la categoría denominada tutela **procesal efectiva**, la cual ha sido consagrada a través del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el cual establece lo siguiente:

*“El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.*

*Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.*

El presupuesto mencionado nos permite advertir que será posible la interposición de demanda de hábeas corpus por la **vulneración de un derecho que componga la tutela**

---

<sup>129</sup> Loc. cit., F.J. 19.

**procesal efectiva a través de una resolución judicial firme.** Ello nos permite desarrollar la serie de consideraciones que servirán de marco para la descripción de los diferentes supuestos que permitirán la recurrencia a esta demanda con el objeto de resguardar a los diferentes derechos que se encuadran en esta categoría y cuya conexidad a la libertad individual es evidente.

#### **a. Tutela procesal efectiva**

La relación entre la libertad individual y la tutela procesal efectiva se soporta en el entendido de que, como ha referido el colegiado constitucional en torno al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, “la letra “y” en la expresión “[...] libertad individual y la tutela procesal efectiva [...]”, en aplicación lógica-jurídica, significa conjunción, lo que quiere decir que solo si se transgrede, quebranta o viola alguno de los derechos que forman parte de la tutela procesal efectiva, de forma patente, clara, visible o perceptible y necesariamente conduce a la privación de la libertad individual, es posible analizar el asunto controvertido para llegar a un pronunciamiento de fondo válido. Consecuentemente, la procedencia, en su tercera exigencia, acumula libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta también al comienzo del propio artículo 4º, cuando trata del amparo (*“resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”*)<sup>130</sup>.

En tal sentido, la **función del juez** en el proceso de hábeas corpus contra resoluciones judiciales debe ser comprendida desde el marco que “si bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, [...] dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución, se tiene [...] la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto ese es el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado constitucional de derecho”<sup>131</sup>.

<sup>130</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09598-2005-HC/TC, f.j. 1.

<sup>131</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08817-2005-HC/TC, f.j. 5.

En efecto, el juez constitucional “[no] est[á] expedito para revisar todo lo actuado por el juez ordinario, sino que ello ocurrirá únicamente cuando los derechos fundamentales estén siendo vulnerados; en otras palabras, en el supuesto en que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos [relacionados a la libertad individual] [...], se estará, sin lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional y en un contexto donde, al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce, procede el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la Constitución”<sup>132</sup>.

Por su parte, De Bernardis señala que este derecho es “la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad”<sup>133</sup>.

Así, pues, “no se trata [...] de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, de que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva, como marco objetivo, y el debido proceso, como expresión subjetiva y específica; ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú”<sup>134</sup>.

---

<sup>132</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08787-2006-HC/TC, f.j. 6.

<sup>133</sup> DE BERNARDIS, Luis Marcelo. “La garantía procesal del debido proceso”. Cultural Cuzco. Lima, 1995., p. 137.

<sup>134</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08817-2005-HC/TC, f.j. 6.

Sobre la base de lo expuesto, abordemos esta parte del estudio con la **procedencia del hábeas corpus frente a infracciones procesales**, sobre la cual el colegiado ha señalado que “no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo”<sup>135</sup>.

Por ello es que para que proceda la demanda debe acreditarse la **vulneración manifiesta del derecho**, es decir, que un “requisito para la procedencia es la vulneración manifiesta del derecho constitucional fundamental invocado. Al respecto, la Real Academia Española expresa que “vulnerar” significa transgredir, quebrantar violar una ley o precepto, en tanto que el sentido de manifiesta” lo entiende como descubierto, patente, claro, visible o perceptible”<sup>136</sup>.

En efecto, conforme dispone el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, “la firmeza de la resolución cuestionada constituye un requisito de procedibilidad para el hábeas corpus contra resolución judicial. Ello implica que deben agotarse los recursos al interior del proceso antes de interponer una demanda en el proceso constitucional”<sup>137</sup>. Por tal motivo, el requisito de firmeza “exige que antes de demandar el hábeas corpus se agoten, al interior del proceso respectivo, los recursos contra la resolución que se cuestiona”<sup>138</sup>.

Ello se desprende del mandato contenido en el artículo 139º de la Constitución, la cual “establece los principios y derechos de la función jurisdiccional, consagrando, en el inciso 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al

<sup>135</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06314-2005-HC/TC, f.j. 5.

<sup>136</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09598-2005-HC/TC, f.j. 1.

<sup>137</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 06094-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>138</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 08751-2006-HC/TC, f.j. 2.

justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales”<sup>139</sup>.

Este enunciado, “recogido por el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, establece que “[...] se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”<sup>140</sup>.

## **b. Debido proceso**

Consagrado en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución, el debido proceso es uno de los derechos rectores del proceso penal. Ello implica que el juzgador deberá de tomar en consideración el procedimiento previamente establecido por ley para ceñir sus actos a dicho íter, ya que lo contrario implicaría el quebrantamiento de las formalidades procesales y la consecuente vulneración de dicho derecho fundamental de orden procesal.

Ahora bien, ¿es posible interponer una demanda de hábeas corpus por vulneración al debido proceso en un juicio penal? Si bien el objeto inicial de la demanda de hábeas corpus es tutelar la libertad personal, cualquier afectación al debido proceso en un juicio penal determinará el quebrantamiento del procedimiento previamente establecido, pudiendo ello repercutir en la libertad personal del procesado, en la medida que a través de determinados actos erróneos –como la omisión en la realización de determinados actos procesales– podrían determinar que se prescinda en la evaluación de ciertos elementos que pudieran

<sup>139</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>140</sup> Loc. cit.

acreditar la no responsabilidad del procesado y, en consecuencia, la adopción de un fallo errado que acarree la restricción arbitraria de la libertad personal del procesado.

En tal sentido, se observa el nexo que existe entre la tutela del debido proceso en un juicio penal con el resguardo de la libertad personal, ya que al ser ambos derechos fundamentales, se encuentran concatenados, lo cual determina que la afectación del primer derecho mencionado repercutirá ilegítimamente sobre el segundo, legitimando así al afectado a interponer la correspondiente demanda de hábeas corpus, cuyo objeto será retrotraer los hechos al momento anterior a la vulneración del debido proceso y, en consecuencia, realizar el acto procesal omitido dentro de los parámetros establecidos en la resolución que estima la demanda de hábeas corpus, por citar un ejemplo.

El hábeas corpus tiene **carácter excepcional**, ya que “no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, ya que la violación de este debe incidir negativamente en la libertad individual. Asimismo, el artículo 25° del Código Procesal Constitucional regula enunciativamente los derechos que son susceptibles de ser tutelados por este proceso constitucional, los que necesariamente deben tener conexión con la libertad individual, situación que no se advierte en el caso de autos, puesto que el demandante cuestiona un pronunciamiento jurisdiccional emitido en el marco de un proceso laboral que no apareja medida restrictiva alguna en contra de su libertad individual”<sup>141</sup>.

En efecto, Monroy Gálvez coincide con esta opinión al señalar que “[c]uando se hace referencia al derecho a un debido proceso, se afirma la existencia de un derecho continente al interior del cual existen cierto número de derechos fundamentales que aseguran el reconocimiento y plenitud de un sujeto de derecho dentro de un procedimiento o proceso”<sup>142</sup>.

---

<sup>141</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 07915-2006-HC/TC, f.j. 3.

<sup>142</sup> MONROY GÁLVEZ, Juan. "Debido proceso y tutela jurisdiccional." En: "La Constitución comentada". Gaceta Jurídica S.A. Tomo II. Lima, 2005, p. 497.

Cabe referir que este proceso “es de naturaleza netamente excepcional, dirigido a tutelar la libertad individual y a evitar que esta sea recortada o perturbada indebidamente por autoridad, funcionario o persona alguna. Asimismo incluye la protección del acceso a un debido proceso constituyendo la acción de garantía la vía idónea para evaluar la legitimidad constitucional de los actos o hechos practicados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en que de ellos se advierta una violación de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva”<sup>143</sup>.

Sin embargo, “no se trata, como es evidente, de que el Tribunal Constitucional, revise todo lo realizado por el juez ordinario, sino, específicamente, que controle desde un canon de interpretación constitucional si en el ejercicio de la función jurisdiccional se ha vulnerado o no un derecho fundamental específico. Lo que se justifica si se considera que no toda afectación al debido proceso es susceptible de ser sometida a control constitucional por parte de este colegiado. Así, mientras las afectaciones al *debido proceso constitucional* siempre son susceptibles de ser controladas por parte del juez constitucional, no sucede lo mismo en relación con el *debido proceso legal*”<sup>144</sup>.

El sustento de la protección del hábeas corpus sobre este supuesto lo encontramos en la **relación entre la tutela procesal efectiva y el debido proceso**, sobre la que debe señalarse que “el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva precisa de su vinculación con el derecho fundamental a la libertad personal, en cuyo caso, el hábeas corpus, tal como dispone el artículo 25º, inciso 17, del Código Procesal Constitucional, es el proceso constitucional idóneo para su protección”<sup>145</sup>.

Al respecto, Almagro Nosete sostiene que “el debido proceso fue una garantía procesal del bien de la libertad, de manera que nadie pudiera ser privado de esta, sino en virtud de un proceso con las formalidades legales necesarias; esta garantía se hizo extensiva a otros bienes, como la propiedad hasta llegar a transformarse en una protección más jurídico-material que procesal, en sentido estricto, cuando por medio de la misma se ha llegado a

<sup>143</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 07666-2006-HC/TC, f.j. 3.

<sup>144</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01014-2007-PHC/TC, f.j. 4.

<sup>145</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02492-2007-HC/TC, f.j. 2.



enjuiciar la razonabilidad de las leyes sustantivas que al establecer un juicio del legislador sobre determinados bienes, escamotean al ciudadano la resolución de tal problema mediante un proceso garantizado. Esta evolución es, por otra parte, explicable en sistemas donde los jueces ordinarios resuelven también sobre la inconstitucionalidad de las leyes (control difuso. Mas, no obstante, la denominación es expresiva en cuanto que conecta las meras formalidades de un proceso con las condiciones de justicia del mismo para garantizar que el ciudadano sea razonablemente enjuiciado sin atentar a sus derechos fundamentales”<sup>146</sup>.

En efecto, “se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”<sup>147</sup>.

Así, pues, “para [...] [que se puedan evaluar los criterios del juzgador ordinario] existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.

Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos”<sup>148</sup>.

<sup>146</sup> ALMAGRO NOSETE, José. “Constitución y proceso”. Bosch Editores. Barcelona, 1984, pp. 105-106.

<sup>147</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08841-2006-HC/TC, f.j. 2

<sup>148</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08453-2005-HC/TC, f.j. 6.

Así las cosas, “en el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos [procesales], estaremos, sin lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y ante un contexto donde, al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce, resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la Constitución. Puntualizado queda, en todo caso, que solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, violación del contenido no esencial o adicional, que no son, por sí mismas, contrarias a la Constitución sino al orden legal. Mientras que el proceso que degenera en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional”<sup>149</sup>.

Otro fundamento para su procedencia lo constituye la naturaleza del **debido proceso como derecho conexo a la libertad individual**, sobre la cual cabe señalar que “dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el Juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; claro está siempre que, en el caso concreto, exista conexión entre este y el derecho fundamental a la libertad personal”<sup>150</sup>.

Sobre el particular, es de señalar que “el proceso de hábeas corpus, conforme al artículo 200°, inciso 1 de nuestra Constitución, procede para tutelar la libertad individual y derechos conexos. El debido proceso, como derecho conexo a la libertad individual, podrá tutelarse

---

<sup>149</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08453-2005-HC/TC, f.j. 7.

<sup>150</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08123-2005-HC/TC, f.j. 14.

en el proceso de hábeas corpus siempre que de la alegada vulneración se derive una afectación de la libertad individual”<sup>151</sup>.

Es importante subrayar que el proceso de hábeas corpus “no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. Sin embargo en el presente caso, habida cuenta que las vulneraciones aducidas no solo implican la observancia del derecho al debido proceso, sino que inciden en el ejercicio de la libertad individual del demandante, el Tribunal Constitucional tiene competencia, *ratione materiae*, para evaluar si las resoluciones cuestionadas presentan la inconstitucionalidad que invoca el demandante”<sup>152</sup>.

*(Sentencia recaída en el Expediente N° 0617-2006-PHC/TC, F. J. 2)*

Para mayor abundamiento, deben conocerse las **dimensiones del debido proceso**, pues este tiene “dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”<sup>153</sup>.

Ello nos permite apreciar el **contenido del debido proceso constitucional**, sobre el cual el Tribunal Constitucional ha señalado que “el *debido proceso constitucional* garantiza que todas las afectaciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y de los principios y derechos que de él se derivan sean susceptibles de ser controladas mediante los procesos constitucionales destinados a su tutela. Únicamente este ámbito es susceptible de control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la jurisdicción constitucional termine sustituyendo a la justicia ordinaria”<sup>154</sup>.

Ello permite constituir al **debido proceso constitucional como objeto de protección a través del hábeas corpus**, pues “mientras que el debido proceso constitucional siempre

---

<sup>151</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 01673-2006-HC/TC, f.j. 3.

<sup>152</sup> Loc. cit., F. J. 2

<sup>153</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08817-2005-HC/TC, f.j. 6.

<sup>154</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01014-2007-HC/TC, f.j. 6.

puede ser sometido a control a través de los procesos constitucionales, el debido proceso legal –esto es, aquellas afectaciones o irregularidades que no inciden en dicho contenido– no convierte necesariamente al proceso penal en inconstitucional”<sup>155</sup>.

### **c. Motivación de las resoluciones judiciales**

Por otro lado, cabe la posibilidad de interponer demanda de hábeas corpus cuando se considere que se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y que ello ha repercutido de manera arbitraria sobre la libertad personal del procesado.

La motivación de resoluciones judiciales es un derecho consagrado en el artículo 139° inciso 5, el cual debe de ser evaluado a la luz de los elementos que conforman su contenido esencial, como son la fundamentación jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, conforme ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04348-2005-PA, fundamento jurídico N° 2:

*“el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sólo mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.*

Al respecto, Lorca Navarrete expresa que “la interpretación y aplicación de las normas procesales tiene trascendencia constitucional, por cuanto [este derecho] (...) obliga a elegir la interpretación de aquella que sea más conforme con el principio *pro actione* y con la

---

<sup>155</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01014-2007-HC/TC, f.j. 6.

efectividad de las garantías que se integran en esa tutela, de suerte que si la interpretación de la forma procesal no se acomoda a la finalidad de garantía, hasta el punto que desaparezca la proporcionalidad –principio de proporcionalidad- entre lo que la forma demanda y el fin que pretende, olvidando su lógica y razonable concatenación sustantiva, es claro que el derecho [a la motivación de las resoluciones judiciales] (...) resulta vulnerado”<sup>156</sup>.

En tal sentido, si es que dentro de un proceso penal se expide una resolución judicial en la que se aprecia la carencia de argumentación lógica o jurídica, se determinará que dicha resolución judicial no se adecua al contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, lo cual hará posible la interposición de la demanda de hábeas corpus siempre y cuando dicha resolución que contiene una insuficiente motivación jurídica se pronuncie a favor del mandato de detención o de su prórroga, ya que –como resulta evidente- dicha resolución, amparada en argumentos ajenos al Derecho, restringirá arbitrariamente el derecho a la libertad personal del procesado.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la debida motivación debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso. Este derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva”<sup>157</sup>.

Sobre el **contenido de la motivación**, el colegiado considera que “uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas

---

<sup>156</sup> LORCA NAVARRETE, Antonio María. “El derecho procesal como sistema de garantías”. En: *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. Universidad Nacional Autónoma de México. N. 107. Distrito Federal de México, 2003, pp. 536-537.

<sup>157</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06712-2005-HC/TC, f.j. 10.

por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables”<sup>158</sup>.

En efecto, “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”<sup>159</sup>.

En relación a las **características de la motivación de las resoluciones judiciales**, el colegiado ha señalado que “tratándose de cualquier medida restrictiva de la libertad personal, la motivación en la adopción de la medida es un requisito indispensable, pues solo de esa manera será posible determinar si una decisión judicial es arbitraria, o no. En ese sentido, dos son las características que debe tener la motivación de toda medida que restrinja la libertad individual. En primer lugar, tiene que ser suficiente, esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo lugar, debe ser razonada, es decir, que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria o injustificada”<sup>160</sup>.

En efecto, “las premisas de la argumentación no se establecen de antemano sino que son el producto de la interpretación y esta es el proceso de argumentación. La conclusión, por [lo] tanto, es [que] el discurso del intérprete [es] donde (...) se construye el sentido de la

---

<sup>158</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01230-2002-HC/TC, f.j. 11.

<sup>159</sup> Loc. cit.

<sup>160</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06648-2006-HC/TC, f.j. 7.

proposición legal”<sup>161</sup>. Por lo tanto, para que se resguarde el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, tanto jueces como en el ejercicio profesional se tendrán en consideración que “toda argumentación jurídica tiene como parámetro, por una parte, la proposición legal tal cual como vocablo o frase dentro de un corpus legal y, por otra parte, la relación necesaria entre proposición legal y conducta”<sup>162</sup>.

Ello nos permite encontrar el **fundamento de la motivación de las resoluciones judiciales**, sobre el cual el Tribunal Constitucional ha señalado que “la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”<sup>163</sup>.

Tal referencia se debe a que “uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución”<sup>164</sup>.

Así, se revela la **relación entre la motivación de las resoluciones judiciales y el debido proceso**, puesto que “uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos”<sup>165</sup>.

Esta situación pone de manifiesto la **relación entre la motivación y los hechos puestos en conocimiento del juzgador**, en la que “la exigencia de que las decisiones judiciales sean

---

<sup>161</sup> RIBEIRO TORAL, Gerardo. “Teoría de la argumentación jurídica”. Plaza y Valdés Editores. Distrito Federal de México, 2006, p. 24.

<sup>162</sup> Loc. cit.

<sup>163</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03361-2007-HC/TC, f.j. 2.

<sup>164</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03377-2007-HC/TC, f.j. 2.

<sup>165</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 5.

motivadas [...] garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponda resolver”<sup>166</sup>.

Ya en lo que respecta a actos concretos del proceso, podemos encontrar algunas situaciones en las que el magistrado se encuentra vinculado a respetar el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así por ejemplo, se constata la **obligación de motivación del juez penal al calificar una denuncia**, puesto que “el juez penal al momento de calificar la denuncia está obligado *ope legis* al control de la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, debiendo verificar con criterio constitucional el cumplimiento de los presupuestos antes señalados para abrir instrucción penal”<sup>167</sup>.

De otro lado, existe la **obligatoriedad de la motivación del auto de apertura de instrucción**, ya que “en cuanto al cuestionamiento de que el auto de apertura de instrucción no cumpliría con los presupuestos legales para su dictado cabe precisar que el artículo 139.º inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45º y 138º de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”<sup>168</sup>

De igual manera, sobre el **contenido de la motivación del auto de apertura de instrucción**, “[el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales] contiene las

<sup>166</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 5.

<sup>167</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 8.

<sup>168</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02079-2007-HC/TC, f.j. 3.



directrices a seguir por la judicatura penal cuando ha de formalizar una hipótesis acusatoria, y que disgregadas pueden resumirse en las siguientes: a) existencia de suficientes elementos reveladores de la comisión de un delito; b) individualización del presunto autor o partícipe; c) que la acción penal no haya prescrito o concurra una causa de extinción de la acción penal; d) delimitación fáctica precisa de los hechos denunciados; e) señalamiento de los elementos de prueba en que se funda la imputación; f) calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado; g) motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real”<sup>169</sup>.

Por otro lado, la motivación de resoluciones judiciales se encuentra en actos como el **fundamento de la motivación de la detención judicial preventiva**, en la que “la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de dichas medidas [de detención] resulta ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional y de última ratio de la acción penal, así como la naturaleza subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva”<sup>170</sup>.

El **contenido de la motivación de la detención judicial preventiva** es comprendida a través del dicho del Tribunal Constitucional, el que refiere que “dos son [...] las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva. En primer lugar, tiene que ser "suficiente", esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo lugar, debe ser "razonada", en el sentido de que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada”<sup>171</sup>.

#### **d. Derecho de defensa**

<sup>169</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 7.

<sup>170</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02953-2007-HC/TC, f.j. 3.

<sup>171</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03361-2007-HC/TC, f.j. 3.

El artículo 139° inciso 14 de la Constitución consagra “el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.

El Tribunal Constitucional define al derecho de defensa como aquel que “protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio. Este estado de indefensión no sólo es evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover”<sup>172</sup>.

El derecho fundamental de defensa “no supone únicamente la asistencia letrada en el juicio, sino a lo largo de toda la actuación, y además requiere para su ejercicio por parte del procesado y de su defensor, del conocimiento de las pruebas obrantes en el trámite para poder controvertirlas, ya criticándolas, ora acreditando su ilegalidad, bien ahondando en ellas (contrainterrogatorio), o aduciendo otros medios de prueba que desvirtúen su valor demostrativo”<sup>173</sup>. Es decir, “el derecho de defensa no se circunscribe a la llamada defensa técnica, es decir, la ejercida por un profesional del derecho, pues como segundo elemento no menos importante se encuentra la defensa material, en virtud de la cual el [procesado] (...) está facultado para solicitar pruebas, impugnar decisiones, presentar memoriales, intervenir de viva voz en la audiencia pública, examinar el expediente, etc”<sup>174</sup>.

Así también, el colegiado **define al derecho de defensa** como aquel “considerado como la fuerza motriz del proceso; como la garantía suprema que atiende a su esencia misma, pues sin él no estaremos ante un verdadero proceso, toda vez que, ante su ausencia, no habrá

<sup>172</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA, FJ. 27.

<sup>173</sup> BARRETO ARDILA, Hernando. “Observaciones sobre el tratamiento del derecho de defensa en la implementación del sistema acusatorio”. En: *Dikaion: Revista de actualidad jurídica*. Universidad de la Sabana. N. 13. Bogotá, 2004, p. 112.

<sup>174</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03361-2007-HC/TC, f.j. 3.

contradictorio, siendo este un atributo principal de las partes sujetas a proceso. De otro lado, este derecho tiene su origen en el precepto sustancial según el cual nadie puede ser juzgado sin ser oído y vencido en juicio”<sup>175</sup>.

Por su parte, Álvarez Landete considera que “el derecho de defensa nace devaluado (...) al disociarse en dos manifestaciones distintas: la de defensa propiamente dicha y la de asistencia letrada. Podría incluso pensarse que estamos en presencia de dos derechos distintos: el de asistencia que se ejercitaría en los supuestos de detención y el de defensa, más general, y que propiamente se desarrollaría en el seno de la actividad (...) judicial”<sup>176</sup>.

Del análisis de este artículo se aprecia la importancia del ejercicio del derecho de defensa, ya que dicho derecho incide directamente sobre la libertad personal, en la medida que el sujeto procesado deberá de incorporar los elementos probatorios que considere pertinentes a efectos de acreditar que no es responsable de los hechos que se le imputan.

Cabe precisar que este derecho tiene una **doble dimensión**, “una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión”<sup>177</sup>.

Su **contenido constitucionalmente protegido** ha sido desarrollado por el colegiado al señalar que es “el poder disponer de un tiempo razonable y de contar con los medios adecuados para su preparación. Sin embargo, no juzga que tal contenido del derecho de

---

<sup>175</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03062-2006-HC/TC, f.j. 4.

<sup>176</sup> ÁLVAREZ LANDETA, Joaquín. “El derecho de defensa como derecho devaluado”. En: *Jueces para la democracia*. Asociación Jueces para la democracia. N. 15. Madrid, 1992, p. XXXVII.

<sup>177</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 6260-2005-HC, f.j. 3.

defensa se haya visto lesionado por el hecho de haberse sentenciado al recurrente al día siguiente de haberse concluido el acto del juicio oral”<sup>178</sup>.

De igual manera, “dentro del contenido constitucionalmente protegido de este derecho no se encuentra el que una investigación criminal a realizarse por un juez pueda iniciarse sólo después de haberse oído a la persona contra la que se abrirá el proceso penal. Sí garantiza, en cambio, que en el desarrollo del proceso penal mismo, el imputado de la comisión de determinados delitos no quede en estado de indefensión”<sup>179</sup>

Sobre su **contenido esencial**, el Tribunal ha referido que “todo justiciable tiene derecho a conocer de forma cierta, expresa e inequívoca, los cargos que pesan sobre él con el objeto de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de la conducta prohibida que se le imputa, surgiendo el derecho a probar, el contradictorio, la igualdad sustancial -entre otros- como atributos constitucionales del justiciable que son conocidos como tutela procesal efectiva”<sup>180</sup>.

En efecto, el contenido esencial del derecho de defensa “queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”<sup>181</sup>.

A su vez, cabe señalar que el derecho de defensa **forma parte de la tutela procesal efectiva**, pues “la defensa de una persona es un elemento también clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva.

---

<sup>178</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 1330-2002-HC, f.j. 3.

<sup>179</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 0506-2005-AA, f.j. 6.

<sup>180</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2006-HC/TC, f.j. 8.

<sup>181</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 07811-2006-HC/TC, f.j. 3.

Sobre su reconocimiento normativo, debemos remitirnos a la Constitución cuando reconoce en su artículo 139°, inciso 14, la existencia de El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (...).

Los instrumentos internacionales ponen énfasis en ámbitos específicos del derecho a la defensa. El artículo 11° de la Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la persona todas las garantías necesarias para su defensa. A su vez, el artículo 14°, inciso 3, acápite “d” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una defensa no sólo realizada a título personal, sino también a través de un abogado. Por su parte, el artículo 8°, inciso 2, acápite c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al inculcado el tiempo y medios convenientes para que prepare y realice su defensa”<sup>182</sup>.

El ejercicio del derecho de defensa debe ser **reconocido durante todas las etapas del proceso**, pues “protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio. Este estado de indefensión al que se ha hecho alusión no sólo opera en el momento en que, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular, sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover”<sup>183</sup>.

Sin embargo, si durante el proceso penal se advierte que el juzgador no permite la incorporación de algún elemento probatorio, sin que medie una justificación debida, nos encontraremos frente a un acto arbitrario que deja en estado de indefensión al procesado, impidiéndole ejercer plenamente su derecho de defensa. Tal situación determina que el juzgador no pueda evaluar adecuadamente los hechos, ya que la prescindencia de dicho elemento probatorio determinó un análisis sesgado de la materia. Si es que tal situación acarree la expedición de un mandato de detención o su ampliación o, incluso, la

---

<sup>182</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 6712-2005-HC, f.j. 31.

<sup>183</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2209-2002-AA, f.j. 12.

imposición de una pena efectiva, el afectado estará legitimado a interponer la correspondiente demanda de hábeas corpus porque el agravio infringido sobre el derecho a la defensa ha acarreado la vulneración de la libertad personal.

#### **e. Presunción de inocencia**

El artículo 2º inciso 24 literal e) de la Constitución al establecer que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, no hace más que consagrar el derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional ha **definido la presunción de inocencia** como aquel derecho que permite que “a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario”<sup>184</sup>.

Sobre el particular, apunta Nogueira que “la presunción de inocencia es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho penal punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir”<sup>185</sup>.

Las **dimensiones de la presunción de inocencia** han merecido atención del colegiado al señalar que “en el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente hacer algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho

<sup>184</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00618-2005-HC/TC, f.j. 21.

<sup>185</sup> NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia”, en *Ius et praxis*, Vol. 11, N° 1, Universidad de Talca, Talca, 2005, p. 223.

fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional”<sup>186</sup>.

Por otro lado, se revela la **relación entre la presunción de inocencia y el debido proceso**, puesto que “la presunción de inocencia [es un] elemento conformante del debido proceso. Disponer en una norma procesal penal que el imputado, en todo caso –es decir, sin sopesar las circunstancias de cada expediente– tendrá mandato de detención desde el inicio de la instrucción, contraría esa presunción y, por tanto, el debido proceso exigido por la Constitución”<sup>187</sup>.

En lo que refiere a la **actuación del juez constitucional frente a la vulneración de la presunción de inocencia**, el Tribunal ha señalado que la “eficacia [de la presunción de inocencia] no autoriza [...] al juez de los derechos fundamentales, a superponerse o sustituirse en las labores que son propias del juez penal. Por ello, tratándose del cuestionamiento de una resolución judicial por violación del principio de presunción de inocencia, al juez constitucional le está vedado realizar una valoración sobre la responsabilidad penal que pudiera tener el procesado. Su ámbito de actuación se circunscribe a determinar si en el desarrollo de dicho proceso, la sanción impuesta no se fundamenta en ningún medio de prueba, o las que le sirvieron de sustento son manifiestamente insuficientes para servir de justificación a una condena”<sup>188</sup>.

Sobre la **inversión del principio de inocencia**, el Tribunal señaló que “no existen motivos razonables y proporcionales que justifiquen el dictado de la medida cuestionada [de detención], toda vez, que atribuir el peligro procesal a la gravedad de los hechos imputados y exigirle al procesado la obligatoriedad de recabar con pruebas indubitables que no rehuíra o perturbara su juzgamiento [...] supone invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”<sup>189</sup>.

---

<sup>186</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 10107-2005-HC/TC, f.j. 6.

<sup>187</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2001-AI/TC, f.j. 2.

<sup>188</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00506-2005-AA/TC, f.j. 8.

<sup>189</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03014-2006-HC/TC, f.j. 12.

Así pues, “frente a una sanción carente de motivación, tanto respecto de los hechos como también de las disposiciones legales que habrían sido infringidas por los recurrentes, no puede trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia”<sup>190</sup>.

En efecto, la detención preventiva “no puede solo justificarse en la prognosis de la pena que, en caso de expedirse sentencia condenatoria, se aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición de procesada, pues ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”<sup>191</sup>.

En tal sentido, cuando el juzgador invierta la presunción de inocencia atribuyendo responsabilidad a un procesado, antes de haberse expedido sentencia definitiva, se estará frente a un supuesto que ameritará la interposición de la demanda de hábeas corpus, debido a que tal vulneración a la presunción de inocencia acarrea el menoscabo de la libertad personal, en la medida que se funda una resolución en la calidad de responsable del procesado, a pesar de que no existe resolución judicial firme que así lo declare.

#### **3.4.7. HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES**

Tras haber destacado nuestra opinión sobre la configuración de dos grandes categorías de hábeas corpus (reparador y conexo), donde en la de conexo calzara la vulneración de todo derecho que repercutiera sobre la libertad personal, cabe señalar que dicha conexidad se da en cuanto a derechos fundamentales sustantivos y procesales, siendo esta última una esfera de común recurrencia a través de las demandas de hábeas corpus.

---

<sup>190</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02192-2004-AA/TC, f.j. 13

<sup>191</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01260-2002-HC/TC, f.j. 3.



Por tal motivo, es imprescindible que el presente estudio aborde el desarrollo del hábeas corpus contra resoluciones judiciales a partir de los derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal más recurridos.

Para tales efectos, nos sustentaremos en el desarrollo jurisprudencial emanado del Tribunal Constitucional debido a que dicho ente advierte la dinamicidad de los contenidos de estos derechos, permitiéndonos contar con conceptos claros y recientes sobre el tema bajo discusión.

#### **3.4.7.1. El hábeas corpus contra resolución judicial como manifestación del resguardo de la tutela procesal efectiva**

Lo expresado permite definir el **objeto del hábeas corpus contra resoluciones judiciales**, considerando que “el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es velar porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal reconocidos al justiciable, más aún si estos inciden en el ejercicio de su libertad individual”<sup>192</sup>.

Ello determina que “los órganos judiciales que conocen un hábeas corpus, [no tengan] competencia para resolver cuestiones de orden penal. Al juez constitucional no le corresponde conocer una materia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria, sino, únicamente, determinar si en el proceso penal hubo afectación de un derecho constitucional. Por ejemplo, al TC le corresponde evaluar si se ha lesionado el derecho a la libertad personal u otros derechos conexos. En consecuencia, lo alegado en relación con la responsabilidad o irresponsabilidad penal del demandante será materia de pronunciamiento del juez penal”<sup>193</sup>.

---

<sup>192</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 04956-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>193</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08323-2005-HC/TC, f.j. 4.

Así, pues, “no puede acudirse al hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos y que, como es la determinación de la responsabilidad criminal, son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y no para revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. En cambio, no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo”<sup>194</sup>.

Ahora bien, la **procedencia de la demanda por vulneración de la tutela procesal efectiva** está condicionada al cumplimiento de diversos supuestos, sobre lo cual debe expresarse que procede “cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En ese sentido, debe entenderse que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la “supuesta” violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos contra la libertad individual para que se pueda aplicar lo establecido en este precepto normativo”<sup>195</sup>.

En efecto, el artículo 4º del Código Procesal Constitucional señala que “la admisión a trámite de un hábeas corpus que cuestiona una resolución judicial, solo procede cuando: a) Exista resolución judicial firme. b) Exista vulneración manifiesta. c) Que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal efectiva”<sup>196</sup>. En resumidas cuentas, la

---

<sup>194</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01230-2002-HC/TC, f.j. 7.

<sup>195</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 8202-2006-PHC/TC, F. J. 4.

<sup>196</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09598-2005-HC/TC, f.j. 1.

demanda procede contra una resolución judicial firme “en la que se aprecia la violación de la libertad individual y la tutela procesal efectiva en forma patente, clara y perceptible”<sup>197</sup>.

Para mayor detalle, debe precisarse que la **resolución judicial firme** constituye una categoría sobre la cual debe comprenderse que el artículo 4º del Código Procesal ha señalado que “el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.

En ese sentido, la resolución judicial se convierte en firme “cuando ha sido impugnada y el superior jerárquico ha emitido decisión final confirmándola (ejecutoriada); también se convierte en firme cuando dicha resolución es consentida, es decir, cuando el justiciable presuntamente agraviado con ella no la impugna, significando esta conducta el reconocimiento de las bondades de tal decisión o cualquiera otra expresión de aceptación de la facultad jurisdiccional”<sup>198</sup>.

Así, pues, la categoría de resolución firme, “debe ser comprendida al margen del trámite integral del proceso, pues ello permite que incluso un auto, y no solo la sentencia que pone fin al proceso, puedan merecer control por parte del Juez Constitucional. La condición es, en todo caso, que su trámite autónomo [...] haya generado una decisión firme, esto es, una situación procesal en la que ya no es posible hacer prosperar ningún otro recurso o remedio procesal que logre revertir la situación denunciada”<sup>199</sup>.

### **3.4.7.2. Supuestos de procedencia de la demanda de hábeas corpus contra resoluciones judiciales**

#### **3.4.7.2.1. Procedencia frente acciones judiciales**

---

<sup>197</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09598-2005-HC/TC, f.j. 1.

<sup>198</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09598-2005-HC/TC, f.j. 1.

<sup>199</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01209-2006-AA/TC, f.j. 10.

Sobre este supuesto, poco resta decir. Las actuaciones judiciales que se encuadren dentro del contenido del abuso del derecho, prohibido por el artículo 103 de la Constitución, generarán la vulneración de la tutela procesal efectiva.

En este caso, nos encontramos frente a acciones concretas que vulneran el derecho procesal conexo a la libertad personal, supuesto fácilmente identificable y que posteriormente será desarrollado sobre la base de cada uno de los derechos fundamentales procesales.

Sin embargo, resulta ahora pertinente enfocarnos sobre una figura poco tratada en el debate jurídico, como también en el ámbito de la impartición de justicia. Nos referimos a la omisión judicial que genera la vulneración del derecho fundamental procesal conexo a la libertad personal.

#### **3.4.7.2.2. Procedencia frente a omisión judicial**

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha señalado que “el presupuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 5º, inciso 6), del Código [Procesal Constitucional] tiene que ver con la presencia de procesos constitucionales promovidos contra resoluciones judiciales firmes recaídas en otro proceso constitucional. [...] [Estando] ante una omisión en la expedición de una resolución (manifestación de una conducta inconstitucional negativa)[, n]o se configura, por tanto, el presupuesto de improcedencia a que se refiere la norma, sino algo totalmente distinto que, por lo mismo, no se encuentra proscrito de forma alguna. El Código, en otras palabras, no ha dicho en ningún momento que no pueda prosperar un hábeas corpus por omisión judicial, sino que se ha referido exclusivamente al caso de los hábeas corpus contra resoluciones (acciones) judiciales firmes recaídas en otro proceso constitucional”<sup>200</sup>.

Sin perjuicio de lo expresado, esta demanda procede **frente a dilación en la expedición de resolución judicial**, ya que “la protección de ciertos derechos importa la necesidad de una

---

<sup>200</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03491-2005-HC/TC, f.j. 7.

tutela rápida, ya que la afectación o amenaza comprometen la vigencia de la integridad del sistema constitucional (cf. artículo III del Título Preliminar del CPCo)”<sup>201</sup>.

Así las cosas, “no es adecuado [...] –a fin de suprimir las conductas agraviantes– el prolongado tiempo que normalmente duran los procesos de carácter ordinario. Es por ello que se requiere de una tutela jurisdiccional de urgencia, la cual se expresa mediante procesos más breves y eficaces. De tal forma de salvaguardia se pueden señalar dos manifestaciones: la *tutela de urgencia cautelar*, dentro de un proceso principal, y que está destinada a impedir que el transcurso del tiempo convierta en imposible la realización del mandato de la sentencia; y la *tutela de urgencia satisfactiva*, que comporta el uso de remedios procedimentales breves, bajo el supuesto de la amenaza de un derecho cuya supervivencia depende de la rapidez con que se brinde la protección jurisdiccional.

Por tanto, los procesos constitucionales de la libertad, previstos por el artículo 200° de la Constitución, están referidos primordialmente a la tutela de urgencia, ya que buscan proteger, eficaz y ágilmente, los derechos que cada una de las garantías constitucionales tiene como finalidad”<sup>202</sup>.

Efectivamente, “en lo que respecta a la actuación de los órganos judiciales, será preciso evaluar el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso, sin perder de vista en ningún momento el especial celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar una causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad. En tal sentido, serían especialmente censurables, por ejemplo, la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos; o, como estableciera el TEDH [Tratado Europeo de Derechos Humanos], los repetidos cambios de juez instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general”<sup>203</sup>.

### 3.4.7.3. Trámite del proceso de hábeas corpus contra resolución judicial

<sup>201</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02877-2005-HC/TC, f.j. 4.

<sup>202</sup> Loc. cit.

<sup>203</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02915-2004-HC/TC, f.j. 22.

El Código Procesal Constitucional establece el trámite que debe seguir una demanda de hábeas corpus contra resolución judicial.

La afectación de un derecho fundamental procesal en el trámite de un proceso judicial penal deberá ser recurrida, con el propósito de contar con una resolución judicial firme, es decir, que no pueda ser impugnada en sede penal.

La presunta ilegalidad cometida por el juzgador deberá repercutir sobre la libertad personal del procesado, supuesto que permitirá la interposición de la demanda de hábeas corpus contra resolución judicial.

La demanda será interpuesta por el agraviado ante cualquier Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia correspondiente. La interposición de la demanda no estará condicionada al pago de tasas judiciales.

De acuerdo al artículo 31° del Código, el Juez se encuentra en la obligación de analizar los hechos y de resolver el pedido dentro de las 24 horas de interpuesta.

En caso que la demanda sea estimada, el Juez declarará fundada la demanda, ordenando a la instancia que generó la afectación el cumplimiento de sus deberes jurisdiccionales que garanticen el derecho recurrido.

En caso que el Juez desestime la demanda, el afectado podrá interponer recurso de apelación dentro de los dos días siguientes a su notificación (artículo 35). Una vez que sea admitida la apelación, el Juez elevará los actuados a la Sala correspondiente de la Corte Superior de Justicia, la cual se encontrará en la obligación de resolver dentro de los cinco días siguientes.

Si la Sala desestima el recurso de apelación, el perjudicado podrá interponer recurso de agravio constitucional en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de su

desestimación, conforme dispone el artículo 18. Una vez que es concedido el recurso, la Sala remite los actuados al Tribunal Constitucional.

Conocido el asunto por el Tribunal Constitucional, este órgano se encontrará en la obligación de resolver dentro de los veinte días de remitido el expediente, conforme dispone el artículo 20.

Cabe la posibilidad que el Tribunal Constitucional estime o desestime la demanda. En el primer supuesto, el colegiado ordenará al órgano que vulneró el derecho fundamental procesal conexas a la libertad personal a que emita un nuevo pronunciamiento garantizando los derechos fundamentales de las partes.

#### 3.4.7.4. Hábeas corpus contra hábeas corpus

El hábeas corpus contra hábeas corpus constituye una manifestación del resguardo de la tutela procesal efectiva, motivo por el cual somos de la opinión sobre la pertinencia de su estudio a través de esta tesis.

Conforme ha establecido el Tribunal Constitucional, “debe [...] quedar perfectamente establecido que, por tratarse de un emplazamiento contra jueces constitucionales (defensores *prima facie* de los derechos), no puede considerarse con un carácter abierto [la procedencia del hábeas corpus contra hábeas corpus], pues, de ser así, se desnaturalizaría el régimen de presunción favorable de la que goza todo proceso constitucional por el solo hecho de su existencia. Dicho en otros términos, aun cuando sea viable el proceso de hábeas corpus contra un proceso de la misma naturaleza, tal situación no puede ser una regla general, sino una medida excepcional, cuya procedencia ha de requerir una sensata ponderación según la naturaleza de cada supuesto”<sup>204</sup>.

Ello no es más que el resultado de su **carácter atípico**, expresado en que “aunque ciertamente se trata de un proceso de hábeas corpus contra otro proceso de hábeas corpus, y

---

<sup>204</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03491-2005-HC/TC, f.j. 9.

es, por tanto, atípico en sus alcances, sus características, empero, son bastante particulares, quedando claro que, conforme a las mismas, no existe posibilidad alguna de condicionar su procedencia, por lo menos desde la perspectiva que ofrece el Código [Procesal Constitucional] y que (...) se refiere *stricto sensu* a la presencia de resoluciones judiciales formalmente emitidas”<sup>205</sup>.

En efecto, “aunque no existe en nuestra jurisprudencia casuística en la que se haya dilucidado sobre la procedencia de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de hábeas corpus, dicha hipótesis, si bien difícil de verificarse en la práctica, tampoco resulta imposible de presentarse a la luz de eventuales cuestionamientos frente a determinadas situaciones conflictivas”<sup>206</sup>.

Los **supuestos de procedencia** han sido referidos por el colegiado, al señalar que si bien el “Código Procesal Constitucional, [...] se refiere a la improcedencia de un proceso constitucional contra otro proceso constitucional [...], una interpretación de dicho dispositivo, dentro de criterios similares a los que se han realizado para el caso [de la procedencia] del amparo [contra amparo], permitiría concluir que, de darse tal hipótesis, aquella necesariamente tendría que estar condicionada a la vulneración por parte de un juez constitucional (en este caso de hábeas corpus) de los derechos a la tutela procesal efectiva y, concurrentemente, a la libertad individual, conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para el caso de los hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Queda claro, por lo demás, que esa, y no otra, sería la situación en la que podría legitimarse el régimen aquí enunciado, amén de asumirse con un carácter residual y necesariamente restrictivo”<sup>207</sup>.

En ese sentido, procede el hábeas corpus contra otro hábeas corpus “pues lo que se reclama en la demanda tiene que ver con una presunta afectación a los derechos constitucionales del recurrente, acontecida dentro de la tramitación de un proceso de hábeas corpus. Por otra parte, no se trata de cualquier afectación a cualquier derecho, sino de aquellos atributos que

---

<sup>205</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03491-2005-HC/TC, f.j. 8.

<sup>206</sup> Loc. cit., f.j. 4.

<sup>207</sup> Loc. cit., f.j. 6.



normalmente legitiman la interposición de un hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios”<sup>208</sup>. Al respecto precisa que “unn hábeas corpus promovido contra una resolución judicial expedida dentro de otro proceso constitucional y que, desde luego, haya resultado lesiva de los derechos del recurrente, se trata de un hábeas corpus contra autoridades judiciales por no cumplir con administrar justicia constitucional de manera diligente y oportuna, perjudicando con tal inercia el debido proceso y, correlativamente, la libertad individual”<sup>209</sup>.

#### **3.4.7.5. Derechos fundamentales procesales conexos tutelados a través del hábeas corpus contra resolución judicial**

Son diversos los derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal que merecen protección mediante el proceso de hábeas corpus instaurado en contra de una resolución judicial. Para efectos didácticos, se ha considerado necesario enfocar su desarrollo sobre el derecho al debido proceso, para luego dar paso a otros derechos de igual naturaleza.

##### **3.4.7.5.1. Hábeas corpus contra resolución judicial que vulnera el debido proceso**

Conforme señalan Garzón y Guerra, para que el proceso se desarrolle debidamente deben concurrir la legalidad de las normas sustantivas y procedimentales, ser tramitado ante la autoridad competente y con observancia de las formas propias del juicio<sup>210</sup>.

Sobre el primer elemento, las autoras señalan que “de acuerdo con la ley, nadie podrá ser investigado y juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esto quiere decir que la conducta que origine la investigación y el juzgamiento debe encontrarse

---

<sup>208</sup> Loc. cit., f.j. 4.

<sup>209</sup> Loc. cit., f.j. 8.

<sup>210</sup> GARZÓN DIAZGRANADOS, Tulia y GUERRA TAMARA, Angélica. “Privación de la libertad y responsabilidad del Estado”. Op. cit., pp. 26-27.

específicamente establecida como delito. De igual forma el procedimiento para investigarlo y juzgarlo debe estar establecido en normas vigentes”<sup>211</sup>.

Sobre la autoridad competente, rescatan que “quien en nombre del Estado pretenda investigar y juzgar una conducta, debe estar expresamente habilitado para ello. No pueden investigar y juzgar funcionarios de hecho o personas que no han cumplido los requisitos que la ley exige para desempeñar los cargos”<sup>212</sup>.

Respecto a la observancia de las formas del juicio, “significa que deben respetarse los formalismos o procedimientos que la ley ha previsto para la investigación o juzgamiento. La ley regula los medios, mecanismos y formas en que deben cumplirse las actividades de investigación y de juzgamiento”<sup>213</sup>.

La **vulneración al debido proceso en sede judicial** que amerita la interposición de una demanda de hábeas corpus contra resolución judicial se produce en diferentes supuestos.

Uno de ellos es cuando se constata la presencia de un **juez con interés en el resultado del proceso**, supuesto frente al cual el colegiado ha señalado que “si bien es cierto que el Código Procesal Constitucional no admite excusas de jueces y secretarios durante la tramitación de las garantías constitucionales, también lo es que no se puede ser juez en la causa donde el supuesto agravio se imputa precisamente a quien tiene capacidad de fallo en relación a lo impugnado. Hacerlo supone ser juez y parte al mismo tiempo y la Constitución no ampara el abuso del derecho. Es preciso enfatizar que el juez deberá buscar adecuar la exigencia de las formalidades previstas en el Código Procesal acotado con los fines de los procesos constitucionales, esto es, la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, conforme lo establece el artículo III del Título Preliminar”<sup>214</sup>.

---

<sup>211</sup> Ibidem, p. 26.

<sup>212</sup> Ibidem, p. 27.

<sup>213</sup> Loc. cit.

<sup>214</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 00649-2006-HC/TC, f.j. 3

Por otra parte, puede darse la **vulneración del debido proceso por juez parcializado**, ya que “[A]l haberse infringido el derecho a ser juzgado en sede constitucional por un juez imparcial, se ha incurrido en quebrantamiento de la forma, resultando de aplicación el artículo 20° del Código Procesal Constitucional, por lo que deben devolverse los actuados a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento”<sup>215</sup>.

Asimismo, la **vulneración del debido proceso se produce al ser procesado por juez recusado**, pues “un juez recusado no puede expedir una sentencia penal condenatoria mientras no se haya resuelto el incidente de recusación en forma definitiva, so pena de vulnerar el derecho fundamental a un juez imparcial”<sup>216</sup>.

De igual manera, se produce la **vulneración del debido proceso al declarar nulo lo actuado en un proceso de hábeas corpus por considerarse incompetente territorialmente**, caso ejemplificado cuando “la recurrida declaró nulo lo actuado por considerar que la Corte Superior de Justicia de Lima no es competente para conocer el asunto materia de litis, por cuanto los hechos que motivan la demanda ocurrieron en el distrito judicial de Ucayali. Al respecto es preciso señalar que el Código Procesal Constitucional no ha limitado la competencia por razón del territorio, por lo que resulta competente para conocer de una demanda de hábeas corpus cualquier juez penal de la República [...]. [Por lo tanto,] al ser también competente la Corte Superior de Justicia de Lima para conocer de la demanda de hábeas corpus, tal nulidad de actuados constituye un vicio procesal que amerita ser subsanado, por lo que, atendiendo al artículo 20° del Código Procesal Constitucional, se debe declarar la nulidad de la recurrida a fin de que emita pronunciamiento sobre el asunto de autos”<sup>217</sup>.

Asimismo, se produce la **vulneración del debido proceso al dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de ley**, ya que “[se ha] violado el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, como consecuencia de que diversos jueces se hayan inhibido de conocer el proceso que se le sigue al recurrente. Una cosa es

<sup>215</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 03425-2007-HC/TC, f.j. 3

<sup>216</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02730-2006-AA/TC, f.j. 62

<sup>217</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 03510-2007-HC/TC, f.j. 2 y 3

que para resolver una determinada pretensión no exista ley aplicable, en cuyo caso los jueces, cuando corresponda, no deben dejar de administrar justicia por ese vacío o deficiencia de la ley, y otra, muy distinta, es que un proceso no se pueda llevar adelante, en determinado momento, por la inhibición de algunos jueces. Por su propia naturaleza, este principio opera cuando el juez tiene que resolver una cuestión incidental o poner fin al principal, pero no por el retardo en la administración de justicia, que es otra cosa”<sup>218</sup>.

Cabe señalar la **procedencia de la demanda contra el auto de apertura de instrucción**, pues “si bien uno de los requisitos para cuestionar mediante un hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, tratándose del auto de apertura de instrucción no corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta resolución no procede ningún medio de impugnación mediante el cual se pueda cuestionar lo alegado en este proceso constitucional”<sup>219</sup>.

También puede interponerse la demanda frente a la **vulneración de la vertiente procesal del *ne bis in idem***, ejemplificado en el caso de que “[se ha vulnerado la] vertiente procesal [del *ne bis in idem*, menoscabándose] [...] el derecho a no ser procesado por la infracción a un bien jurídico por el cual ya fue sentenciado (siendo dicho pronunciamiento judicial firme), (...) [por existir] *identidad de sujeto, hecho y fundamento*”<sup>220</sup>.

De igual manera, procede el hábeas corpus contra resolución judicial por **persecución penal múltiple por identidad del sujeto**, ya que “en cuanto [a] la *identidad de las personas perseguidas* penalmente (identidad subjetiva) en varios procesos, [...] se aprecia que se trata de los mismos imputados [...]. Esto es, que los beneficiarios [...] aparecen comprendidos en diversas denuncias promovidas por el denunciante [...], las mismas que fueron materia de distintas resoluciones fiscales y judiciales de clausura de la persecución penal”<sup>221</sup>.

<sup>218</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00290-2002-HC/TC, f.j. 4.

<sup>219</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 4.

<sup>220</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01099-2007-HC/TC, f.j. 5.

<sup>221</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08817-2005-HC, f.j. 28.a

En efecto, en la **persecución penal múltiple por identidad del objeto de persecución** debe señalarse que “el elemento denominado *identidad del objeto de persecución* (identidad objetiva) también se cumple [...], pues [...] se advierte que [...] [se abrió] instrucción [...] sobre la base de los mismos hechos cuya delictuosidad fue oportunamente desvirtuada por diversas instancias de persecución penal nacional. Esto es, en todos los casos existió una identidad fáctica (si bien distintas calificaciones jurídicas), un mismo comportamiento atribuido al beneficiario, que nos indica que la imputación ha sido idéntica tanto en las persecuciones anteriormente archivadas [...], lo que demuestra que [...] ha habido una indebida doble valoración de los presupuestos que configurarían la conducta ilícita atribuida al beneficiario”<sup>222</sup>.

Así, pues, la **persecución penal múltiple por identidad de la causa de persecución** debe comprenderse teniendo en cuenta que “la identidad *de la causa de persecución* es un presupuesto que resulta también verificado [...], por cuanto el fundamento de los ilícitos supuestamente realizados por el beneficiario está referido en su totalidad a bienes jurídicos patrimoniales, como así se aprecia de los delitos (estafa, apropiación ilícita, fraude en la administración de las personas jurídicas) que fueron materia de las denuncias de parte, y de las resoluciones de archivo dictadas tanto en sede fiscal como judicial”<sup>223</sup>.

Por otro lado, constituye causal de interposición de demanda de hábeas corpus contra resolución judicial la **vulneración del debido proceso por reforma en peor** cuando “el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, modificado por Ley N° 27454, si solo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el *ius puniendi* del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena

---

<sup>222</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08817-2005-HC, f.j. 28.b.

<sup>223</sup> Loc. cit., FJ. 28.c.

sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia”<sup>224</sup>.

Ello, porque “la Constitución prohíbe ‘reformular la pena en peor’; este enunciado es recogido por el artículo único de la Ley N° 27454, que modifica el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales, estableciendo que “[...] si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación”, salvo que el medio impugnatorio haya sido interpuesto también por el Ministerio Público, en cuyo caso “la Corte Suprema podrá modificar la pena impugnada, aumentándola o disminuyéndola, cuando esta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito’ (sic)”<sup>225</sup>.

**El quebrantamiento de las formas al expedir resolución que pone fin a la instancia** también constituye otra causal de vulneración del debido proceso, pues “tratándose de una resolución que pone fin a la instancia, se requiere de tres votos conformes, como lo establece el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultando de los autos que esta no tiene tal condición al contar solamente con dos votos, lo que debe ser subsanado. [...] [S]iendo así, al haberse producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del presente proceso, los actuados deben ser devueltos a fin de que se proceda conforme a ley, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal Constitucional”<sup>226</sup>.

La **negativa injustificada de absolver la solicitud de sustitución de la pena** de igual manera vulnera este derecho fundamental, pues “si se advirtiese una negativa injustificada por parte del órgano jurisdiccional de absolver la solicitud de sustitución de pena pretendida por los sentenciados, en cuyo caso la pretensión deberá ser estimada y ordenarse al órgano jurisdiccional que proceda a determinar una nueva pena concreta conforme al nuevo marco legal”<sup>227</sup>.

---

<sup>224</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03155-2007-HC/TC, f.j. 4

<sup>225</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00932-2006-HC/TC, f.j. 4.

<sup>226</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 03321-2007-HC/TC, f.j. 2 y 3.

<sup>227</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01043-2007-HC/TC, f.j.13.

Por otro lado, la **dilación en la expedición de resolución judicial** vulnera el derecho, ya que “aun cuando los plazos previstos para la tramitación de cada proceso constitucional supongan un carácter sumarísimo, en muchas ocasiones incompatible con la inmensa carga procesal de la que adolece la administración de Justicia en general, ello no significa que, so pretexto de tal situación, se minimice o, peor aún, se ignore por completo los fines tutelares de dichos mecanismos, equiparando su tramitación a la de los procesos ordinarios. No debe olvidarse que, conforme lo dispone el artículo 13° del Código Procesal Constitucional (reiterando criterios en su día dispuestos por los artículos 6° y 7° de la Ley N° 25398), los jueces se encuentran en la obligación de tramitar con preferencia los procesos constitucionales, quedando claro que la responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de estos será exigida y sancionada por los órganos competentes”<sup>228</sup>.

Sobre el plazo razonable “no solo debe entenderse referido al trámite que existe entre la presentación de una demanda y la decisión sobre el fondo, sino que resulta indispensable que dicho concepto se entienda también como una exigencia para lograr la efectividad del pronunciamiento judicial en un plazo que no debe exceder lo que la naturaleza del caso y sus naturales complicaciones de cumplimiento ameriten, sin que en ningún caso su ejecución se difiera por dilaciones indebidas”<sup>229</sup>.

En efecto, el derecho a un ‘plazo razonable’ “tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su tramitación se realice prontamente. En consecuencia, el derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y, por tanto, no puede ser desconocido”<sup>230</sup>.

La **afectación al debido proceso por reclusión de condenado a pena privativa de la libertad suspendida** permite la interposición de la demanda, ya que “si bien las vulneraciones de los derechos a la defensa y a la debida fundamentación de las resoluciones

<sup>228</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03491-2005-HC/TC, f.j. 14.

<sup>229</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 04080-2004-AC/TC, f.j. 19.

<sup>230</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 0618-2005-HC/TC, f.j. 10

constituyen elementos del debido proceso, derecho susceptible de protección, en principio, por el proceso de amparo, resulta procedente su tutela en el proceso de hábeas corpus, siempre que de la alegada afectación se derive una vulneración o amenaza de la libertad individual. Ello está expresamente reconocido en el artículo 25º, último párrafo, del Código Procesal Constitucional, el cual señala que “También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. En el presente caso, dado que la resolución judicial cuestionada condena al actor a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida, y mantiene una restricción de su libertad individual dentro del proceso penal, resulta procedente analizar las supuestas vulneraciones del debido proceso aducidas”<sup>231</sup>.

De igual manera, es susceptible de ser recurrida la **sentencia penal que vulnera las garantías procesales**. Al respecto, el Tribunal ha señalado que “no se trata, naturalmente, de que el juez constitucional termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Tanto más si las alegadas vulneraciones son atribuidas a una sentencia proveniente de un proceso penal, en el caso, claro está, que esta se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas a las que debe ajustarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tienen valor normativo”<sup>232</sup>.

La **vulneración al debido proceso por desconocimiento de la cosa juzgada** merece su reposición a través del hábeas corpus. Así, pues, “se debe proteger expresamente el principio de cosa juzgada, así como el correspondiente a la seguridad jurídica y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. [...] La protección mencionada se concreta en el derecho que corresponde a todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; esto es,

<sup>231</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06648-2006-HC/TC, f.j. 2.

<sup>232</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2006-HC/TC, f.j. 5.



respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí declaradas. Lo contrario significaría desconocer la cosa juzgada material, privando de eficacia al proceso y lesionando la paz y seguridad jurídicas”<sup>233</sup>.

Asimismo, se produce la **vulneración al debido proceso por el juez que no ejecuta inmediatamente una sentencia**, en caso que “el juez [...], que ha conocido del presente proceso a nivel de la primera instancia, ha omitido actuar conforme a las reglas establecidas imperativamente en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. En efecto, pese a que la sentencia [...] tuvo un resultado estimatorio parcial y, por lo tanto, obligaba a su actuación inmediata conforme al régimen procesal establecido en el citado artículo 22°, el Juez constitucional permitió que la entidad demandada persistiera en su actitud de no retirar las mallas metálicas so pretexto de su derecho a ejercer los medios impugnatorios pertinentes y acceder a la instancia superior. Sobre el particular, este Colegiado considera necesario enfatizar que a diferencia del modelo procesal de la derogada Ley N° 23506 y normas conexas, el Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 2004, ha incorporado para los procesos de tutela de derechos el régimen de actuación inmediata de sentencias, conforme al cual el juzgador se encuentra habilitado para ejecutar los mandatos contenidos en su sentencia estimatoria, independientemente de la existencia de mecanismos de acceso a la instancia superior. Bajo dicho marco referencial, no es aceptable, entonces, que bajo el pretexto del acceso a una instancia distinta por el lado de la contraparte, el juez constitucional renuncie a dar cumplimiento efectivo a su sentencia. Si esta es estimatoria tal condición es suficiente para franquear su actuación inmediata, no teniendo por qué esperar la culminación del proceso para recién decidir, como, equivocadamente lo ha considerado el referido juzgador de primera instancia, quien evidentemente ha omitido cumplir sus deberes, dejándose impresionar por el dicho de la corporación municipal demandada. En tales circunstancias, este colegiado se ve en la necesidad de llamar la atención del citado juzgador constitucional, recordándole no solo las disposiciones pertinentes de la norma adjetiva (que evidentemente está obligado a conocer),

---

<sup>233</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02877-2005-HC/TC, f.j. 8

sino sus deberes de vinculación especial para con la norma fundamental y el cuadro de valores materiales que esta reconoce”<sup>234</sup>.

#### 3.4.7.5.2. Hábeas corpus contra resolución judicial que vulnera el derecho de defensa

El derecho de defensa es recurrible a través del proceso de hábeas corpus siempre y cuando su afectación repercuta sobre la libertad personal.

En ese supuesto, la vulneración del derecho de defensa debe causar un estado ilegal que ha sido denominado por el Tribunal Constitucional como el **estado de indefensión**, sobre el cual el colegiado ha señala que “se concibe constitucionalmente como la negación de la tutela judicial [...] ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo [...]. Por ello hemos hablado siempre de indefensión ‘material’ y no formal, para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella”<sup>235</sup>.

De lo expresado se aprecia la clara **vulneración del derecho de defensa**, que merece ser comprendida a partir de que “en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”<sup>236</sup>.

<sup>234</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 05994-2005-HC/TC, f.j. 3.

<sup>235</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06712-2005-HC/TC, f.j. 32.

<sup>236</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06648-2006-HC/TC, f.j. 4.

Un supuesto de menoscabo de este atributo es la **vulneración del derecho de defensa al no ser informado de la acusación**, apreciado a partir que “el derecho a ser informado de la acusación es un atributo del derecho de defensa que integra, entre otros, el debido proceso y, por ende, la tutela jurisdiccional, a la par que constituye lo primordial del principio acusatorio; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Plissier y Sasso vs. Francia, 25 de marzo de 1999), ha sostenido, al respecto, que: ‘[...] tal exigencia es una condición esencial de la equidad del procedimiento, para lo cual en materia penal se requiere una información precisa y detallada de los cargos que pesan sobre un acusado, lo que incluye la calificación jurídica -en realidad, la razón jurídica de la imputación- que los Tribunales pudieran presentar en su contra’”<sup>237</sup>.

Cabe señalar que la tutela del derecho en mención se salvaguarda a través de la **correlación entre los principios acusatorio y contradictorio** debido a que “se integran y complementan, toda vez que el primero identifica los elementos necesarios para individualizar la pretensión penal e individualizar al procesado, mientras que el segundo custodia que el acusado pueda alegar y/o presentar todas las pruebas que estime necesarias para su interés. De ahí que el derecho del procesado de conocer la acusación tiene como correlato el principio contradictorio, cuya máxima expresión garantista es la inmutabilidad de la acusación, en virtud de la cual el juez puede dar al hecho imputado una definición jurídica diferente, pero no puede modificarlo. Empero, cuando, a consecuencia de lo anterior, tuviera que acudir a otro tipo penal, tal modificación implicaría la variación de la estrategia de defensa –si está no se encuentra implícita en la nueva disposición- que su vez exige el conocimiento previo del imputado para garantizar su defensa y el contradictorio, tanto más si, constitucionalmente, está proscrita la indefensión”<sup>238</sup>.

Así, pues, “la efectividad del principio acusatorio exige, para excluir la indefensión, [...] que el hecho objeto de la acusación y el que la base de la condena permanezcan inalterables (identidad del hecho punible), así como la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de la acusación, no existiendo indefensión, en consecuencia, si el condenado tuvo

<sup>237</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2006-HC/TC, f.j. 13.

<sup>238</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2006-HC/TC, f.j. 14.

oportunidad de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la sentencia, siendo inocuo el cambio de calificación si existe homogeneidad. [...] El principio acusatorio no exige la vinculación estricta del juzgador a las calificaciones jurídicas y al ‘petitum’ de las partes, sino solo que el hecho objeto del juicio del fallo sea aquel sobre el que se haya sostenido la acusación, puesto que el objeto del proceso no es un ‘crimen’, sino un ‘factum’. En consecuencia, el derecho a la información de la acusación, para permitir la defensa adecuada, debe referirse fundamentalmente al objeto del proceso, que no se identifica tanto con una calificación jurídica, como con un hecho individualizado como delito”<sup>239</sup>.

Otro supuesto de vulneración del derecho de defensa se produce **a través del auto de apertura de instrucción que carece de motivación suficiente**, sobre lo que hay que señalar que “la protección constitucional del derecho de defensa del justiciable supone [...] la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción. Esta no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le imputan, sino que comporta una ineludible exigencia, cual es que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa, Es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no como en el presente caso, en que se advierte una acusación genérica e impersonalizada que limita o impide al procesado un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa”<sup>240</sup>.

Al respecto, “la imputación penal que contiene el auto de apertura de instrucción, carece de una concreta y precisa explicación de la relación de causalidad entre los hechos denunciados y el tipo penal [...], pues [...] el juez emplazado no especifica con claridad esta conexidad, lo cual perjudica ostensiblemente un adecuado ejercicio del derecho de defensa”<sup>241</sup>.

---

<sup>239</sup> Loc. cit., f.j. 15.

<sup>240</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 08817-2005-HC/TC, f.j. 40.

<sup>241</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 13.

Así, la “omisión de determinar en el auto de apertura de instrucción la naturaleza de los documentos presuntamente falsificados ha generado un estado de indefensión, toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos imputados se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce. En tal sentido, el proceso se habría tornado en irregular por haberse transgredido los derechos fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa, lo que, a su vez, ha determinado la afectación de la tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Norma Constitucional. Por lo tanto, este extremo de la demanda debe ser amparado y en tal medida debe declararse la nulidad de lo actuado en el proceso penal y ordenarse se subsane la omisión incurrida a fin de garantizar el derecho de defensa de la favorecida”<sup>242</sup>.

Por otro lado, la vulneración del derecho de defensa también se produce **al no informarle al proceso sobre los cargos que se le imputan**, lo cual se desprende de que “considerados conjuntamente, tales derechos garantizan que el acusado pueda conocer de la acusación formulada en su contra en el curso del proceso penal y, de esa manera, tener la posibilidad real y efectiva de defenderse de los cargos que se le imputan; pero también que exista congruencia entre los términos de la acusación fiscal y el pronunciamiento definitivo del Tribunal superior, pues de otro modo se enervaría la esencia misma del contradictorio, garantía natural del proceso judicial y, con ello, el ejercicio pleno del derecho de defensa del acusado”<sup>243</sup>.

Un ejemplo es cuando “el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse

---

<sup>242</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00214-2007-HC/TC, f.j. 12.

<sup>243</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01230-2002-HC/TC, f.j. 18.

sobre hechos concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce. Esta omisión ha generado un estado de indefensión que incidirá en la pena a imponerse y en la condición jurídica de la procesada, lo cual demuestra que el proceso se ha tornado en irregular por haberse transgredido los derechos fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; ello, a su vez, ha determinado la afectación de la tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Norma Constitucional”<sup>244</sup>.

Asimismo, la vulneración del derecho de defensa se produce **al impedirse presentar elementos probatorios**. En efecto, “no resultará lógico [...] sostener que una testimonial rendida por un procesado a fin de acceder a un beneficio sea invocada por el juez encargado de la instrucción penal para determinar el grado de culpabilidad de aquel, pues de esta manera no solo se estaría vulnerando el principio de preclusión de la actuación de los medios probatorios, sino que se limitaría el derecho a la defensa del procesado, al no permitírsele presentar medios probatorios en la oportunidad respectiva y en la manera que considere pertinente para crear convicción en el juzgador respecto de su inocencia”<sup>245</sup>.

De igual manera, la vulneración del derecho de defensa ocurre **al autoincriminarse debido a actos de coacción**. Al respecto, “los jueces y tribunales también tienen la obligación de negar valor a las declaraciones obtenidas por la violencia, lo que no debe entenderse en términos restrictivos, con referencia únicamente a la violencia psíquica o física, sino en un sentido amplio, como omnicomprendensiva de toda información obtenida del investigado o acusado sin su voluntad. Como se ha dicho antes, el derecho a no confesar la culpabilidad garantiza la incoercibilidad del imputado o acusado. Sin embargo, dicho ámbito garantizado no es incompatible con la libertad del procesado o acusado para declarar voluntariamente, incluso autoincriminándose”<sup>246</sup>.

Para mayor comprensión, “para que una declaración autoinculpatoria pueda considerarse como libremente expresada a través de los órganos de control penal, el Estado tiene el

<sup>244</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03390-2005-HC/TC, f.j. 14.

<sup>245</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01454-2006-HC/TC, f.j. 12.

<sup>246</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00003-2005-PI/TC, f.j. 277.

deber de informar al investigado, denunciado, procesado o acusado las ventajas y desventajas que una conducta de esa naturaleza podría generar. Impone también a los órganos judiciales la obligación de no sustentar una pena solo sobre la base de tal autoincriminación”<sup>247</sup>.

Cabe señalar que existirá **estado de indefensión del procesado que no cuenta con abogado**, ya que “reconocer el ejercicio del derecho de defensa en forma integral a un procesado que no ostenta la calidad de abogado, implicaría someterlo a un estado de indefensión por ausencia de una asistencia letrada, versada en el conocimiento del Derecho y de la técnica de los procedimientos legales, situación que, además, quebranta el principio de igualdad de armas o igualdad procesal de las partes”<sup>248</sup>.

La vulneración de la defensa también se da **a través de la ausencia de notificación de una resolución judicial**, puesto que “la notificación judicial es aquel acto procesal cuyo principal objetivo es que las partes intervinientes en un proceso judicial tomen conocimiento de las resoluciones judiciales emitidas en el marco del mismo, a fin de que estas puedan ejercer su derecho a la defensa, en el ámbito del debido proceso”<sup>249</sup>.

El **retardo en la notificación** también origina el agravio sobre la defensa, ya que “no es, pues, la fecha de emisión de la resolución lo que aquí se meritúa, sino la fecha de su notificación, ya que es desde la misma en que el demandante recién puede considerar resuelta su situación jurídica en uno u otro sentido. Es incongruente, por lo demás, que entre la fecha en que supuestamente fue expedida la resolución y la fecha en que se produce su notificación, exista un lapso notoriamente dilatado e incompatible a todas luces con el carácter sumarísimo de todo proceso de hábeas corpus, tanto más cuanto que el mismo Código Procesal Constitucional establece, en su artículo 33°, inciso 8), el carácter improrrogable de las actuaciones procesales”<sup>250</sup>.

---

<sup>247</sup> Loc. cit.

<sup>248</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06260-2005-HC/TC, f.j. 5.

<sup>249</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 07811-2006-HC/TC, f.j. 5.

<sup>250</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 03491-2005-HC/TC, f.j. 13.

Así las cosas, “desde una perspectiva de contenido y aplicación del debido proceso, se puede decir que los actos judiciales deben tener como requisito de validez la notificación, con la finalidad de que el procesado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los pronunciamientos y diligencias judiciales; pero solo en el caso de que se apliquen sanciones o se restrinjan derechos de la persona, incumplir este requisito vulnerará además el derecho de defensa, lo cual implica que dicho proceso resultará susceptible de revisión en la vía constitucional”<sup>251</sup>.

Cabe señalar que se produce la **vulneración del derecho de defensa al variarse el tipo penal**, pues se impide “que el actor pudiera ejercer, eficazmente, su defensa, en tanto esta se encontraba destinada a probar que no era autor de un ilícito penal determinado, mientras que fue condenado por otro, que, aunque del mismo género, sin embargo, no fue objeto del contradictorio”<sup>252</sup>.

De igual manera existe vulneración del derecho de defensa **al quebrantarse el principio de correlación entre la acusación fiscal y la sentencia**, ya que “una calificación distinta al momento de sentenciar eventualmente puede afectar el derecho de defensa, en tanto puede introducir temas jurídicos y elementos fácticos no discutidos en el proceso”<sup>253</sup>.

#### **3.4.7.5.3. Hábeas corpus contra resolución judicial que vulnera el derecho de motivación de resoluciones judiciales**

El derecho de motivación de resoluciones judiciales es recurrible a través del proceso de hábeas corpus siempre y cuando su afectación repercuta sobre la libertad personal.

Así pues, un supuesto para su interposición es la **ausencia de motivación suficiente del auto de apertura de instrucción**, puesto que –conforme señaló el Tribunal en un caso– “[en el] auto de apertura de instrucción cuestionado, [se aprecia que] el órgano judicial demandado [no] ha cumplido con la exigencia constitucional de motivación de las

<sup>251</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 07811-2006-HC/TC, f.j. 6.

<sup>252</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01230-2002-HC/TC, f.j. 18.

<sup>253</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 2179-2006-HC/TC, f.j. 6.



resoluciones judiciales, [...] al [no] expresar los fundamentos que sustentan dicha resolución, [ni] las causas objetivas y razonables para determinar la apertura de instrucción en contra del favorecido [...], esto es, la existencia de elementos de juicio reveladores de la comisión del delito, su individualización y que la acción penal no ha prescrito”<sup>254</sup>.

En efecto, ello se corrobora en otro donde el colegiado expresa que el auto de apertura de instrucción cuestionado no se adecúa, en rigor, a lo establecido por la Constitución y la ley procesal penal citada, pues la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de los hechos denunciados y del tipo penal atribuido, sino que comporta la ineludible exigencia de se lleve a cabo un juicio de subsunción de los hechos en el tipo penal que se imputa, a fin de no limitar o impedir, ilegítimamente, a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa”<sup>255</sup>.

Asimismo, genera esta situación el **auto de apertura de instrucción basado en atestado policial inexistente**, lo cual es apreciado a través del caso en que el “juez demandado consignó, en el auto de apertura de instrucción cuestionado, un inexistente atestado policial, denotando así la falta de suficiencia probatoria de la imputación esgrimida contra los demandantes, lo que revela una decisión judicial arbitraria, pues el hecho de citar un documento policial como material justificatorio de la pretensión punitiva sin que haya existido investigación policial previa, no puede devenir sino en una denuncia manifiestamente orientada a que los presuntos autores del hecho sean inevitablemente procesados”<sup>256</sup>.

De igual manera, el **auto de apertura de instrucción basado en denuncia deficientemente motivada** genera la afectación del derecho, pues el “cuestionado auto de apertura de instrucción carece de una adecuada motivación, si entendemos que, para aceptar una denuncia y dictar el auto de apertura de instrucción, se requiere el cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos por el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales,

<sup>254</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 06086-2006-HC/TC, f.j. 6.

<sup>255</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 07181-2006-HC/TC, f.j. 12.

<sup>256</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 09544-2006-HC/TC, f.j. 9.

obligación judicial que debe ser efectuada con criterio constitucional de razonabilidad, lo que responde a la necesidad de efectuar un control de la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal”<sup>257</sup>.

Asimismo, la **ausencia de motivación en el auto de apertura de instrucción por inexistencia de subsunción de las conductas en el tipo penal** genera la vulneración del derecho a la motivación de resoluciones judiciales. Se aprecia esto en el caso que “si bien en el auto de apertura de instrucción [...] se exponen enunciativamente los hechos denunciados y se concluye que los mismos configuran el tipo penal recogido en el artículo 376° del Código Penal (delito de abuso de autoridad) no se advierte, por el contrario, la existencia de motivación alguna que justifique objetiva y razonablemente la subsunción de las conductas realizadas por los recurrentes en el tipo penal atribuido. Más aún si no se ha realizado ninguna fundamentación de las razones que sustentarían el hecho que los recurrentes, en su calidad de árbitros, puedan ser considerados funcionarios públicos”<sup>258</sup>.

La **ausencia de valoración de los requisitos que configuran el mandato de detención judicial preventiva** genera la afectación de la motivación, como se aprecia en el caso que “el colegiado superior demandado [no] ha cumplido con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, [...] al [no] expresar en los fundamentos de la resolución cuestionada una suficiente justificación descrita de manera objetiva [...] [ni] razonada para decretar y confirmar el mandato de detención en contra del favorecido”<sup>259</sup>.

Esto también se da en el caso que “examinada la resolución cuestionada [...] se aprecia de la misma que no cumple con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales adecuada a las condiciones legales de la materia, puesto que no expresa en sus fundamentos una suficiente justificación, descrita de manera objetiva y razonada a efectos de confirmar el mandato de detención en contra del recurrente,

---

<sup>257</sup> Loc. cit., f.j. 12.

<sup>258</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 07181-2006-HC/TC, f.j.11.

<sup>259</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 01097-2007-HC/TC, f.j. 5.

limitándose a señalar que ‘las pruebas actuadas [...] no [han] desvirtuado lo señalado [...] en la referencial de la menor’<sup>260</sup>.

Por otro lado, se produce la **vulneración de la motivación en el mandato de detención por no haberse individualizado al sujeto en un caso de homonimia**, pues “para la configuración de la homonimia, los nombres tienen que ser exactamente los mismos; es decir, idénticos, por lo que, no cabe ninguna otra interpretación del propósito de dicha norma por parte de los órganos que dictan los mandatos de detención y de los que lo ejecutan, habida cuenta que es en sede penal donde debió haber quedado plenamente individualizado el imputado. Siendo todo esto mucho más grave por cuanto en tanto se han transcrito la información. Tal es el caso del demandante, en el que la interpretación realizada, por demás incorrecta, tornó arbitraria su orden de captura, ya que aun cuando no se había individualizado al procesado se usó la información correspondiente al demandante, pese a tener un nombre de más”<sup>261</sup>.

A su vez, cabe la posibilidad que se vulnere la motivación de resoluciones judiciales a través de una sentencia. Así, por ejemplo, tenemos el caso en que se **vulnere el principio de correlación entre la acusación fiscal y la sentencia**, sobre lo que el colegiado ha señalado que “el principio de correlación entre lo acusado y lo condenado aun cuando expresamente no esté contenido en la ley procesal especial de la materia, es el límite a la potestad de resolver del órgano jurisdiccional al imponer como sanción la invalidación del acto procesal, de lo cual se infiere no solo la existencia de la institución sino su importancia”<sup>262</sup>.

En efecto, “el principio de correlación o congruencia entre lo acusado y lo condenado, aun cuando –expresamente– no esté enunciado en la ley procesal especial de la materia, es el límite a la potestad de resolver del órgano jurisdiccional, e impone como sanción la

---

<sup>260</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02635-2007-HC/TC, f.j. 6.

<sup>261</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 07395-2006-HC/TC, f.j. 10.

<sup>262</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02179-2006-HC/TC, f.j. 5.

invalidación del acto procesal, de lo cual se infiere no solo la existencia de la institución, sino también su importancia”<sup>263</sup>.

Cabe señalar que existe la **excepción al principio de correlación entre la acusación fiscal y la sentencia**, en la que es posible “que el juez se desvincule de los términos de dicha acusación –condenando por otro tipo penal– siempre y cuando: a) se respeten los hechos contenidos en la acusación; b) se varíe a un tipo penal que proteja el mismo bien jurídico que el tipo penal modificado; y c) se permita ejercer el derecho de defensa a la parte directamente interesada”<sup>264</sup>.

Por otro lado, la vulneración del derecho a la motivación de resoluciones judiciales se produce **al sustentar la condena exclusivamente en la investigación fiscal**, porque “la sola investigación fiscal no es suficiente para acreditar la existencia de un delito, pues para ello es necesario que se inicie un proceso penal en el que se actúe la prueba pertinente e idónea a los fines del mismo y en el que se acredite la responsabilidad de los procesados, respetándose las garantías procesales que establece la Constitución, y donde se determinará la responsabilidad o inocencia de los procesados”<sup>265</sup>.

De igual manera, la vulneración del derecho a la motivación de resoluciones judiciales se produce **al sustentar la condena en una sindicación**. En efecto, “la responsabilidad penal que se atribuye al inculcado dentro de un proceso penal, en la medida que comporta la adopción de medidas que implican una restricción de la libertad individual, se construye sobre la base de la actuación de los medios probatorios que a su seno hayan ingresado, y que además generen en el juzgador la convicción de la realización de los hechos investigados, así como de la participación del inculcado en ellos. En ese sentido, la mera sindicación no puede ser fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena”<sup>266</sup>.

---

<sup>263</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2006-HC/TC, f.j. 10.

<sup>264</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 02901-2007-HC/TC, f.j. 3.

<sup>265</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 01068-2007-HC/TC, f.j. 4.

<sup>266</sup> Resolución recaída en el Expediente N° 01218-2007-HC/TC, f.j. 3.

Cabe señalar la **procedencia de la demanda por vulneración del derecho a la motivación aun cuando no se ha resuelto el recurso de nulidad interpuesto**, lo cual es ejemplificado en el caso de que “si bien el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia condenatoria impuesta al beneficiario del hábeas corpus está aún pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la República, ello no determina la improcedencia de la demanda, en tanto lo que se cuestiona no es la sentencia condenatoria en sí, supuesto en el que estaríamos ante un caso de hábeas corpus contra una resolución judicial, al que le sería exigible la firmeza de lo resuelto, sino que lo que se alega es la inexistencia de una resolución judicial que sustente la privación de libertad que sufre el beneficiario”<sup>267</sup>.

### 3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA

A continuación se detallará el desarrollo constitucional desarrollado sobre el proceso de hábeas corpus en las legislaciones de Brasil, México, Colombia, Argentina, España y Chile.

#### 3.5.1. Brasil

Conforme señala Mantilla Martínez, “desde la Constitución de 1891 del Brasil, el Habeas corpus ha sido un remedio constitucional. La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, en el título II capítulo I De los derechos y deberes individuales y colectivos, artículo 5, LXVII, confiere el Habeas corpus siempre que alguien sufra o se crea amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder, y a través del LXVIII, mandato de segurança protege un derecho no amparado por Habeas corpus o habeas data cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad pública. Cabe señalar que el Habeas corpus sirve como una medida procesal para pedir la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y los actos ejecutivos”<sup>268</sup>.

<sup>267</sup> Sentencia recaída en el Expediente N° 03037-2006-HC/TC, f.j. 1.

<sup>268</sup> MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. En: *Universitas Estudiantes*. N° 1. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2004, p. 59.

Al respecto, García Belaúnde expresa que “el Brasil es el país que introduce por vez primera el Habeas Corpus en 1830, mucho antes que fuera consagrado en los Códigos de Livingston de 1837 (aplicados en Guatemala) o el Amparo en la Constitución de Yucatán (1841). Ha tenido en ese país una evolución muy curiosa, pues sufrió diversas deformaciones, las que sólo se zanjaron en 1934, cuando fue creado —para la protección de los demás derechos— el famoso mandato de seguridad (mandato de seguridad). En Brasil procede en lo sustancial para proteger a quien sufre o pueda sufrir violencia o coacción ilegal en su libertad de ir y venir”<sup>269</sup>.

### 3.5.2. México

Mantilla Martínez refiere que en México “no se ha garantizado la libertad mediante la figura del Habeas corpus sino a través del juicio de amparo, incorporado a su derecho positivo en 1841 a nivel local y desde 1857 a nivel nacional. Uno de los campos que cubre el amparo, es el que la doctrina denomina amparo de la libertad, es decir, el amparo para proteger la libertad corporal o ambulatoria”<sup>270</sup>.

En efecto, García Belaúnde reconoce que México es un caso peculiar “porque es en rigor el único país que teniendo un adecuado aparato protector de los derechos de la persona, carece sin embargo del Habeas Corpus. México, como se indicó, tiene desde 1841 a nivel local y luego desde 1847 y más en concreto desde 1857 a nivel nacional, el Amparo que ha tenido una evolución sumamente compleja y curiosa, y además con velocidad vertiginosa por el enorme desarrollo jurisprudencial y legislativo de los últimos cincuenta años, acompañado de una literatura realmente inmanejable”<sup>271</sup>.

Así pues, “se ha considerado al Amparo como un instituto unitario, no obstante sus numerosas variantes en cuanto alcances protectores y cauces procesales. Pero la teoría más moderna acepta que dentro del Amparo, como lo ha señalado Fix Zamudio, existen

<sup>269</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. En: *Revista de estudios políticos*. N° 97. Madrid, 1997, p. 110.

<sup>270</sup> MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. Op. cit., p. 59.

<sup>271</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. Op. cit., p. 109.

diversos sectores, uno de ellos dedicado especialmente a proteger la libertad individual que el mismo Fix Zamudio denomina como «Amparo-libertad» o «Amparo-Habeas Corpus», que cautela no sólo la libertad corporal sino la integridad, la deportación, la tortura, etc»<sup>272</sup>.

Sin embargo, los artículos 103 y 107 de La Ley de amparo, establecen lo siguiente en relación a la privación de la libertad personal:

*“Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictada”.*

### 3.5.3. España

Señala Mantilla Martínez que la Constitución española de 1978 protege a través del Habeas corpus a todas las personas contra la detención ilegal. Al respecto, “en el título I, capítulo II, sección primera De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 17, numeral 2, señala que el plazo máximo para la detención preventiva es de setenta y dos horas, y en el numeral 4, que la ley regulara un procedimiento de Habeas corpus (Ley orgánica 6 de 1948), determinando el plazo máximo de duración de la prisión provisional”<sup>273</sup>.

Cabe señalar que el Tribunal Constitucional expresó lo siguiente en la Sentencia N° 44 de 1991:

---

<sup>272</sup> Ibidem, pp. 109-110.

<sup>273</sup> MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. Op. cit., p. 60.

*“El procedimiento de Habeas corpus no es propiamente un derecho fundamental, sino una garantía institucional derivada de la tutela judicial efectiva; es un procedimiento de cognitio limitada que tan sólo busca esclarecer la legalidad de la detención”.*

Por su parte, García Belaunde refiere que en España el Habeas Corpus “protege a la persona contra toda detención ilegal, con lo cual sigue la matriz clásica. Por su parte, se considera ilegal la detención cuando ella es realizada sin los requisitos legales mínimos o cuando el internamiento es ilegal. Se considera vulnerada la libertad individual cuando lo fuere por una autoridad o agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurren los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades previstas y los requisitos exigidos por las leyes; las personas que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes si transcurrido el mismo no fueran puestos en libertad o entregados al Juez más próximo al lugar de detención; las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida”<sup>274</sup>.

#### **3.5.4. Argentina**

García Belaúnde señala que en Argentina el Habeas Corpus es bastante antiguo, “pues se menciona por vez primera —a nivel nacional— en la Ley 48 de 1863 y luego seguirá un camino ascendente y complejo no obstante que la institución no se encuentra en la Constitución vigente de 1853, aun cuando si estuvo expresamente en la Constitución peronista de 1949 derogada a la caída de Perón. Pero ello no ha obstado para su desarrollo legislativo, como tampoco para la creación pretoriana del Amparo en 1957 (cabiendo señalar que la reforma constitucional argentina actualmente en curso, plantea la constitucionalización del Amparo y del Habeas Corpus). Adicionalmente la proliferación legislativa que existe a su interior, propia de un país federal, nos obliga a centrar nuestra

---

<sup>274</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. Op. cit., p. 109.



exposición en el plano nacional, dejando para otra oportunidad la situación que presenta su derecho público provincial”<sup>275</sup>.

Por su parte, Mantilla Martínez refiere que en dicho país “el Habeas corpus se menciona por primera vez, a nivel nacional, en la Ley 48 de 1863. (...) A pesar de que no estuvo expresamente consignado en la Constitución de 1853, sí lo estuvo en la Constitución peronista de 1949, que en su artículo 29 consagraba que todo habitante podría interponer por sí o por intermedio de sus parientes o amigos, el recurso de Habeas corpus ante la autoridad judicial competente, restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal, comprobada la violación, haría cesar la restricción o la amenaza”<sup>276</sup>.

Actualmente, la Constitución “consagra en la primera parte, capítulo II Nuevos derechos y garantías, artículo 43, el amparo y el Habeas corpus, en donde la acción de amparo puede ser interpuesta contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley, y la acción de Habeas corpus cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado sea la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas y aun durante la vigencia del estado de sitio”<sup>277</sup>.

García Belaúnde destaca que en Argentina “el Habeas Corpus se da de manera bastante clásica y vinculada con la libertad personal. En síntesis, procede el Habeas Corpus por arresto sin orden de autoridad, pero también se utiliza en otros supuestos cercanos a él: así en el caso de leva sin servicio militar ordenado u obligatorio; por la internación indebida en un nosocomio; por la hospitalización forzosa, por la expulsión de extranjeros y por la negativa a admitir personas en la Argentina. En los últimos tiempos se ha utilizado en

---

<sup>275</sup> Ibidem, p. 110.

<sup>276</sup> MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. Op. cit., p. 61.

<sup>277</sup> Loc. cit.

defensa de los presos, esto es, de las personas sentenciadas, pero a las cuales se les ha agravado su condición”<sup>278</sup>.

Por tal motivo, Mantilla Martínez refiere que en su legislación se distinguen cuatro variantes del Habeas corpus: “el clásico o reparador, que busca hacer concluir detenciones inconstitucionales; el restringido, que tiene por objeto concluir con perturbaciones al *ius movendi et ambulandi*; el correctivo, que es el derecho al debido trato en las prisiones, y el preventivo, que sirve para objetar amenazas de arrestos, restricciones menores de la libertad o trato indebido en las cárceles”<sup>279</sup>.

### 3.5.5. Colombia

En Colombia El Nuevo Código de Procedimiento Penal, mediante el decreto 50 de 1987, “regulaba el Habeas corpus en los artículos 454 a 466 introduciendo como elementos característicos nuevos, la denominación específica como derecho (art. 454); la consagración de que el derecho procedía contra todo tipo de acto arbitrario cometido por cualquier autoridad y en contra de la libertad personal (art. 455); el plazo concedido al juez para resolver las peticiones de Habeas corpus se limitó a un máximo de cuarenta y ocho horas (art. 462); la ampliación de la competencia a todos los jueces penales del lugar donde se encuentre el aprehendido (art. 456), y la garantía de las personas puestas en libertad, de no ser afectadas con medidas restrictivas de ésta mientras no se les hubieran restaurado plenamente las garantías quebrantadas (art. 463)”<sup>280</sup>.

La Constitución Política de 1991 consagra al hábeas corpus en el título II De los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 1 De los derechos fundamentales, ya que en su artículo 30, lo consagró derecho fundamental constitucional al establecer:

---

<sup>278</sup> GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. Op. cit., p. 110.

<sup>279</sup> Loc. cit.

<sup>280</sup> MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. Op. cit., p. 66.

*“Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.*

A su vez, el artículo 85 expresa que el derecho de Habeas corpus es de aplicación inmediata, “lo que significa que no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y garantía”<sup>281</sup>.

El artículo 152, literal a) de la misma, “establece que la regulación de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, debe hacerse mediante ley estatutaria. Así, el Habeas corpus fue regulado por la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal en los artículos 382 a 389. Sin embargo, en sentencia C-620 de 2001, se declararon inexecutable tales disposiciones por cuanto el Habeas corpus había sido objeto de una regulación exhaustiva, íntegra y completa por el legislador ordinario, que afectó el núcleo esencial del derecho fundamental<sup>15</sup>. De esta forma, se invocó al legislador para que expidiera una ley estatutaria que regulara el derecho fundamental del Habeas corpus, los procedimientos y recursos para su protección antes del 31 de diciembre de 2002, pues de no ser así, las disposiciones mencionadas desaparecerían del ordenamiento a partir de ese momento”<sup>282</sup>.

### 3.5.6. Chile

En la experiencia chilena nos ha permitido apreciar la evolución histórica de este proceso constitucional. Por tal motivo, se ha considerado adecuado hacer algunas referencias de orden evolutivo.

El primer antecedente del hábeas corpus en Chile se ubica en la Constitución Política Provisional de 1812, la que establece en el artículo 2 del Título I, Capítulo I el siguiente mandato:

---

<sup>281</sup> Loc. cit.

<sup>282</sup> MANTILLA MARTÍNEZ, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. Op. cit., p. 66-67.

*“Ninguno debe ser castigado o desterrado sin que sea oído i legalmente convencido de algún delito contra el cuerpo social”.*

Cabe destacar que su artículo 16 establece además que *“se respetará el derecho que los ciudadanos tienen a la **seguridad de sus personas**”*, prohibiendo órdenes inmotivadas de aprehensión. De igual manera, el artículo 17 establece que el gobierno debe velar por *“el **cumplimiento de las leyes** i de los deberes de los magistrados, sin perturbar sus funciones”*.

Posteriormente, la Carta de 1822 establece en su artículo 205 que *“todo acto ejercido contra un hombre, fuera del caso i sin las formalidades que la ley prescribe, es arbitrario y tiránico”*.

Su corta vida hizo posible la Constitución Moralista de Egaña de 1823 que otorga atribuciones Senado Conservador Legislador, encargado de *“proteger y defender las garantías individuales, con especial responsabilidad”* (artículo 38.5). Asimismo, el artículo 146 establece que la Corte Suprema de Justicia busca *“proteger, hacer cumplir i reclamar a los otros poderes del Estado, por las garantías individuales”*.

Si bien las referidas menciones permiten tener una idea clara sobre la protección de la libertad personal, es con la Carta de 1833 que formalmente **consagra al habeas corpus**, precisamente por el artículo 143 que expresa lo siguiente:

*“Todo individuo que se hallare preso o detenido ilegalmente, por haberse faltado a lo dispuesto en los artículos 135, 137, 138 i 139, podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la lei reclamando que se guarden las formas legales. Esta magistratura decretará que el reo sea traído a su presencia i su decreto será precisamente obedecido por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen los defectos legales i pondrá al reo a*

*disposición del juez competente, procediendo en todo, breve i sumariamente corrigiendo por sí o dando cuenta a quien corresponda corregir los abusos”.*

Por su parte, la Carta de 1925 establece en su capítulo III (Garantías Constitucionales) el artículo 16 que contiene el siguiente mandato referido al hábeas corpus:

*“Todo individuo que se hallare detenido, procesado o preso, con infracción de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, en demanda de que se guarden las formalidades legales. Esta magistratura podrá decretar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija”.*

Ya en lo que respecta a la actual normativa, el artículo 21 de la Carta de 1980 regula la protección de la libertad personal a través del siguiente mandato:

*“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.*

A su vez, precisa lo siguiente:

*“Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente,*

*procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija”.*

En relación al recurso refiere lo siguiente:

*“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.*

### **3.6. MARCO CONCEPTUAL**

#### **3.6.1. Concepto de hábeas corpus**

Como señala Susana Castañeda, “el hábeas corpus ha constituido, y constituye en diversos ordenamientos jurídicos, el mecanismo específico de protección de la libertad personal. En el caso peruano, en su evolución histórica, el ámbito de protección se ha extendido a la defensa de la libertad individual y derechos constitucionales conexos”<sup>283</sup>.

#### **3.6.2. Libertad personal**

Consagrada en el artículo 2º inciso 24 de la Constitución Política, la libertad personal “ampara el estado de libertad física o corporal de la persona, entendido como una situación en la cual ella se encuentra libre de medidas como la detención, el arresto o el internamiento. Se protege la facultad de la persona de autodeterminar su situación en el espacio o, más precisamente, el derecho a no ser obligada a permanecer en un lugar

---

<sup>283</sup> CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés. “Prólogo”, en *Proceso de hábeas corpus*, cit., p. 7.

determinado. Dicho [en otras palabras], se tutela el derecho a abandonar el lugar donde uno se encuentre; el derecho a marcharse”<sup>284</sup>.

### **3.6.3. Detención judicial preventiva**

Como señala Castillo Córdova, “el mandato de detención se convierte en una de las piezas claves para determinar afectaciones indebidas a la libertad individual, en su versión de libertad locomotora”<sup>285</sup>. Señala el autor que “la justificación que legitima la detención de un procesado sin que haya sentencia, es que con esa medida se posibilita la consecución de la finalidad del proceso penal. Significa esto que el procesamiento en libertad del denunciado supone un verdadero peligro para la consecución de la mencionada finalidad”<sup>286</sup>.

### **3.6.4. Detención realizada por efectivos policiales en caso de flagrancia delictiva**

Como señala Teresa Molina, flagrancia “es la calidad de flagrante, y flagrante significa que se está ejecutando actualmente, en el mismo momento de estarse cometiendo el delito, sin que el autor haya podido huir. Un delito será, por tanto, flagrante en el mismo momento que se comete, después de lo cual dejará de serlo”<sup>287</sup>.

### **3.6.5. Derechos conexos a la libertad personal**

Como señala la doctrina, si bien “la libertad individual constituye el objeto esencial del hábeas corpus [...], su campo de acción no puede ser delimitado de manera restrictiva, debido a que tal concepción determinaría la indefensión de los seres humanos frente a las

---

<sup>284</sup> CASAL, Jesús María. “Libertad personal, seguridad individual y debido proceso en Venezuela”, en *Ius et praxis*, Vol. 5, Nº 1, Universidad de Talca, Talca, 1999, p. 167.

<sup>285</sup> CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”, Palestra, Lima, 2006, T. II, p. 539.

<sup>286</sup> Loc. cit.

<sup>287</sup> MOLINA, Teresa, “La entrada y registro practicada por la política en el supuesto de la flagrancia y la posesión de drogas en domicilio particular”, en *Anuario jurídico y económico escorialense*, Nº 37, Real Centro Universitario escorial, Madrid, 2004, p. 141.

agresiones infringidas en contra de derechos fundamentales que inciden sobre la libertad individual”<sup>288</sup>.

### 3.6.6. Ampliación del marco de acción del proceso de hábeas corpus

A decir de Néstor Pedro Sagüés, la extensión de supuestos del hábeas corpus se debe a que “el desarrollo posterior del instituto [...] lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él. De ahí que se reconozca que algunas figuras del hábeas corpus [...] abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos –constitucionales también– aunque de índole distinta”<sup>289</sup>.

## 4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Se han formulado cuatro hipótesis, las cuales han sido clasificadas en generales y particulares, correspondiendo dos hipótesis a cada categoría.

### 4.1. HIPÓTESIS GENERALES

Se han formulado dos hipótesis generales.

#### 4.1.1. Hipótesis general N° 1

La literatura accedida nos permite formular la siguiente hipótesis general:

*“El principal ámbito en el que se vulneran los derechos conexos a la **libertad personal** es el de los procesos judiciales penales debido a que en ellos se menoscaban los derechos que componen la **tutela procesal efectiva**”.*

<sup>288</sup> CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés. “Prólogo”, en *Proceso de hábeas corpus*, cit., p. 17.

<sup>289</sup> SAGÜÉS, Néstor Pedro, *Derecho procesal constitucional: hábeas corpus*, Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 143.



#### a. Operacionalización de la variable independiente

- La variable independiente es “**libertad personal**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es el “*ámbito de vulneración del derecho conexo*”.
- Las categorías identificables podrán ser “*proceso judicial*” y “*otro*”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### b. Operacionalización de la variable dependiente

- La variable dependiente es “**tutela procesal efectiva**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*resguardo*”.
- Las categorías identificables podrán ser “*no*” y “*sí*”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### 4.1.2. Hipótesis general N° 2

Por otro lado, se ha formulado la segunda hipótesis general:

*“El debido proceso es el derecho conexo a la **libertad personal** cuya afectación es la más recurrida a través del proceso de hábeas corpus, en razón de que los juzgadores desconocen **actuaciones procesales** de suma importancia en el trámite de los procesos judiciales penales”.*

#### a. Operacionalización de la variable independiente

- La variable independiente es “**actuación procesal**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*adecuada*”.

- Las categorías identificables podrán ser “no” y “sí”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### **b. Operacionalización de la variable dependiente**

- La variable dependiente es “**libertad personal**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*derecho conexo vulnerado*”.
- Las categorías identificables podrán ser “*debido proceso*” y “*otro*”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

## **4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS**

Se han formulado dos hipótesis específicas.

### **4.2.1. Hipótesis específica N° 1**

La literatura accedida nos permite formular la siguiente hipótesis específica:

*“Los juzgadores penales desconocen los **precedentes vinculantes** expedidos por el **Tribunal Constitucional** relativos al respeto de los derechos conexos a la libertad personal debido a que se vulneran los derechos que componen la **tutela procesal efectiva** en los procesos judiciales penales recurridos”.*

#### **a. Operacionalización de la variable independiente**

- La variable independiente es “**precedente vinculante**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*conocimiento por los juzgadores penales*”.
- Las categorías identificables podrán ser “no” y “sí”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### **b. Operacionalización de la variable interfiriente**

- La variable interfiriente es “**emisor**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*Tribunal Constitucional*”.
- Las categorías identificables podrán ser “*sí*” y “*no*”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### **c. Operacionalización de la variable dependiente**

- La variable dependiente es “**tutela procesal efectiva**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*resguardo*”.
- Las categorías identificables podrán ser “*no*” y “*sí*”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### **4.2.2. Hipótesis específica N° 2**

Por otro lado, se ha formulado la segunda hipótesis general:

*“La dimensión sustantiva del **debido proceso** resulta ser más vulnerada que la dimensión formal por parte de los **jueces** penales, ya que existe mayor propensión a desconocer parámetros de **razonabilidad** y de **proporcionalidad**, generándose la **vulneración** de los derechos conexos a la libertad personal”.*

#### **a. Operacionalización de la variable independiente**

- La variable independiente es “**debido proceso**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “*resguardo*”.

- Las categorías identificables podrán ser “no” y “sí”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

#### **a. Operacionalización de la variable dependiente**

- La variable dependiente es “**libertad personal**”.
- Su sistema de medición es *nominal*.
- Su indicador es “vulneración de derechos conexos”.
- Las categorías identificables podrán ser “sí” y “no”.
- Los datos serán “1” ó “2”, respectivamente.

## **5. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

El proyecto de tesis corresponde al de una **investigación descriptiva, correlacional, exploratoria y explicativa**, conforme se describe a continuación pues se encarga de identificar los supuestos frente a los cuales se vulnera la libertad personal, como también las de aquellas otras que generan la afectación de dicho atributo.

### **5.1. Investigación descriptiva**

Es descriptiva pues detalla el estado de desprotección de los derechos conexos con la libertad personal y su resguardo a través del proceso de hábeas corpus.

### **5.2. Investigación correlacional**

Es correlacional pues enlaza todas las variables para establecer su relación en la producción de la vulneración de los derechos conexos con la libertad personal.

### **5.3. Investigación exploratoria**

La investigación es exploratoria debido a que analizará las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional para determinar los supuestos que originan la vulneración de los derechos conexos a la libertad personal por parte de los jueces penales y, en esa medida, establecer las medidas dirigidas a su tutela.

#### **5.4. Investigación explicativa**

Es explicativa pues fundamenta las causas del problema y las medidas dirigidas a solucionar el problema.

### **6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**

El diseño de la investigación es **no experimental longitudinal**, pues:

- No se manipulan las variables y
- Se desarrolla a lo largo de enero y febrero de 2010.

### **7. UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN. SELECCIÓN DE MUESTRA. UNIDAD DE ANÁLISIS**

#### **7.1. UNIVERSO**

El universo de investigación lo constituyen las *resoluciones de hábeas corpus emitidas por el Tribunal Constitucional peruano durante enero y febrero de 2010*.

#### **7.2. SELECCIÓN DE MUESTRA**

La selección de muestra es realizada *al azar*. Para realizar la selección de la muestra al azar será necesario recurrir a la siguiente fórmula:

### 7.2.1. Fórmula para la selección de la muestra

$$n = \frac{(Z)^2 (PQ N)}{(E)^2 (N-1) + (Z)^2 PQ}$$

#### LEYENDA

Z = Desviación estándar

E = Error de muestreo

P – Probabilidad de ocurrencia de los casos

Q = 1 – P

N = Tamaño del universo de población

### 7.2.2. Operacionalización de la fórmula

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5 \times 0.5) (93)}{[(0.05)^2 (93-1)] + [(1.96)^2 (0.5 \times 0.5)]}$$

$$n = 75$$

### 7.2.3. Tabla de selección aleatoria de números

Esta tabla nos permite escoger 75 números menores o iguales a 93 para identificar las 75 muestras que serán estudiadas para determinar si las hipótesis formuladas se cumplen en la realidad.

10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17 39 29 27 49 45  
 37 54 20 48 05 64 89 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02 00 82 29 16 65  
 08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64 35 08 03 36 06  
 99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97 04 43 62 76 59  
 12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77 12 17 17 08 33

66 06 57 47 17 34 07 27 68 50 36 69 73 61 70 65 81 33 98 85 11 19 92 91 70  
 31 06 01 08 05 45 57 18 24 06 35 30 34 26 14 86 79 90 74 39 23 40 30 97 32  
 85 26 97 76 02 02 05 16 56 92 68 66 57 48 18 73 05 38 52 47 18 62 38 85 79  
 63 57 33 21 35 05 32 54 70 48 90 55 35 75 48 28 46 82 87 09 83 49 12 56 24  
 73 79 64 57 53 03 52 96 47 78 35 80 83 42 82 60 93 52 03 44 35 27 38 84 35

98 52 01 77 67 14 90 56 86 07 22 10 94 05 58 60 97 09 34 33 50 50 07 39 98  
 11 80 50 54 31 39 80 82 77 32 50 72 56 82 48 29 40 52 42 01 52 77 56 78 51  
 83 45 29 96 34 06 28 89 80 83 13 74 67 00 78 18 47 54 06 10 68 71 17 78 17  
 88 68 54 02 00 86 50 75 84 01 36 76 66 79 51 90 36 47 64 93 29 60 91 10 62  
 99 59 46 73 48 87 51 76 49 69 91 82 60 89 28 93 78 56 13 68 23 47 83 41 13

65 48 11 76 74 17 46 85 09 50 58 04 77 69 74 73 03 95 71 86 40 21 81 65 44  
 80 12 43 56 35 17 72 70 80 15 45 31 82 23 74 21 11 57 82 53 14 38 55 37 63  
 74 35 09 98 17 77 40 27 72 14 43 23 60 02 10 45 52 16 42 37 96 28 60 25 55  
 69 91 62 68 03 66 25 22 91 48 36 93 68 72 03 76 62 11 39 90 94 40 05 64 18  
 09 89 32 05 05 14 22 56 85 14 46 42 75 67 68 96 29 77 88 22 54 38 21 45 98

91 49 91 45 23 68 47 92 76 86 46 16 28 35 54 94 75 08 99 23 37 08 92 00 48  
 80 33 69 45 98 26 94 03 68 58 70 29 73 41 35 53 14 03 33 40 42 05 08 23 41  
 44 10 48 19 49 85 15 74 79 54 32 97 92 65 75 57 60 04 08 81 22 22 20 54 13  
 12 55 07 37 42 41 10 00 20 40 12 86 07 46 97 96 64 48 94 39 28 70 72 58 15  
 63 60 64 93 29 16 50 53 44 84 40 21 95 25 63 43 65 17 70 82 07 20 73 17 90

61 19 69 04 46 26 45 74 77 74 51 92 43 37 29 65 39 45 95 93 42 58 26 05 27

15 47 44 52 66 95 27 07 99 53 59 36 78 38 48 82 39 61 01 18 33 21 15 94 66

94 55 72 85 73 67 89 75 43 87 54 62 24 44 31 91 19 04 25 92 92 92 74 59 73

42 48 11 62 13 97 34 40 87 21 16 86 84 87 67 03 07 11 20 59 25 70 14 66 70

23 52 37 83 17 73 20 88 98 37 68 93 59 14 16 26 25 22 96 63 05 52 28 25 62

04 49 35 24 94 75 24 63 38 24 45 86 25 10 25 61 96 27 93 35 65 33 71 24 72

00 54 99 76 54 64 05 18 81 59 96 11 96 38 96 54 69 28 23 91 23 28 72 95 29

35 96 31 53 07 26 89 80 93 54 33 35 13 54 62 77 97 45 00 24 90 10 33 93 33

59 80 80 83 91 45 42 72 68 42 83 60 94 97 00 13 02 12 48 92 78 56 52 01 06

46 05 88 52 36 01 39 09 22 86 77 28 14 40 77 93 91 08 36 47 70 61 74 29 41

32 17 90 05 97 87 37 92 52 41 05 56 70 70 07 86 74 31 71 57 85 39 41 18 38

69 23 46 14 06 20 11 74 52 04 15 95 66 00 00 18 74 39 24 23 97 11 89 63 38

19 56 54 14 30 01 75 87 53 79 40 41 92 15 85 66 67 43 68 06 84 96 28 52 07

45 15 51 49 38 19 47 60 72 46 43 66 79 45 43 59 04 79 00 33 20 82 66 95 41

94 86 43 19 94 36 16 81 08 51 34 88 88 15 53 01 54 03 54 56 05 01 45 11 76

### 7.3. UNIDAD DE ANÁLISIS

Las constituyen las siguientes **75 muestras seleccionadas**, las cuales han sido sombreadas para facilitar su identificación

#### Muestras seleccionadas

<b>1</b>	<b>33</b>	<b>65</b>
<b>2</b>	<b>34</b>	<b>66</b>
<b>3</b>	<b>35</b>	<b>67</b>
<b>4</b>	<b>36</b>	<b>68</b>
<b>5</b>	<b>37</b>	<b>68</b>



<b>6</b>	<b>38</b>	<b>70</b>
<b>7</b>	<b>39</b>	<b>71</b>
<b>8</b>	<b>40</b>	<b>72</b>
<b>9</b>	<b>41</b>	<b>73</b>
<b>10</b>	<b>42</b>	<b>74</b>
<b>11</b>	<b>43</b>	<b>75</b>
<b>12</b>	<b>44</b>	<b>76</b>
<b>13</b>	<b>45</b>	<b>77</b>
<b>14</b>	<b>46</b>	<b>78</b>
<b>15</b>	<b>47</b>	<b>79</b>
<b>16</b>	<b>48</b>	<b>80</b>
<b>17</b>	<b>49</b>	<b>81</b>
<b>18</b>	<b>50</b>	<b>82</b>
<b>19</b>	<b>51</b>	<b>83</b>
<b>20</b>	<b>52</b>	<b>84</b>
<b>21</b>	<b>53</b>	<b>85</b>
<b>22</b>	<b>54</b>	<b>86</b>
<b>23</b>	<b>55</b>	<b>87</b>
<b>24</b>	<b>56</b>	<b>88</b>
<b>25</b>	<b>57</b>	<b>89</b>
<b>26</b>	<b>58</b>	<b>90</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>91</b>
<b>28</b>	<b>60</b>	<b>92</b>

29	61	93
30	62	
31	63	
32	64	

## **8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. TRABAJO DE CAMPO**

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

### **8.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

La técnica de recolección de datos es la *revisión de las sentencias* del Tribunal Constitucional.

### **8.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

El instrumento que permitirá la recolección y sistematización de los datos será a través de la *matriz de datos*.

### **8.3. TRABAJO DE CAMPO**

Conforme se ha expresado, el trabajo de campo ha sido realizado sobre las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional durante enero y febrero de 2010.

### 8.3.1. Criterios para realizar el trabajo de campo

Para tales efectos, se ha considerado necesario analizar cada una de las 93 resoluciones expedidas dentro de dicho período, tomando como referente una serie de criterios, entre los cuales se encuentran los siguientes:

- Muestra
- Sentencia
- Demandante
- Demandado
- Petitorio
- Clase de hábeas corpus
- Fallo
- Fundamento legal
- Pronunciamiento
- Ubicación de la muestra (URL)

### 8.3.2. Muestras que componen el trabajo de campo

Para efectos didácticos, las muestras han sido clasificadas de acuerdo a la fecha de su emisión durante enero y febrero de 2010.

#### a. Muestras del 4 de enero de 2010

Muestra	1
Sentencia	EXP. N.º 00815-2007-PHC/TC
Demandante	Justo Germán Flores Llerena
Demandado	Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura
Petitorio	La demanda tiene por objeto la nulidad de la resolución judicial N° 2, su fecha 4 de octubre de 2006, emitida por el

	Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura en la investigación N° 216-2006 seguida contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación Sexual, ya que se alega que no se han tomado en cuenta otros medios probatorios para dilucidar los hechos materia de investigación.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139° inciso 5 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El acto de intervención corporal de toma de muestra de ADN, dictado en el presente caso, resulta una medida legítima, por lo que la pretensión del demandante debe ser desestimada”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00815-2007-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00815-2007-HC.html</a>

Muestra	<b>2</b>
Sentencia	EXP. N.° 5122-2009-PHC/TC
Demandante	Rosa Alicia Olivares de la Cruz
Demandado	Juez del Tercer Juzgado Penal del Santa
Petitorio	En el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de difamación agravada (Exp. N. ° 2007-706), no ha sido debidamente notificada con dicha querella, el auto de apertura de instrucción y demás anexos.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La pretensión y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad</i>

	<i>personal, al no ser atribución del juez del hábeas corpus realizar el examen de un decreto de mero trámite, por no incidir en la libertad”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05122-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05122-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>3</b>
Sentencia	EXP. N.º 5205-2009-PHC/TC
Demandante	Román Luis Inga Surichaqui
Demandado	Vocales integrantes de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior del Callao
Petitorio	En el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica (Exp. N.º 2001-02393), la Sala emplazada declaró nula la sentencia apelada aplicando erróneamente el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales toda vez que el Ministerio Público no fundamentó su recurso de apelación en el plazo legal pertinente.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05205-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05205-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### **b. Muestras del 5 de enero de 2010**

Muestra	<b>4</b>
---------	----------

Sentencia	EXP. N.º 04253-2009-PHC/TC
Demandante	Jair Ardela Michhue
Demandado	Ex – juez del Cuarto Juzgado Penal de Maynas
Petitorio	Se declare la nulidad del procedimiento de extradición y se disponga su inmediata libertad; por la vulneración del derecho al debido proceso, en conexidad con la libertad individual.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	<p>1. Declarar FUNDADA la demanda porque la extradición del demandante contraviene el principio de reciprocidad reconocido en el artículo 37º de la Constitución.</p> <p>2. Declarar terminado el procedimiento de extradición de don Jair Ardela Michhue, y por ende, denegar su extradición, así como concluido el mandato de detención que se le ha impuesto.</p> <p>3. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la afectación del derecho al debido proceso.</p>
Fundamento legal	Artículo 37º de la Constitución
Pronunciamiento	<p><i>“Este Tribunal estima pertinente que para evaluar la constitucionalidad de la extradición del demandante también debe analizar si ésta respeta el principio de reciprocidad. Así debe resaltarse que entre el Perú y el Brasil no opera el principio de reciprocidad reconocido en el artículo 37º de la Constitución, pues si bien entre ambos países existe un tratado de extradición, debe tenerse presente que la Constitución de Brasil en su artículo 5º, inciso LI establece que “ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado”, es decir, que sólo existe reciprocidad entre el Perú y el Brasil para extraditar</i></p>

	<p><i>extranjeros.</i></p> <p><i>Teniendo presente ello, este Tribunal estima que la extradición del demandante debe ser denegada debido a que la Constitución del Brasil es contraria al principio de reciprocidad pues no permite que sus nacionales puedan ser extraditados al Perú para ser procesados penalmente.</i></p> <p><i>En buena cuenta por no existir entre el Brasil y el Perú las mismas condiciones para la extradición de sus nacionales, el pedido de extradición del demandante debe ser denegado y el procedimiento terminado, razón por la cual el mandato de detención que se le impuso debe ser dejado sin efecto, sin perjuicio de las obligaciones penales a que hubiera lugar”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04253-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04253-2009-HC.html</a>

### c. Muestras del 6 de enero de 2010

Muestra	<b>5</b>
Sentencia	EXP. N.º 03391-2009-PHC/TC
Demandante	Pavel Bonilla Cáceres
Demandado	División de Tráfico de Drogas DIVANDRO-Chiclayo y contra la titular de la Fiscalía Antidrogas de la Provincial de Chiclayo
Petitorio	El beneficiario fue detenido de manera arbitraria e implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas, y que a la fecha se encuentran en los calabozos de la mencionada dirección policial. Agrega que al momento de su detención no existió flagrancia ni una orden judicial.
Clase de hábeas corpus	Por vulneración de la libertad personal

Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 1° del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“En el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que la reposición del derecho a la libertad individual respecto a la supuesta arbitrariedad que habría constituido la detención policial del favorecido se ha tornado en irreparable en momento posterior a la postulación de la presente demanda, resultando que, a la fecha, el actor viene siendo instruido en la vía penal, en donde puede hacer valer su derecho conforme a la ley, y en la que el Juez de la Investigación Preparatoria es competente para dictar la medida de coerción de la libertad que corresponda, si fuera el caso”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03391-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03391-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>6</b>
Sentencia	EXP. N.º 02998-2009-PHC/TC
Demandante	José Manuel Mejía Regalado
Demandado	Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Maynas y el Juez de Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima
Petitorio	La decisión fiscal de formalización de denuncia penal y el auto de ampliación de apertura de instrucción dictados en su contra vulnerarían sus derechos constitucionales a la motivación resolutoria y su libertad personal.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional



	artículo 139°, inciso 5 de la Constitución
Pronunciamiento	<p><i>“La actividad del Ministerio Público es eminentemente postulatoria, y en ningún caso decisoria ni sancionatoria, pues no posee facultades coactivas contra la libertad personal ni de decisión directa para el inicio del proceso penal.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Este Colegiado aprecia que la resolución de fecha 16 de enero de 2008, auto ampliatorio de apertura de instrucción, a fojas 304, sí se adecua en rigor a lo que estipulan tanto el artículo 139°, inciso 5 de la Constitución como la ley procesal penal citada, ya que de sus fundamentos primero y segundo se aprecia la presunta vinculación del demandante con los delitos que se le imputa, lo cual permite sustentar la apertura del proceso penal instaurado contra su persona; es decir, se advierte la descripción fáctica y jurídica del evento delictuoso”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02998-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02998-2009-HC.html</a>

Muestra	7
Sentencia	EXP. N.º 05935-2008-PHC/TC
Demandante	César Enrique Pérez Escobar
Demandado	Vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
Petitorio	Se declare la anulación de la ejecutoria suprema de fecha 22 de noviembre de 2006, emitida por los jueces supremos accionados y se ordene la realización de un nuevo juicio oral, alegando principalmente la vulneración del derecho a probar. De otro lado refiere que no se ha valorado las

	declaraciones testimoniales ofrecidas por la defensa.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional artículo 139°, inciso 5 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Este Colegiado considera que el hecho de no haberse admitido la pericia psicológica solicitada responde a que la Sala se había creado ya convicción respecto al estado mental del citado menor, sobre todo teniendo en consideración su declaración testimonial y otros elementos de prueba a lo largo del proceso”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05935-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05935-2008-HC.html</a>

#### **d. Muestras del 7 de enero de 2010**

Muestra	<b>8</b>
Sentencia	EXP. N.º 04156-2009-PHC/TC
Demandante	Orlando Mallqui López
Demandado	Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita
Petitorio	El recurrente no ha sido notificado de la resolución fiscal de fecha 26 de febrero de 2008
Clase de hábeas corpus	Contra resolución fiscal
Fallo	1. Declarar NULO todo lo actuado a partir de fojas 7 inclusive.  2. Ordenar que en el más breve plazo se remitan los actuados al Juez Civil competente y se tramite la demanda interpuesta por la vía del proceso constitucional de amparo.
Fundamento legal	Artículo 161º del Código Procesal Civil
Pronunciamiento	<i>“El recurrente alega la violación de los derechos al debido</i>

	<p><i>proceso, a la defensa y a la doble instancia, sin que se presenten elementos que de manera objetiva evidencien la afectación o amenaza de afectación de la libertad individual por parte del emplazado, por lo que, resulta evidente que la pretensión debió haber sido tramitada mediante el proceso de amparo y no mediante este proceso.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>El recurrente no ha sido notificado de la resolución fiscal de fecha 26 de febrero de 2008, por lo que, la demanda interpuesta se encuentra dentro del plazo para interponer el amparo”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04156-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04156-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### **e. Muestras del 8 de enero de 2010**

Muestra	<b>9</b>
Sentencia	EXP. N. ° 04162-2009-PHC/TC
Demandante	Jorge Hillpha Vargas
Demandado	55 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima
Petitorio	Amenaza de su derecho a la libertad personal y violación del derecho al debido proceso, de la prohibición de avocamiento indebido ante proceso judicial en trámite y <i>ne bis in ídem</i> procesal, pues a pesar de seguirse contra el favorecido un proceso penal por delito contra la fe pública, la fiscal emplazada le abrió investigación.
Clase de hábeas corpus	Contra la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Se advierte que los hechos alegados por el demandante como lesivos de los derechos constitucionales invocados no</i>

	<i>tienen incidencia directa sobre el derecho a la libertad personal, esto es, no determinan su restricción o limitación, por lo que tal pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04162-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04162-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>10</b>
Sentencia	EXP. N.º 06423-2007-PHC/TC
Demandante	Emmer Guillermo Ruiz Dianderas
Demandado	Jefe de la Policía Judicial de Puno
Petitorio	Su detención es arbitraria, ya que ha transcurrido más de 4 días, y no se le pone a disposición judicial, por lo que solicita la inmediata libertad.
Clase de hábeas corpus	Contra vulneración de la libertad personal
Fallo	Fundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24, literal f de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“La detención arbitraria en el caso bajo examen, se presenta como un dato objetivo, acreditado e incuestionable, vinculado de una u otra forma, a una actuación u omisión, sobre todo, de un poder público; en este caso, de un órgano de la Corte Superior de Justicia de Puno (la administración), con dominio del hecho que produjo la quiebra del derecho; aunado a ello, la actuación del efectivo policial emplazado. No cabe duda, pues, que estamos frente a la vulneración de un derecho fundamental tanto por el Poder Judicial como por el Poder gubernamental”.</i>

URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06423-2007-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06423-2007-HC.html</a>
-----	---

**f. Muestras del 11 de enero de 2010**

Muestra	<b>11</b>
Sentencia	EXP. N.º 06226-2008-PHC/TC
Demandante	Jesús Jorge Bermúdez López
Demandado	Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal Nacional
Petitorio	Dejar sin efecto la sentencia condenatoria expedida contra el favorecido, mediante la que se lo condena a una pena privativa de libertad de 25 años por el delito de terrorismo. Alega que se le ha seguido más de un proceso con el mismo objeto, lo que ha producido sentencias contradictorias que, a la vez, lo absuelven y lo condenan por el mismo hecho delictivo.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139.3 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Las sentencias expedidas en los procesos seguidos al favorecido ante la Sala Penal Nacional, signados con los números 41-1998 y 601-1993, en realidad no resultan sentencias contradictorias que condenen y absuelvan por el mismo hecho. Por el contrario, en ambos procesos se le ha imputado la participación en distintos actos terroristas, lo que no configura una vulneración del ne bis in ídem, por lo que la demanda debe ser desestimada”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06226-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06226-2008-HC.html</a>

**g. Muestras del 12 de enero de 2010**

Muestra	<b>12</b>
Sentencia	EXP. N.º 03782-2008-PHC/TC
Demandante	Julio César Carvajal Cayllahua
Demandado	Juez del Quincuagésimo Sexto Juzgado Penal de Lima
Petitorio	Se declare la nulidad de: i) la Resolución de fecha 25 de mayo de 2007 que abre instrucción en su contra por el delito de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso (Expediente N.º 662-07); y ii) la Denuncia Penal de fecha 25 de abril de 2007 que denuncia al demandante por el delito señalado; y iii) sin efecto el Atestado Policial N.º 866-2007-DIRINCRI-DIVPOMIP/D4 de fecha 21 de febrero de 2007.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“No encontrando que los hechos y el petitorio estén referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal la demanda debe ser rechazada en aplicación de lo establecido en el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional toda vez que las actuaciones judiciales, fiscales y policiales que se cuestionan no redundan en un agravio al derecho fundamental a la libertad personal”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03782-2008-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03782-2008-HC%20Resolucion.html</a>

**h. Muestras del 13 de enero de 2010**

Muestra	<b>13</b>
Sentencia	EXP. N.º 04901-2009-PHC/TC
Demandante	Fraxilia Paredes Díaz
Demandado	Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Miraflores y el Comisario de la Comisaría de Pamplona 2 de San Juan de Miraflores
Petitorio	Interpuso denuncia por el delito de usurpación agravada, y que, a la fecha de la interposición de la demanda los demandados habían omitido actuar las diligencias solicitadas, no habiéndose dispuesto una inspección fiscal sobre el lote usurpado.
Clase de hábeas corpus	Contra la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículos 159º, inciso 4 y artículo 166º de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental recaudada, se advierte de manera objetiva que los hechos alegados de lesivos por la accionante (...) en modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal, sea como amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04901-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04901-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>14</b>
Sentencia	EXP. N.º 04971-2009-PHC/TC
Demandante	Francisco Chorres Carrasco

Demandado	Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
Petitorio	Dispusieron una comunicación de internamiento del vehículo de placa UD-3846, reteniéndolo indebida e inmotivadamente, por lo que solicita que se declare su nulidad así como la nulidad de los actos subsecuentes y la improcedencia de cualquier sanción por no haber existido un debido procedimiento; solicita, además, que se ordene a los demandados el pago de las costas.
Clase de hábeas corpus	Contra la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 200°, inciso 1 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Se advierte de manera objetiva que los hechos alegados como lesivos y que se encontrarían materializados en los actos de disposición de bienes, en este caso vehículo de placa de rodaje UD-3846 sin que exista razón o mandato justificado, en modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad personal del actor, sea como amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04971-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04971-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>15</b>
Sentencia	EXP. N.º 05007-2009-PHC/TC
Demandante	Carlos Víctor Dávila Campoverde
Demandado	Dora Esther Dávila Campoverde
Petitorio	Debido a que tiene la calidad de copropietario del inmueble



	y que la emplazada se encuentra procesada penalmente por usurpación agravada; solicita, por ello, que en sede constitucional se esclarezcan las circunstancias en las que se habría realizado el precitado contrato de compraventa.
Clase de hábeas corpus	Contra la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Lo cual excede el objeto y finalidad del presente proceso constitucional libertario, por lo que la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05007-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05007-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### **i. Muestras del 14 de enero de 2010**

Muestra	<b>16</b>
Sentencia	EXP. N.º 02976-2009-PHC/TC
Demandante	Jesús Linares Cornejo
Demandado	Presidente de la República y otros
Petitorio	Se le ha despojado de la posesión y de la propiedad de las acciones de la Inmobiliaria Oropesa S.A., ordenando la “entrega” de los bienes de la empresa bajo apercibimiento de detención, lo que ha sido ejecutado el mismo día sin haber sido notificados; todo lo cual, según refiere, constituye una afectación de su derecho a la libertad y de los demás socios.
Clase de hábeas corpus	Contra la libertad personal
Fallo	Improcedente

Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“No puede ser resuelto en este proceso constitucional de hábeas corpus, por no ser la vía legal habilitada para ello, y por cuanto los hechos alegados de lesivos per se no tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad individual”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02976-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02976-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>17</b>
Sentencia	EXP. N.º 03628-2009-PHC/TC
Demandante	Jesús Linares Cornejo
Demandado	Presidente de la República y otros
Petitorio	Los demandados, sin ningún mandato judicial y utilizando para ello un proceso de quiebra le negaron a la empresa la prescripción; y que, luego de desarchivar el proceso con ayuda de vocales supremos, la expulsaron como demandada y nombraron como representante a un aprista síndico de quiebras, prohibiéndole presentar escritos y revisar su expediente.
Clase de hábeas corpus	Contra la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03628-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03628-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>18</b>
Sentencia	EXP. N.º 05047-2009-PHC/TC
Demandante	Julio César Cortez Torres
Demandado	Juez del Cuadragésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima
Petitorio	Se declaró la prescripción de la acción penal incoada en su contra y, no obstante ello, ha venido siendo procesado por los mismos hechos en proceso tramitado ante la Juez emplazada.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 1º del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Este Tribunal considera que se ha producido la sustracción de la materia, pues el acto considerado como lesivo consistente en la existencia del proceso penal tramitado contra el Cuadragésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima ha cesado, pues conforme se aprecia de autos, mediante resolución de fecha 31 de diciembre de 2008 (fojas 240) se declaró de oficio la prescripción de la acción penal incoada en contra del recurrente la que se declaró consentida mediante resolución de fecha 6 de marzo de 2009 (fojas 242)”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05047-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05047-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### j. Muestras del 15 de enero de 2010

Muestra	<b>19</b>
---------	-----------

Sentencia	EXP. N.º 02503-2009-PHC/TC
Demandante	Jesús Alberto Arbañil Castañeda
Demandado	Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Lambayeque y contra la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Petitorio	Cuestiona la revocatoria de la suspensión de la pena por cuanto no se habría notificado el apercibimiento de cumplir con las reglas de conducta en su domicilio real, pues ha quedado demostrado que no ha incumplido con la prohibición de variar de domicilio sin autorización del juzgado y que la apelación contra la resolución que en primera instancia fue interpuesta únicamente por su abogada falsificando su firma.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 59 del Código Penal
Pronunciamiento	<i>“Los apercibimientos habrían sido debidamente notificados al domicilio indicado por el recurrente y que, en su caso, la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad se basó en el incumplimiento de las reglas de conducta, por lo que la demanda debe ser desestimada”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02503-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02503-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>20</b>
Sentencia	EXP. N.º 03568-2009-PHC/TC
Demandante	Jeny Prado Aparicio
Demandado	Fiscalía Provincial Mixta de Huanta
Petitorio	Se declare la nulidad del acta fiscal de fecha 5 de mayo de

	2009, mediante la cual se ratifica en el acta fiscal de acuerdo de beneficio por colaboración eficaz de fecha 26 de febrero de 2009, alegando la violación del derecho al debido proceso, así como de los derechos a la vida y a la integridad física conexos con la libertad personal.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución fiscal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Se advierte que lo que en puridad cuestiona la actora es la concesión al favorecido por el Ministerio Público del beneficio de disminución de la pena en lugar del beneficio de la exención de la pena (...); siendo así, se tiene que los cuestionamientos descritos por la actora, antes que buscar la protección de los derechos fundamentales invocados, están referidos a aspectos de mera legalidad que no son tutelables en esta sede constitucional”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03568-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03568-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>21</b>
Sentencia	EXP. N.º 4845-2009-PHC/TC
Demandante	José Luis Castillo Alva
Demandado	Juez del Segundo Juzgado Penal de Pisco
Petitorio	Se declare nulo el Auto de Apertura de Instrucción de fecha 29 de enero del 2007, por el que se abre instrucción contra los favorecidos por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo (Expediente N.º 2008-014-SJPP-SB0), se alega la vulneración de sus derechos a la libertad individual, al debido proceso, de defensa, a la motivación de resoluciones judiciales y del

	principio de imputación necesaria.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente e infundada
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional y 139°.5 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Al Tribunal Constitucional no le compete determinar si existe, o no, responsabilidad penal de los inculpados, ni realizar una valoración de las pruebas de cargo o descargo, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. (...) No se ha acreditado la vulneración en el extremo referido a la falta de motivación del auto de apertura de instrucción”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04845-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04845-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>22</b>
Sentencia	EXP. N.° 05640-2009-PHC/TC
Demandante	Luis Ernesto Taype Miranda
Demandado	Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
Petitorio	Se declare la nulidad de la Resolución N.° 2 de fecha 13 de marzo de 2009, que dispone su prisión preventiva del actor en el proceso que se le sigue por los delitos de lesiones graves y asociación ilícita para delinquir (Instrucción N.° 2009-646-14).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional

Pronunciamiento	<i>“No se acredita que la resolución cuestionada (fojas 34) cumpla con el requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los derechos reclamados, habilitando así su examen constitucional”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05640-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05640-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### k. Muestras del 19 de enero de 2010

Muestra	<b>23</b>
Sentencia	EXP. N.º 5261-2009-PHC/TC
Demandante	Julio Huiza Yauri
Demandado	Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica
Petitorio	Se declaren nulas la sentencia de fecha 17 de marzo del 2009, que lo condena por el delito contra el patrimonio, receptación (Expediente N.º 2008-00648-0-1101-JR-PE-01) y su confirmatoria de fecha 2 de junio de 2009, pues vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva y a la libertad individual.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de los magistrados emplazados y las valoraciones que realizaron respecto a la conducta del recurrente de comprar el combustible sin solicitar algún documento sobre la procedencia del mismo, pese al conocimiento sobre las modalidades de compra en el</i>

	<i>negocio de combustible y de la declaración instructiva del recurrente en la que reconoce la compra del combustible; consideraciones que sirvieron de sustento para la condena del recurrente”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05261-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05261-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>24</b>
Sentencia	EXP. N.º 05351-2009-PHC/TC
Demandante	Federico Zenón Hinojosa Minaya
Demandado	Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambo Grande
Petitorio	No se le ha recepcionado su manifestación policial, tampoco se ha levantado las actas de constatación de daños, de inmovilización, de registros domiciliario, etc., mucho menos le ha sido notificada alguna disposición o resolución
Clase de hábeas corpus	Contra resolución del Ministerio Público
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La investigación (...) no determina restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05351-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05351-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>25</b>
Sentencia	EXP. N.º 05437-2009-PHC/TC



Demandante	Roberto Echazu Irala
Demandado	Juez del Quincuagésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima
Petitorio	La emplazada se rehúsa a declarar la prescripción de la acción penal que se que se sigue a la favorecida por el delito contra la libertad de trabajo (Expediente N.º 052-07), lo que atenta contra su derecho a la libertad personal.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“El citado pronunciamiento judicial, que desestima el pedido de la alegada prescripción de la acción penal, no cumple con el requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad al haber sido apelado por la actora y encontrarse pendiente de pronunciamiento judicial”l.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05437-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05437-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>26</b>
Sentencia	EXP. N.º 03542-2009-PA/TC
Demandante	Jesús Teresa Elena Ramos Cornejo
Demandado	Decimocuarto Juzgado Civil de Lima y otros
Petitorio	Al desestimarse su demanda los órganos judiciales incurrieron en graves irregularidades pues no merituaron adecuadamente la información del registro nacional de protestos y moras ni la de la central de riesgos de Infocorp, ni las fichas registrales de otras propiedades del deudor
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente

Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr. RTC N.º 02585-2009-PA/TC, fundamento 3), situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03542-2009-AA%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03542-2009-AA%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>27</b>
Sentencia	EXP. N.º 00216-2008-PHC/TC
Demandante	Yuri Gonzalo Villalobos Albarracín
Demandado	Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Especializada en Tráfico Ilícito de drogas
Petitorio	Fue condenado a diez años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas; sin embargo, la emplazada le aumentó la pena privativa de la libertad a 25 años, situación que vulnera su derecho constitucional al debido proceso y el principio de legalidad.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Declarar NULA la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 71, a cuyo estado se repone la presente causa, devolviéndose los actuados al Juzgado de origen para que proceda con arreglo a la ley.  Remitir copia de la presente resolución al Órgano de

	Control de la Magistratura (OCMA) para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“En sede judicial no se ha practicado en forma cabal la investigación sumaria que exige la naturaleza de la reclamación planteada por el recurrente, en la que se argumenta una probable violación del principio de congruencia, es decir, respecto de la correspondencia que debe existir entre lo que es materia de la acusación fiscal y la sentencia expedida por la demandada Sala de la Corte Suprema</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p><i>Que al haberse producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del presente proceso constitucional, los actuados deben ser devueltos a fin de que se proceda conforme a ley, en aplicación al artículo 20° del Código Procesal Constitucional”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00216-2008-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00216-2008-HC%20Resolucion.html</a>

### I. Muestras del 20 de enero de 2010

Muestra	<b>28</b>
Sentencia	EXP. N.º 04304-2009-PHC/TC
Demandante	Luis Henry Cisneros Jara
Demandado	Juzgado Penal Colegiado de La Libertad
Petitorio	se disponga la libertad del favorecido por exceso de detención, en la instrucción que se le sigue por el delito de

	robo agravado, pues se encuentra detenido desde hace 9 meses y 7 días, sin que se haya emitido sentencia en primera instancia.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“En el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que el supuesto agravio a los derechos de la libertad del recurrente –que comportaría el denunciado exceso de detención provisional– ha cesado con la emisión de la resolución judicial que lo sentencia a 12 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado, pronunciamiento judicial este último del que a la fecha dimana la restricción a su derecho a la libertad personal y contra el cual tiene expedito su derecho para hacerlo valer conforme a ley”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04304-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04304-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>29</b>
Sentencia	EXP. N.º 02669-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).

Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<p><i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02669-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02669-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>30</b>
Sentencia	EXP. N.º 02670-2008-PHC/TC
Demandante	Miguel Ángel González Del Rio
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Debe disponerse su inmediata excarcelación al haber transcurrido más de 36 meses sin que se haya dictado sentencia conforme lo establece el artículo 137º del Código Procesal Penal.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial

Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02670-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02670-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>31</b>
Sentencia	EXP. N.º 02673-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada

Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02673-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02673-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>32</b>
Sentencia	EXP. N.º 02675-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución

Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02675-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02675-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>33</b>
Sentencia	EXP. N.º 02683-2008-PHC/TC
Demandante	Lida María Oscorima Vílchez
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta</i>



	<i>obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02683-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02683-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>34</b>
Sentencia	EXP. N.º 02684-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	“El procesado (...) ha desplegado una conducta

	<i>obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02684-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02684-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>35</b>
Sentencia	EXP. N.º 02685-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el</i>

	<p><i>proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i></p>
URL	<p><a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02685-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02685-2008-HC.html</a></p>

Muestra	<b>36</b>
Sentencia	EXP. N.º 02800-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<p><i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás</i></p>

	<i>procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02800-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02800-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>37</b>
Sentencia	EXP. N.º 02570-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo</i>

	<i>frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02570-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02570-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>38</b>
Sentencia	EXP. N.º 02569-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la</i>

	<i>clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02569-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02569-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>39</b>
Sentencia	EXP. N.º 02568-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó</i>

	<i>su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02568-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02568-2008-HC.html</a>

#### m. Muestras del 21 de enero de 2010

Muestra	<b>40</b>
Sentencia	EXP. N.º 02833-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó</i>

	<i>su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02833-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02833-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>41</b>
Sentencia	EXP. N.º 02834-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó</i>



	<i>su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02834-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02834-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>42</b>
Sentencia	EXP. N.º 02835-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco</i>

	<i>de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02835-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02835-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>43</b>
Sentencia	EXP. N.º 03202-2008-PHC/TC
Demandante	Lida María Osccorima Vilchez
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada</i>

	<i>por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03202-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03202-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>44</b>
Sentencia	EXP. N.º 03203-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo</i>

	<i>anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03203-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03203-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>45</b>
Sentencia	EXP. N.º 03205-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal</i>

	<i>en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03205-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03205-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>46</b>
Sentencia	EXP. N.º 03453-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable</i>

	<i>por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03453-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03453-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>47</b>
Sentencia	EXP. N.º 03457-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención</i>

	<i>provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03457-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03457-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>47</b>
Sentencia	EXP. N.º 03457-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte</i>

	<i>razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03459-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03459-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>48</b>
Sentencia	EXP. N.º 03459-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte</i>



	<i>razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03459-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03459-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>49</b>
Sentencia	EXP. N.º 03460-2008-PHC/TC
Demandante	Luis Felipe Elías Huapaya
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>

URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03460-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03460-2008-HC.html</a>
-----	---

Muestra	<b>50</b>
Sentencia	EXP. N.º 03559-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03559-2008-">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03559-2008-</a>

	HC.html
--	---------

Muestra	<b>50</b>
Sentencia	EXP. N.º 03559-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03559-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03559-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>51</b>
Sentencia	EXP. N.º 03742-2008-PHC/TC
Demandante	Enrique Sánchez Cahuina
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03742-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03742-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>52</b>
Sentencia	EXP. N.º 4998-2009-PHC/TC
Demandante	Felipe Nelso Cabrera Villavicencio
Demandado	Juez del Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo
Petitorio	Se le pretende desalojar de su domicilio mediante una resolución abusiva emitida por el juez demandado y que el terreno en cuestión fue sometido anteriormente a un proceso civil de reivindicación
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La alegada lesión a los derechos invocados en modo alguno incide sobre el derecho a la libertad personal y tampoco constituye una amenaza a dicho derecho; esto es, no determina restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, toda vez que lo que en puridad cuestiona el accionante es la regularidad del proceso de desalojo”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04998-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04998-2009-HC%20Resolucion.html</a>

**n. Muestras del 22 de enero de 2010**

Muestra	<b>53</b>
Sentencia	EXP. N.º. 02801-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima

Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02801-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02801-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>54</b>
Sentencia	EXP. N.º 00865-2008-PHC/TC
Demandante	Víctor Raúl Nunura Olivera
Demandado	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana
Petitorio	Se declare inaplicable para él los efectos de la Ordenanza Municipal N.º 021-2007/MPS, publicada en el diario local

	Correo el 9 de noviembre de 2007, que le prohíbe transitar a bordo de su mototaxi por el centro de la ciudad de Sullana.
Clase de hábeas corpus	Presunta vulneración de la libertad de circulación
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Lo que en realidad se pretende es que vía el presente proceso constitucional es que se subrogue a la municipalidad emplazada en cuanto a las competencias que le confiere la Constitución y el ordenamiento legal respecto a la regulación de los servicios de transporte colectivo, circulación y tránsito. Efectivamente, no obstante el derecho reclamado y la trascendencia de éste en los procesos de hábeas corpus, se aprecia que los hechos de la demanda de autos no contienen denuncia de agravio al derecho a la libertad personal del recurrente o el sustento de menoscabo a los derechos constitucionales que forman parte de su contenido protegido sino que por el contrario están dirigidos a cuestionar la validez legal de la ordenanza municipal cuya inaplicabilidad se pretende por la presunta afectación del derecho a la libertad de trabajo del recurrente, lo cual evidentemente no puede ser objeto de análisis ni de resolución dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus que examina casos de otra naturaleza”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00865-2008-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00865-2008-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>55</b>
Sentencia	EXP. N.º 05004-2009-PHC/TC

Demandante	Fabio Carlos Chacón Ramírez
Demandado	Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa
Petitorio	Se declare la nulidad de la resolución que rechazó la demanda de amparo interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (Exp. N.º 2007-2614). Aduce la violación de los derechos constitucionales a la salud, a la integridad personal, a la vida y al libre desarrollo de la personalidad.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente es que se ordene a la juez emplazada que admita a trámite la demanda de amparo interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional, sobre pensión de invalidez, toda vez que, según refiere, no se ha cumplido con lo resuelto por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa que ordenó que se admita a trámite dicha demanda, lo cual, como es evidente, no puede ser resuelto en este proceso constitucional de hábeas corpus, por no ser la vía legal habilitada para ello; siendo así, lo pretendido escapa a la competencia del juez de hábeas corpus, ya que excede el objeto de tutela de este proceso constitucional libertario”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05004-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05004-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>56</b>
Sentencia	EXP. N.º 05068-2009-PHC/TC
Demandante	Félix Chiroque Yesquen



Demandado	Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Piura
Petitorio	La Sala Superior emplazada, en absolución de consulta, ha declarado la nulidad de la resolución del juzgado que había estimado el beneficio de semilibertad a su favor. Refiere que los vocales emplazados han desnaturalizado el proceso penal de modo tal que el expediente de semilibertad puede ser elevado a pedido de parte cuantas veces se estime conveniente, lo que no respeta el principio de legalidad.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“En cuanto al cuestionamiento constitucional de la resolución de nulidad de la Sala Superior emplazada, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que la resolución no incide de manera directa y negativa en el derecho de la libertad personal que es la materia de tutela del proceso de hábeas corpus.</i></p> <p><i>(...) En lo que respecta a la reclamación constitucional contra la resolución del juez de ejecución que declaró la improcedencia del beneficio penitenciario del actor (fojas 216), corresponde declarar improcedente la demanda en este extremo puesto que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos no se acredita que aquella cumpla con el requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se haya agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los derechos reclamados, habilitando</i></p>

	<i>así su examen constitucional”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05068-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05068-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>57</b>
Sentencia	EXP. N.º 05233-2009-PHC/TC
Demandante	Mario Olivera Prado
Demandado	Décimosétimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima
Petitorio	La nulidad de la sentencia de fecha 1 de agosto del 2008 (Expediente N.º368-06-Q), que lo condena por el delito contra el honor, calumnia y difamación a un año de pena privativa de la libertad suspendida. Refiere que la cuestionada sentencia vulnera sus derechos a la libertad individual, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que en el caso de autos, conforme el Acta de Lectura de Sentencia, a fojas 143, el recurrente interpuso apelación contra la cuestionada sentencia; sin embargo, por Resolución de fecha 15 de diciembre del 2008, la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 174) declaró nulos los concesorios de apelación presentados por el recurrente y la parte agraviada, con el fin de que las partes subsanen la omisión de no haber acompañado la tasa judicial. Según se advierte de la razón del secretario, a fojas 221, los apelantes cumplieron con subsanar la omisión advertida y el 4 de junio del 2009 se llevó a cabo la vista de la causa.; en consecuencia, es de aplicación el artículo 4º del Código</i>

	<i>Procesal Constitucional, pues a la fecha de interposición de la demanda no existía resolución judicial firme”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05233-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05233-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>58</b>
Sentencia	EXP. N.º 05017-2009-PHC/TC
Demandante	Luz Angélica Vargas Salazar
Demandado	Juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima
Petitorio	Refiere que fue detenida el 9 de noviembre de 2007 y que a la fecha su situación jurídica no ha sido resuelta. Señala que es instruida en el proceso sumario (ordinario) cuya duración es de 18 meses y que, con fecha 21 de julio de 2008, se declaró la complejidad el proceso. Afirma que debe disponerse la inmediata libertad de la beneficiaria, por exceso del plazo de detención procesal, toda vez que ha vencido los 18 meses del proceso sin que la emplazada haya resuelto su situación jurídica. Agrega que el juzgado emplazado no ha resuelto la solicitud de variación del mandato de detención postulado con fecha 13 de marzo de 2009.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“En cuanto al supuesto exceso de detención provisional, carece de objeto emitir pronunciamiento al haber operado la sustracción de la materia justiciable puesto que la detención provisional de la favorecida ha sido duplicada a los 36 meses, plazo máximo para los procesos ordinarios (fojas 83).</i>

	<p>(...)</p> <p><i>Que finalmente, en lo que refiere a la denuncia constitucional de la demanda en sentido de que el juzgado emplazado no ha resuelto la solicitud de variación del mandato de detención de la favorecida, corresponde su rechazo en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el inciso 5 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que mediante Resolución de fecha 12 de mayo de 2009, esto es, en momento anterior a la postulación de la demanda, se emitió el pronunciamiento judicial respectivo, por lo que ha cesado el presunto agravio (fojas 78)”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05017-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05017-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>59</b>
Sentencia	EXP. N.º 05083-2009-PHC/TC
Demandante	César Abel Paz Soldán Salazar
Demandado	Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	En el proceso de ascenso de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, proceso en el que participó, se cometieron irregularidades que lo perjudicaron, por lo que realizó la denuncia correspondiente, la que fue formalizada por la Trigésima Tercera Fiscalía Penal. El Primer Juzgado Penal de Lima declaró no ha lugar a abrir instrucción, y dicho auto fue confirmado por los ahora demandados.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial

Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“Alegándose una indebida calificación penal de los hechos, lo cual en modo alguno está relacionado con el contenido constitucional del derecho a la libertad individual o derechos conexos, pues la determinación de la responsabilidad penal así como la subsunción de las conductas en determinado tipo penal son de competencia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza; por tanto, la demanda debe ser rechazada.</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p><i>Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05083-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05083-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>60</b>
Sentencia	EXP. N° 05542-2009-HC/TC
Demandante	Gonzalo Trejo Verde
Demandado	Director del Establecimiento Penitenciario de San Pedro de Lurigancho y el Director de Seguridad INPE de Lima
Petitorio	Se encuentran reclusos en el Establecimiento Penitenciario de San Pedro de Lurigancho a mérito del Proceso Penal que se les sigue por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, Expediente N° 2009-00194-SP, encontrándose la causa en

	etapa de Juicio Oral, y que para ello el Presidente de la Segunda Sala Penal de Huánuco ha cursado diversos oficios para que los recurrentes sean trasladados a la Sala de Audiencias del Establecimiento Penal de Huánuco, y que sin embargo, ello no se ha producido, por lo que señala que se está dilatando innecesariamente el proceso referido.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declarar NULA la recurrida e insubsistente la apelada.</li> <li>2. Devolver los autos a fin de que el a quo proceda con arreglo a lo expuesto en la presente resolución y admita a trámite la demanda.</li> </ol>
Fundamento legal	Artículo 31 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“Que este Colegiado advierte que las instancias inferiores no han tenido en cuenta que tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional han acogido la concepción amplia del hábeas corpus que en su artículo 25°, in fine, señala expresamente que el proceso de hábeas corpus también procede en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual; además, no han tomado en consideración que existen varias clases de hábeas corpus, entre los que están los de tipo correctivo, traslativo, entre otros.</i></p> <p><i>“Que en consecuencia, se hace necesario que el a quo, en el más breve plazo posible, proceda con arreglo a lo dispuesto por el artículo 31° del Código Procesal Constitucional.</i></p> <p><i>Siendo así, al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión</i></p>

	<i>adoptada en primera y segunda instancia, resulta de aplicación el artículo 20° de la norma precitada, que establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05542-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05542-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>61</b>
Sentencia	EXP. N.º 5586-2009-PHC/TC
Demandante	Gabriela Roberta Mendoza Añasco Quispe
Demandado	Juez del Primer Juzgado Penal de Cañete
Petitorio	Fue comprendida como tercero civilmente responsable, no habiendo sido debidamente notificada en su domicilio con las resoluciones emitidas por el demandado, afectándose de esa manera los derechos invocados.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que, en lo que respecta a la supuesta afectación de los derechos reclamados, que se habría producido con las resoluciones a que se hace referencia en el fundamento inmediato anterior, es de verse que ellas no afectan de manera directa ni indirecta el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal por cuanto no entrañan, en sí, una restricción contra la libertad personal, sino que se está discutiendo los</i>

	<i>derechos de persona tercero embargante y que, a su vez tiene la calidad de tercero civilmente responsable, decisiones que no pueden considerarse un agravio, puesto que no contienen medida restrictiva de la libertad alguna”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05586-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05586-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### ñ. Muestras del 25 de enero de 2010

Muestra	<b>62</b>
Sentencia	EXP. N.º 01521-2009-PHC/TC
Demandante	Edder Farfán Romero
Demandado	Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna
Petitorio	Se ordene su inmediata libertad por exceso en el plazo de detención provisional que viene sufriendo, en la instrucción que se le sigue por el delito de robo agravado (Expediente N.º 2003-652).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Código Procesal Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el alegado</i>



	<i>agravio que habría constituido el denunciado exceso de detención provisional del actor ha cesado con la emisión de la sentencia condenatoria dictada en su contra, resultando que, a la fecha, su condición jurídica es la de condenado y que la restricción de su derecho a la libertad personal dimana de éste último pronunciamiento judicial”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01521-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01521-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>63</b>
Sentencia	EXP. N. ° 4994-2009-PHC/TC
Demandante	Genara Llicahua Sullca
Demandado	Juez del Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo
Petitorio	Refiere que realizó una compra-venta con la Asociación de Vivienda Nuevo San Luís, por la cual adquirió un lote de terreno ubicado en la Parcela 10913, ex Fundo Monserrate; que, sin embargo, la Fiscal Patricia Pérez Calderón, en compañía de policías, acudieron a la parcela 11194 aduciendo de que ésta estaría siendo usurpada, y que se le pretende desalojar de su domicilio mediante una resolución abusiva emitida por el juez demandado. En ese sentido, alega que el terreno en cuestión fue sometido anteriormente a un proceso civil de reivindicación (Exp. N. ° 2878-1998).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que del análisis del caso en concreto y de las instrumentales que obran en autos, se tiene que los hechos</i>

	<i>alegados como lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a la libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, toda vez que lo que en puridad cuestiona la accionante es la regularidad del proceso de desalojo (Exp N. ° 2008-5174-25) en el cual se ordenó el desalojo preventivo de las unidades catastrales N.° 11194 y 10913 y la ministración provisional de los mismos a la Asociación de Vivienda los Alisos del Golf, pretensión que resulta manifiestamente incompatible con este proceso constitucional de la libertad”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04994-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04994-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>64</b>
Sentencia	EXP. N.° 05186-2009-PHC/TC
Demandante	Antonio Tapia Jiménez
Demandado	Juzgado Penal de Urubamba
Petitorio	Refiere el recurrente que se le inició un proceso penal por el delito de violación sexual (Expediente N.° 2007-296) con mandato de detención, y que, a pesar de haberse cumplido el plazo de 9 meses para el juzgamiento y no tratarse de un expediente complejo, se expidió la Resolución N.° 01, de fecha 5 de marzo del 2009, por la que se declara procedente la prórroga de la duración de su detención.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que el recurrente cuestiona el hecho de haberse</i>

	<i>prorrogado el mandato de detención por Resolución de N.º 01, de fecha 5 de marzo del 2009; sin embargo estando a la existencia de la sentencia condenatoria, obrante a fojas 389, la detención del recurrente deviene ahora de ésta última; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05186-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05186-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>65</b>
Sentencia	EXP. N° 04991-2009-PHC
Demandante	José Linares Cornejo
Demandado	Defensora del Pueblo y otros
Petitorio	Demanda por convertir la Defensoría Del Pueblo en un negocio particular al negarse a defender sus derechos constitucionales de propiedad ya que ha sido despojado de sus dos edificios ubicados en la avenida Tacna y en la Avenida Emancipación sin que se respete la propiedad privada.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>Que del análisis del caso en concreto, se evidencia que los hechos alegados como lesivos a los derechos invocados, en modo alguno inciden sobre el derecho a la libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho o a los derechos conexos; esto es, no determinan restricción o limitación, toda vez que lo que en puridad cuestiona el accionante son actos procesales realizados en el marco de un proceso de quiebra que, según alega, se encuentra</i>

	<i>viciado de fraude procesal; por lo que su pretensión resulta manifiestamente incompatible con este proceso constitucional de la libertad. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04991-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04991-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>66</b>
Sentencia	EXP. N.º 00698-2008-PHC/TC
Demandante	Eduardo García Espinoza
Demandado	Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura
Petitorio	Se abrió instrucción en contra del beneficiario sin una debida motivación, pues no se señala en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación y la modalidad del delito que se le atribuye, además de haberse citado pruebas inexistentes.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La demanda debe ser desestimada al no acreditarse la vulneración del derecho a la libertad personal del beneficiario ni de los demás derechos alegados en la demanda”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00698-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00698-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>67</b>
Sentencia	EXP. N.º 02357-2008-PHC/TC
Demandante	Sara Edith Sarmiento Sevillana
Demandado	Vocal Instructor de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho
Petitorio	Sostiene que el auto de apertura de instrucción carece de motivación, debido a que no se fundamenta la vinculación entre la imputación realizada al beneficiario y los hechos materia de investigación, por lo que se evidencia una “acusación genérica e impersonalizada”, atentando en definitiva contra su derecho de defensa.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139.5 de la Constitución Política
Pronunciamiento	<i>“Toda vez que se aprecia que la imputación de los hechos señalada en el auto de apertura de instrucción resulta ser precisa, clara y expresa, dicha resolución se encuentra debidamente motivada. Por tanto, este extremo de la demanda debe ser desestimado”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02357-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02357-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>68</b>
Sentencia	EXP. N.º 04723-2008-PHC/TC
Demandante	Edmundo Inga Garay
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte

	mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04723-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04723-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>69</b>
Sentencia	EXP. N.º 02448-2008-PHC/TC
Demandante	César Augusto Villavicencio Atienza
Demandado	Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue

	por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.º 20-05).
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 2º, inciso 24 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El procesado (...) ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso sub materia (en perjuicio suyo y el de los demás procesados, como lo es el actor de los autos), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02448-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02448-2008-HC.html</a>

Muestra	<b>70</b>
Sentencia	EXP. N.º 03576-2009-PHC/TC
Demandante	Carlos Alberto Cárdenas Borja
Demandado	Segundo Juzgado Penal Supranacional
Petitorio	Se declare la nulidad de la resolución dictada por el Segundo Juzgado Penal Supranacional, mediante la cual se decreta mandato de detención en contra del favorecido. También se solicita se declare la nulidad de todo lo actuado en la investigación preliminar a cargo del Ministerio Público

	y de la Policía Nacional del Perú. Alega un “total abuso y atropello” de los derechos del favorecido, por cuanto no habría sido citado para dar sus descargos en la referida investigación.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La sola comprensión en una investigación preliminar no constituye elemento suficiente que justifique la adopción de una medida de detención, sino que la misma deberá ser adoptada siempre que concurren elementos que hagan presagiar peligro de fuga y existan mínimos indicios que vinculen al investigado con la comisión del delito”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03576-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03576-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>71</b>
Sentencia	EXP. N.º 05284-2009-PHC/TC
Demandante	Aura Sánchez Coriat
Demandado	Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Pucallpa
Petitorio	Se le vulneró su derecho a la defensa al no poder interponer recurso impugnatorio (casación) debido a que su abogado no pagó la tasa judicial completa; señala, además, que en dicho proceso no se realizó una debida valoración de todos los medios probatorios.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Lo que en realidad subyace en la reclamación de la demandante es el cuestionamiento que esta hace del</i>



	<i>pronunciamiento expedido por los demandados en el proceso número 2005-73, (...) lo cual constituye una materia manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad; por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05284-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05284-2009-HC%20Resolucion.html</a>

#### **o. Muestras del 29 de enero de 2010**

Muestra	<b>72</b>
Sentencia	EXP. N.º 02528-2009-PHC/TC
Demandante	Mariano Arango León
Demandado	Primera Fiscalía Provincial de Huamanga y otro
Petitorio	Las resoluciones fiscales cuestionadas no cumplen con el derecho de motivación de las resoluciones judiciales puesto no que no se señalan los supuestos de hecho y el sustento de derecho para imputarle la supuesta conducta ilícita cometida, vulnerando también el principio de presunción de inocencia, el derecho de defensa.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“El recurrente pretende que este Tribunal proceda al reexamen o revaloración de los medios probatorios que sustentaron la expedición de las sentencias cuestionadas en el presente caso. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es función del juez constitucional</i>

	<i>proceder al reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como el determinar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02528-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02528-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>73</b>
Sentencia	EXP. N.º 03732-2009-PHC/TC
Demandante	Cico Fernando Álamo Figueroa
Demandado	Juez del Juzgado Especializado en lo Penal de Yungay
Petitorio	La resolución cuestionada hace una descripción de los hechos general e impersonal, y que adolece de falta de motivación, principalmente porque no existe el juicio de imputación que los vincule con los hechos que constituirían los delitos denunciados, situación que les genera indefensión, pues no les permite conocer en forma precisa, clara y concreta, los cargos formulados en su contra, afecta, además, sus derechos de defensa y al contradictorio.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“se advierte que existe una descripción mínima de los hechos que son materia de investigación judicial y considerados punibles, pues será en el proceso penal en el que se determine si efectivamente aquellos se produjeron o no, y, de ser el caso, se determine la sanción que corresponda imponer.</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p><i>Desde esta perspectiva y a tenor de lo dispuesto en el</i></p>

	<i>artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, se advierte que la resolución impugnada, cumple con el contenido de dicho precepto, como se advierte de su propio contenido”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03732-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03732-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>74</b>
Sentencia	EXP. N.º 04373-2009-PHC/TC
Demandante	David Isaías Funio Zúñiga
Demandado	Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa
Petitorio	Al existir un requerimiento anterior para cancelar la reparación civil, la parte agraviada debía pronunciarse nuevamente; que ante esta resolución y en forma irregular la parte agraviada se desistió del pedido para que cumpla con cancelar la reparación civil bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzosa, desistimiento que fue aceptado por Resolución N.º 26-2008, de fecha 25 de junio del 2008; y que como consecuencia de ello, con fecha 3 de junio del 2008, mediante Resolución 027-2008, se resolvió la suspensión de la pena privativa, decisión que fue confirmada por Resolución A.V. de fecha 30 de abril del 2009.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139.5 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Este Tribunal estima que ambas resoluciones –</i>

	<i>cuestionadas en autos- se encuentran suficientemente motivadas y se ha respetado el debido proceso”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04373-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04373-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>75</b>
Sentencia	EXP. N. ° 03834-2009-PHC/TC
Demandante	Valentín Raúl Leiva Cabrera
Demandado	Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
Petitorio	Le han sido impuestas dos sentencias condenatorias por la comisión de delitos contra la salud pública, una respecto al delito de tráfico ilícito de drogas en su tipo base (Art. 296° del Código Penal) y otra en su forma agravada (Art. 297° del Código Penal) (12 y 14 años respectivamente); y que al haber operado la refundición de las penas impuestas no debió aplicarse la Ley N.° 26320, que impide el acceso al beneficio de liberación condicional a las personas sentenciadas por los delitos contemplados en los artículos 296° y 297° del Código Penal, siendo en todo caso aplicable, por resultar más beneficiosa, la Ley N° 24388.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139.5 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“Este Tribunal considera que la demanda debe ser desestimada, puesto que conforme se aprecia de autos (fojas 58), el recurrente presentó su solicitud de otorgamiento de liberación condicional con fecha 25 de noviembre de 2008, es decir, cuando la Ley N.° 26320, que restringe el acceso al</i>

	<i>beneficio penitenciario de liberación condicional a las personas sentenciadas por los delitos contemplados en los artículos 296° y 297° del Código Penal, se encontraba vigente y, por lo tanto, le resultaba aplicable, por lo que no se advierte que se haya vulnerado el derecho a la libertad personal del demandante, ni tampoco su derecho al debido proceso”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03834-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03834-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>76</b>
Sentencia	EXP. N.º 02188-2008-PHC/TC
Demandante	Giancarlo Peralta Aquino
Demandado	Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Oxapama y otro
Petitorio	Se declare la nulidad de la denuncia fiscal formulada en su contra por el presunto delito de tortura, así como la nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 13 de febrero de 2005, que dispone abrir instrucción en su contra con mandato de detención por el mismo delito. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, más concretamente, del derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad penal, conexos con la libertad personal.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“De lo expuesto concluyo en que la resolución en cuestión se encuentra debidamente motivada, habiendo cumplido el juez emplazado con la exigencia constitucional de la debida</i>

	<p><i>motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, se aprecia que la referida resolución contiene de manera objetiva y razonada las conductas o los hechos supuestamente delictuosos imputados al accionante, los que se subsumirían en el artículo 231°, del Código Penal, así como el material probatorio que lo sustenta, estando, por tanto, individualizada la conducta atribuida, adecuándose en rigor a lo que tanto la Norma Suprema del Estado como el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales predicán; siendo así, considero que no se ha producido la violación de los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que, en este extremo, la demanda debe ser desestimada”.</i></p>
URL	<p><a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02188-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02188-2008-HC.html</a></p>

Muestra	77
Sentencia	EXP. N.º 04805-2009-PHC/TC
Demandante	Virginia Delgado Berlanga
Demandado	Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima
Petitorio	<p>La vulneración del derecho constitucional a la libertad individual. Refiere que los denunciados pretenden despojarlos de dos de sus edificios, sitios en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, utilizando para ello el proceso de Quiebra con nulidad absoluta, por estar afectado de fraude procesal. Agrega que el juez denunciado ha ordenado la detención arbitraria de dos de los socios de la Inmobiliaria Oropesa S.A., Virginia Delgado Berlanga y Aldo Eche T., y que se ha prohibido el acceso y el tránsito a las propiedades antes referidas.</p>

Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“En el caso de autos, se advierte que la accionante Virginia Delgado Berlanga ha incurrido en actuación o conducta temeraria, toda vez que teniendo pleno conocimiento de la falta de argumentos para llevar adelante el presente proceso constitucional, toda vez que este Tribunal ya emitió pronunciamiento, temerariamente ha interpuesto la presente demanda, dando lugar a la desnaturalización de los fines de este proceso constitucional de hábeas corpus, por lo que corresponde proceder conforme al diseño constitucional y legal establecido”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04805-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04805-2009-HC%20Resolucion.html</a>

**p. Muestras del 2 de febrero de 2010**

Muestra	<b>78</b>
Sentencia	EXP. N.° 04641-2008-PHC/TC
Demandante	Mauricio Alonso Rodríguez Sosa
Demandado	Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Alega que en el proceso N.° 28-2001, que se le sigue ante la Sala penal emplazada, se ha visto vulnerado su derecho a la libertad personal, puesto que su detención en el referido proceso penal se ha extendido por mas de 45 meses.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional

Pronunciamiento	<i>“En el presente caso, el acto acusado como vulneratorio de los derechos constitucionales –consistente en el mantenimiento de la detención por un plazo pretendidamente excesivo– ha cesado a través de la variación de dicho mandato de detención por el de comparecencia restringida, por lo que este Tribunal considera que carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión planteada al haberse producido la sustracción de la materia controvertida”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04641-2008-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04641-2008-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>79</b>
Sentencia	EXP. N.º 04854-2009-PHC/TC
Demandante	Miguel Jaime Guido Arteaga
Demandado	Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Petitorio	Alega que fue condenado a pesar de que ya había operado la prescripción de la acción penal y que la referida ejecutoria vulnera la interdicción de la reforma en peor.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Si bien la prescripción de la acción penal es un asunto con relevancia constitucional, lo controvertido en la presente demanda de hábeas corpus consiste en dilucidar si el delito de falsificación de documentos es instantáneo o permanente, así como la naturaleza pública o privada del documento materia de falsificación, los que constituyen aspectos que no pueden ser merituados por la justicia</i>



	<i>constitucional, por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04854-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04854-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>80</b>
Sentencia	EXP. N.º 05230-2009-PHC/TC
Demandante	Héctor Yuri Jerónimo Falcón
Demandado	Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima y contra el Fiscal Supremo de Control Interno
Petitorio	Refiere el actor que con fecha 25 de octubre de 2007 interpuso demanda de hábeas corpus a favor de los beneficiarios por haber sido estas objeto de desaparición forzada (Exp. N.º 44548-2007); no obstante ello, refiere que hasta la fecha y pese a los continuos reclamos verbales y escritos no existe sentencia que se pronuncie sobre tales hechos. Asimismo, señala que ha interpuesto una denuncia contra el ex – Fiscal Superior Decano de Amazonas, habiendo brindado su declaración indagatoria en dicha investigación, pero que hasta la fecha el Fiscal Supremo del Control Interno tampoco ha emitido pronunciamiento sobre ésta.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“La fecha ya existe pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional sobre los supuestos actos de desaparición forzada contra los favorecidos, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que, en este extremo, la demanda debe ser declarada improcedente</i>

	<p><i>al haberse producido la sustracción de la materia justiciable.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Que en cuanto a la denuncia que habría interpuesto el recurrente contra el ex – Fiscal Superior Decano de Amazonas, la que tampoco habría merecido pronunciamiento por parte del Fiscal Supremo del Control Interno, este Tribunal considera que tales omisiones en modo alguno tienen incidencia negativa en el derecho a la libertad individual de los favorecidos”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05230-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05230-2009-HC%20Resolucion.html</a>

**q. Muestras del 3 de febrero de 2010**

Muestra	<b>81</b>
Sentencia	EXP. N.º 05565-2009-PHC/TC
Demandante	José Salomón Linares Cornejo
Demandado	Tercer Juzgado Penal Liquidador de Arequipa
Petitorio	En el proceso N° 2007-393, que se le sigue ante el juzgado emplazado por la presunta comisión de delito de denuncia calumniosa, se ha señalado fecha para el acto de “juzgamiento” sin que previamente se le haya notificado con el dictamen fiscal y que ante su incomparecencia se lo ha declarado contumaz.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que, con respecto a la cuestionada programación de fecha para el acto de “juzgamiento”, cabe señalar, como ya lo ha</i>

	<p><i>considerado este Tribunal Constitucional en otras oportunidades, que la citación a una diligencia judicial no constituye un acto que pueda considerarse que incida negativamente en la libertad individual, puesto que se trata de una obligación de las partes acudir al local del juzgado las veces que sean requeridas por el juzgador para los fines que deriven del propio proceso penal (...), por lo que este extremo de la demanda debe ser rechazado.</i></p> <p><i>(...) Que, asimismo, en cuanto a la cuestionada declaración de contumacia, cabe señalar que de autos no consta que antes de la interposición de la demanda dicha resolución haya sido impugnada al interior del proceso a fin de adquirir firmeza, por lo que resulta improcedente su cuestionamiento en este proceso constitucional, de conformidad con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05565-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05565-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>82</b>
Sentencia	EXP. N.º 04717-2009-PHC/TC
Demandante	Vidal Teodoro Crispín Encalada
Demandado	Gobernador del Distrito de Ocoyo
Petitorio	Los erradicaron de la posesión del aludido predio arguyendo que contaban con una resolución expedida por el emplazado, en la que se otorgaba garantías a favor de la beneficiaria del desalojo y se amenazaba con detener a los recurrentes en caso de que opongan resistencia al desalojo.

	Por último solicitan que se repongan las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de violación de los derechos alegados, pues se viene impidiendo su derecho al libre tránsito y se les realiza seguimiento policial para privarlos de su libertad.
Clase de hábeas corpus	Presunta vulneración de la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“Que en el presente caso se advierte que, si bien el presente hábeas corpus fue promovido arguyéndose la presunta vulneración al derecho a la libertad de tránsito y la amenaza de una detención arbitraria, lo que en realidad subyace a los hechos denunciados en la demanda es la supuesta vulneración al derecho de propiedad de los demandantes con motivo del desalojo, que se ha realizado el día 13 de junio de 2009.</i></p> <p><i>Por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el inciso 1 de artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04717-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04717-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>83</b>
Sentencia	EXP. N. ° 5601-2009-PHC/TC
Demandante	Catalina Gave de Pecho

Demandado	Juez Provisional del Cuarto Juzgado Civil de Huancayo
Petitorio	Cuestionan la resolución de fecha 13 de agosto de 2009, mediante la cual se declara fundada la demanda interpuesta por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo y se ordena el remate del inmueble de su propiedad.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“Que del análisis del caso en concreto se evidencia que el hecho cuestionado, consistente en la sentencia expedida por el juzgado civil emplazado que ordena el remate de un bien inmueble, en modo alguno incide sobre el derecho a la libertad individual.</i></p> <p><i>Que, en consecuencia, dado que la reclamación de los recurrentes (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05601-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05601-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>84</b>
Sentencia	EXP. N.º 05867-2008-PHC/TC
Demandante	Gabriel Celio Mateo
Demandado	Eloy Bonifacio Chile Quispe e Irma Fernández Torres
Petitorio	Los demandados agredieron físicamente a los hijos de los propietarios del Primer Sector de la Urbanización Los Próceres e impidieron que continúen practicando deporte en la losa deportiva “Akira Kato”, la cual es propiedad de la referida urbanización. Agregan que el día 3 de mayo de

	2008, los demandados soldaron las puertas de fierro de una de las entradas y colocaron candado en otras, con la finalidad de impedir el libre tránsito a la referida losa deportiva.
Clase de hábeas corpus	Presunta vulneración de la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Dado que la propiedad del complejo deportivo pertenece exclusivamente a los vecinos de la Urbanización Los Próceres del Distrito de Surco, y siendo estos mismos los que han cerrado las entradas de dicho complejo, este Colegiado concluye que la reclamación no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05867-2008-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05867-2008-HC%20Resolucion.html</a>

**r. Muestras del 4 de febrero de 2010**

Muestra	<b>85</b>
Sentencia	EXP. N.º 03728-2009-PHC/TC
Demandante	Carlos Antonio Flores Urbano
Demandado	Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
Petitorio	Se declare la nulidad de la Resolución de fecha 29 de abril de 2008, que declaró improcedente la solicitud de adecuación del tipo penal y sustitución de la pena, y su confirmatoria de fecha 05 de setiembre de 2008, considerando que se le está vulnerando sus derechos a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial

Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139° inciso 5 de la Constitución
Pronunciamiento	<i>“El órgano jurisdiccional emplazado aplicó la pena mínima contenida tanto en el tipo penal vigente al momento de la comisión del ilícito penal como al momento de emitirse la sentencia condenatoria, evidenciándose que se le ha aplicado la penalidad menos lesiva de su derecho a la libertad individual –la mínima vigente tanto al momento de la comisión del ilícito penal como al momento de la emisión de la sentencia condenatoria–. En consecuencia al haberse aplicado la penalidad menos gravosa al derecho a la libertad individual del recurrente, la demanda debe ser declarada infundada”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03728-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03728-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>86</b>
Sentencia	EXP. N.° 04529-2009-PHC/TC
Demandante	César Augusto Valdiviezo Palacios
Demandado	Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
Petitorio	Se incrementó el monto de la pena privativa de libertad a 30 años, sin haberse tenido en cuenta para ello la ausencia de antecedentes penales y judiciales del favorecido, y la no realización de un adecuado debate pericial que hubiera permitido declarar en forma fehaciente la responsabilidad o inocencia del favorecido.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional

Pronunciamiento	<p><i>“Que del análisis del presente caso, este Tribunal considera que lo que en realidad pretende el recurrente es el reexamen de la sentencia condenatoria (fojas 6) y de su posterior confirmatoria mediante Ejecutoria Suprema (fojas 13), aduciendo para ello que el favorecido ha sido sentenciado sin haberse valorado la ausencia de antecedentes judiciales y penales así como la existencia de un adecuado debate pericial, por lo que debió establecerse una pena menor en proporción a dichos elementos.</i></p> <p><i>Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04529-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04529-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>87</b>
Sentencia	EXP. N.º 04546-2009-HC/TC
Demandante	Herly Dante Trujillo Pasión
Demandado	Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Alega que se transgredió el principio de irretroactividad de la ley penal toda vez que los hechos imputados por los que fue condenado sucedieron en el año 1995; sin embargo, sostiene que se le aplicó el tipo penal establecido en el artículo 297º, inciso 7, del Código Penal, incorporado a dicho cuerpo legal mediante la Ley N.º 26619, de fecha 9 de junio de 1996.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial



Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que, en reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario que escapa a la competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04546-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04546-2009-HC%20Resolucion.html</a>

**s. Muestras del 5 de febrero de 2010**

Muestra	<b>88</b>
Sentencia	EXP. N.º 04806-2009-PHC/TC
Demandante	Manuel Vera Cóndor
Demandado	Presidente de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	En el proceso que se le sigue por el delito contra la Administración de Justicia, Encubrimiento Real (expediente N.º 619-2007), fue sentenciado a pesar de no haberse resuelto la excepción de prescripción que presentó; que asimismo, interpuso recurso de apelación, el que fue

	extraviado y por lo tanto no fue elevado a la Sala Superior para su resolución.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, la procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación o de una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a ella; por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado, es obvio que no existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo ya que se ha producido la sustracción de materia”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04806-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04806-2009-HC%20Resolucion.html</a>

Muestra	<b>89</b>
Sentencia	EXP. N.º 05571-2009-PHC/TC
Demandante	Elsa Martha Pastor Briones
Demandado	Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima
Petitorio	Refiere que el juez emplazado viene tramitando un proceso

	de otorgamiento de escritura pública, en el que se le desalojará del inmueble de su propiedad, vulnerándose con ello el libre acceso a su domicilio. Señala que el demandado debió de rechazar liminarmente la demanda, “toda vez que no podía otorgar escritura pública ya que existía derecho inscrito”. Asimismo, refiere que no emplazó como litisconsorte necesario pasivos a los compradores del referido inmueble.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que del análisis de lo expuesto en la demanda, se aprecia que la discusión traída al proceso de habeas corpus está dirigida a cuestionar la propiedad respecto de un inmueble, cuestionando por ello lo actuado en un proceso de otorgamiento de escritura pública, pretensión que constituye una materia que resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. En tal sentido dado que la reclamación de la recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05571-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05571-2009-HC%20Resolucion.html</a>

**t. Muestras del 9 de febrero de 2010**

Muestra	<b>90</b>
Sentencia	EXP. N.º 02967-2009-PHC/TC
Demandante	Santiago Cristóbal Ortiz Sacaca
Demandado	Mario Marcial Medina Apaza

Petitorio	Está siendo víctima de seguimiento y amenazas constantes, por lo que solicita el cese inmediato de dichos actos por afectar su derecho a la libertad individual.
Clase de hábeas corpus	Presunta vulneración de la libertad personal
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 9º del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<p><i>“De las instrumentales que obran en autos no se aprecia medio probatorio que cree convicción en el juzgador respecto a la vigilancia y seguimiento del que asegura estar siendo objeto el actor, evidenciándose más bien que éste mantiene diversos procesos con el emplazado (penal y laboral), lo que trasunta un conflicto ellos. No se acredita, entonces, la aducida perturbación a su libertad individual.</i></p> <p><i>Por tanto, no habiendo en autos elementos suficientes que permitan concluir que el demandado viene amenazando la libertad individual del actor, resulta de aplicación, contrario sensu”.</i></p>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02967-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02967-2009-HC.html</a>

Muestra	<b>91</b>
Sentencia	EXP. N. ° 4032-2009-PHC/TC
Demandante	Patricia Daniza Reyes Miranda
Demandado	Segunda Sala Penal de Maynas
Petitorio	La demandante refiere que se abrió proceso penal (Exp. N. ° 2002-00022-0-1903-JR-PE-03) en su contra por la supuesta comisión del delito de corrupción de funcionarios - cohecho propio, dictándose mandato de detención en su contra; que

	sin embargo, no se ha calificado adecuadamente el tipo penal imputado y que el mandato de detención no reúne los requisitos exigidos por el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales. Sostiene también que las resoluciones que declararon improcedente las solicitudes de adecuación del tipo penal, no se encuentran debidamente motivadas.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Respecto a la afirmación de que los hechos incriminados comportarían un delito diferente al que se atribuye, se puede afirmar que tal alegación de modo alguno está relacionada con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos constitucionales conexos, puesto que la determinación de la responsabilidad penal, así como la subsunción de las conductas en determinado tipo penal, son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza”.</i>
URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04032-2009-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04032-2009-HC.html</a>

**u. Muestras del 12 de febrero de 2010**

Muestra	<b>92</b>
Sentencia	EXP. N.º 01424-2008-PHC/TC
Demandante	Emilene Giovanna Enriqueta Gavá Tello
Demandado	Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Petitorio	Refiere que la Subgerencia de Depuración y Archivo

	Registral dispuso la exclusión definitiva de la inscripción N° 07487375 del beneficiario, la misma que fue declarada nula por la Gerencia de Evaluación y Depuración Registral.
Clase de hábeas corpus	Restricción en el acceso a DNI
Fallo	Infundada
Fundamento legal	Artículo 139° inciso 5 de la Constitución
Pronunciamiento	<p><i>“No se ha producido la afectación a los derechos invocados, toda vez que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas en el marco de las atribuciones y competencias conferidas a la Administración, respetando sobre todo el derecho al debido procedimiento y el derecho de defensa del favorecido, por lo que la presente demanda debe ser desestimada.</i></p> <p><i>No obstante la desestimación de la presente demanda, dada la relevancia del derecho fundamental involucrado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o la entidad que corresponda, de oficio debe proceder a la inscripción y expedición de la partida de nacimiento del favorecido MARIO NAKAMURA PAJARES, así como proveerle su Documento Nacional de Identidad, debiendo la autoridad administrativa requerir al beneficiario la documentación que considere pertinente (partida de bautismo, certificados de estudios, etc.), siempre que ello no se convierta en un obstáculo y que impida solucionar la situación descrita dentro de un plazo considerado razonable de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, inciso 1 de la Constitución, que consagra el derecho a la identidad, derecho que dentro de su contenido esencial se encuentra el derecho al nombre y al documento de identidad correspondiente”.</i></p>

URL	<a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01424-2008-HC.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01424-2008-HC.html</a>

**v. Muestras del 15 de febrero de 2010**

Muestra	<b>93</b>
Sentencia	EXP. N.º 05203-2009-PHC/TC
Demandante	Paul Henry Bisso Meza
Demandado	Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
Petitorio	Refiere haber sido trasladado del establecimiento penal de Huamanga, en Huancavelica, donde se encuentra recluido, al Penal de Lurigancho en la ciudad de Lima, por causa de una intervención quirúrgica, y que en este lugar tomó conocimiento que tenía un proceso pendiente ante la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel (Expediente N.º 168-2004) por lo que se puso a derecho, y que en mérito a ello se señaló fecha para juicio oral y se le condenó a 10 años de pena privativa de libertad, por lo que interpuso recurso de nulidad, el cual fue declarado no ha lugar; señala que en dicho proceso no se le notificó el mandato de detención decretado en su contra, pese a que la Sala tenía conocimiento de su reclusión, por lo que al no habersele notificado de las razones de su detención se le han vulnerado sus derechos fundamentales.
Clase de hábeas corpus	Contra resolución judicial
Fallo	Improcedente
Fundamento legal	Artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional
Pronunciamiento	<i>“Que teniendo en cuenta que el mandato de detención se dicta con anterioridad a la sentencia condenatoria, y es en</i>

	<p><i>esencia una medida cautelar, del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que obra en autos, se aprecia que el recurrente no se encuentra detenido por un mandato de detención, sino por una sentencia condenatoria efectiva en su contra de 10 años de pena privativa de libertad (fojas 369), y que esa privación de libertad se hizo efectiva desde antes de la interposición de la demanda, por lo que resulta aplicable el artículo 5, inciso 5), del Código Procesal Constitucional, que establece que: “No proceden los procesos constitucionales cuando: (...)</i> 5. <i>A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable”.</i></p>
URL	<p><a href="http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05203-2009-HC%20Resolucion.html">http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05203-2009-HC%20Resolucion.html</a></p>

## 8.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

A continuación se contrastarán las cuatro hipótesis formuladas. Para tales efectos, los resultados obtenidos serán ingresados en la matriz de datos y luego se expresará si los datos permiten corroborar o no la hipótesis formulada.

### 8.4.1. HIPÓTESIS GENERAL N° 1

La primera hipótesis general fue la siguiente:

*El principal ámbito en el que se vulneran los derechos conexos a la libertad personal es el de los procesos judiciales penales debido a que en ellos se menoscaban los derechos que componen la tutela procesal efectiva.*



La contrastación se realiza a través del cuadro cartesiano y del coeficiente de relación estadística.

**a. Cuadro cartesiano**

		V1	
		Libertad personal	
		1	2
V2	1	3 5%	1 10%
	2	62	9
		65	10
		= 75	

**b. Coeficiente de relación estadística**

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{5-10}{5+10}$$

$$r = -0.33$$

La primera hipótesis general **no se corrobora**, ya que se aprecia la tendencia sobre el respeto de los derechos procesales conexos a la libertad personal dentro del ámbito judicial.

**8.4.2. Hipótesis general N° 2**

La segunda hipótesis general fue la siguiente:

*El debido proceso es el derecho conexo a la libertad personal cuya afectación es más recurrida a través del proceso de hábeas corpus, en razón de que los juzgadores desconocen actuaciones procesales de suma importancia en el trámite de los procesos judiciales penales.*

La contrastación se realiza a través del cuadro cartesiano y del coeficiente de relación estadística.

#### a. Cuadro cartesiano

		V1 Actuación procesal	
		1	2
V2 Libertad personal	1	a 3 75%	b 62 87%
	2	1	9
		4	+
		71	= 75

#### b. Coeficiente de relación estadística

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{75-87}{75+87}$$

$$r = -0.46$$

La segunda hipótesis general **no se corrobora**, ya que se aprecia la tendencia relativa a que las actuaciones procesales de los magistrados han sido realizadas respetando el debido proceso.

### 8.4.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1

La primera hipótesis específica fue la siguiente:

*Los juzgadores penales desconocen los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional relativos al respeto de los derechos conexos a la libertad personal debido a que se vulneran los derechos que componen la tutela procesal efectiva en los procesos judiciales penales recurridos.*

La contrastación se realiza a través del cuadro cartesiano y del coeficiente de relación estadística.

#### a. Cuadro cartesiano

		V1	
		Precedente vinculante	
		1	2
V2	1	0 0%	4 5%
	2	0	71
		0	75
		= 75	

#### b. Coeficiente de relación estadística

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{(0-5)}{(0+5)}$$

$$r = -1$$

La primera hipótesis específica **no se corrobora**, ya que se aprecia la tendencia relativa a que los magistrados resguarden la tutela procesal efectiva a través de la aplicación de los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional sobre la libertad personal y derechos conexos.

#### 8.4.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2

La segunda hipótesis específica fue la siguiente:

*La dimensión sustantiva del debido proceso resulta ser más vulnerada que la dimensión formal por parte de los jueces penales, ya que existe mayor propensión a desconocer parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad, generándose la vulneración de los derechos conexos a la libertad personal.*

La contrastación se realiza a través del cuadro cartesiano y del coeficiente de relación estadística.

##### a. Cuadro cartesiano

		V1	
		Debido proceso	
		1	2
V2	1	3 75%	62 87%
	Libertad personal		
	2	1	9
		4	71
		+ = 75	

#### b. Coeficiente de relación estadística

$$r = \frac{a-b}{a+b}$$

$$r = \frac{75-87}{75+87}$$

$$r = -0.07$$

La segunda hipótesis específica **no se corrobora**, debido a que se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, por lo tanto, de los derechos procesales conexos a la libertad personal.

## **9. ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS**

A continuación se ordenarán y analizarán los datos de la investigación de campo.

### **9.1 ORDENAMIENTO DE DATOS**

Se realizará el ordenamiento de los datos registrados en la contrastación de cada una de las hipótesis.

### 9.1.1. Hipótesis general N° 1

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

#### a. Ámbito de vulneración del derecho conexo a la libertad personal

<b>LIBERTAD PERSONAL</b>	<b>Ámbito de vulneración del derecho conexo</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Proceso judicial</b>	80	86.02%
<b>Otro</b>	13	13.97%

#### b. Respeto del derecho recurrido en los procesos judiciales

<b>TUTELA PROCESAL EFECTIVA</b>	<b>Resguardo</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Sí</b>	88	94.62%
<b>No</b>	05	05.37%

### 9.1.2. Hipótesis general N° 2

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

#### a. Actuaciones procesales de los magistrados

<b>ACTUACIÓN PROCESAL</b>	<b>Adecuada</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Sí</b>	80	86.02%
<b>No</b>	13	13.97%

#### b. Derechos conexos a la libertad personal

<b>LIBERTAD PERSONAL</b>	<b>Derechos conexos</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Vulneración</b>	05	05.37%
<b>No hay vulneración</b>	88	94.62%

### 9.1.3. Hipótesis específica N° 1

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

#### a. Conocimiento de los magistrados sobre los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional

<b>PRECEDENTE VINCULANTE</b>	<b>Conocimiento del magistrado</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Sí</b>	88	94.62%
<b>No</b>	05	05.37%

#### b. Tutela procesal efectiva

<b>TUTELA PROCESAL EFECTIVA</b>	<b>Conocimiento del magistrado</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Sí</b>	88	94.62%
<b>No</b>	05	05.37%



--	--	--

#### 9.1.4. Hipótesis específica N° 2

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

##### a. Respeto del debido proceso por los jueces

<b>DEBIDO PROCESO</b>	<b>Respeto por los jueces</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Sí</b>	82	88.17%
<b>No</b>	11	11.82%

##### b. Respeto de los derechos conexos a la libertad personal

<b>LIBERTAD PERSONAL</b>	<b>Resguardo de derechos conexos</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Sí</b>	88	94.62%
<b>No</b>	05	05.37%

## 9.2. ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos nos permiten realizar el siguiente análisis.

### 9.2.1. Hipótesis general N° 1

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

#### **a. El Poder Judicial constituye el principal ámbito donde los justiciables consideran que se produce la vulneración del derecho conexo a la libertad personal**

En cuanto al ámbito donde se originaría la presunta vulneración del derecho, tenemos lo siguiente:

- 80 casos se originarían por presuntas vulneraciones en sede judicial sobre derechos conexos a la libertad personal de orden procesal, lo cual representa el 86.02% de los casos.
- 13 casos se originarían por presuntas vulneraciones sobre la libertad personal, lo cual representar el 13.97% de los casos.

#### **b. Sin embargo, en el Poder Judicial se respetan los derechos fundamentales procesales vinculados con la libertad personal**

En lo concerniente al respeto del derecho recurrido, cabe señalar lo siguiente:

- 88 demandas han sido desestimadas debido a que no se ha constatado la vulneración de la libertad personal o de los derechos procesales conexos a ella, lo cual representa el 94.62% de los casos.

- 05 demandas han sido estimadas debido a que se ha constatado la vulneración de los derechos procesales conexos a la libertad personal, lo cual representa el 05.37% de los casos.

### **9.2.2. Hipótesis general N° 2**

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

#### **a. Las actuaciones procesales de los magistrados velan por el pleno ejercicio de la libertad personal y de los derechos procesales conexos a ella**

La evaluación de la actuación procesal de los magistrados determina la obtención de los siguientes resultados:

- Se ha corroborado en 13 casos que la actuación procesal de los magistrados ha generado la vulneración de los derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal, situación que se ha producido en el 13.97% de las sentencias analizadas.
- Por otro lado, 80 casos nos han permitido advertir que la actuación procesal de los magistrados se ha orientado sobre la base del respeto de los derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal, representando el 86.02% de los casos.

#### **b. Los derechos conexos a la libertad personal son respetados por los magistrados judiciales**

En lo concerniente al respeto del derecho recurrido, cabe señalar lo siguiente:

- Son 05 las casos en los que se ha apreciado la vulneración del derecho al debido proceso, entendido como atributo conexo a la libertad personal, lo cual implica que el 05.37% de los casos hayan originado la advertencia de esta situación.
- Sin embargo, en 88 casos se ha corroborado que los magistrados no han vulnerado el debido proceso y demás derechos fundamentales adjetivos conexos a la libertad personal, lo que quiere decir que el 94.62% de las causas analizadas se adecuan a los parámetros de legalidad.

### **9.2.3. Hipótesis específica N° 1**

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

#### **a. Los magistrados aplican los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional en la resolución de causas vinculadas con la libertad personal**

Sobre el particular, debe expresarse lo siguiente:

- 88 demandas han sido desestimadas debido a que no se ha constatado la vulneración de los precedentes vinculantes expedidas por el Tribunal Constitucional sobre la libertad personal o la relativa a los derechos procesales conexos a ella, lo cual representa el 94.62% de los casos.
- 05 demandas han sido estimadas debido a que se ha constatado la vulneración de los precedentes vinculantes expedidas por el Tribunal Constitucional sobre la libertad personal o la relativa a los derechos procesales conexos a ella, lo cual representa el 05.37% de los casos.

#### **b. Los magistrados del Poder Judicial resguardan la tutela procesal efectiva de las partes al adecuar sus actuaciones a las garantías esenciales del mismo**

Al respecto, se ha constatado lo siguiente:

- 88 casos han sido desestimados pues no se ha constatado la vulneración de la tutela procesal efectiva, comprendida como categoría en la que se encuentran los derechos procesales conexos a ella. Es decir, nos referimos al 94.62% de los casos.
- Por otro lado, en 05 casos se advierte la vulneración de la tutela procesal efectiva, comprendida como categoría en la que se encuentran los derechos procesales conexos a ella. Es decir, nos referimos al 05.37% de los casos.

#### **9.2.4. Hipótesis específica N° 2**

Los resultados han sido clasificados en dos categorías que nos permiten sistematizar su comprensión.

##### **a. El respeto del debido proceso es cumplido por parte de los jueces**

La evaluación del respeto sobre las dimensiones del debido proceso determina la obtención de los siguientes resultados:

- Se han identificado 11 casos en los cuales se han afectado las dimensiones del derecho al debido proceso, situación que se ha producido en el 11.82% de las sentencias analizadas.
- Por otro lado, 82 casos han resguardado las dimensiones del derecho al debido proceso, representando el 88.17% de los casos.

##### **b. Respeto de los derechos conexos a la libertad personal es garantizado por los magistrados del Poder Judicial**

En lo concerniente al respeto del derecho recurrido, cabe señalar lo siguiente:

- 05 son los casos en los que se ha generado la vulneración a la libertad personal y de sus derechos procesales conexos. Es decir, esta situación se produce en el 05.37% de los casos.
- Sin embargo, en 88 casos no se ha producido la vulneración de la libertad personal y de los derechos procesales conexos a ella, lo que significa que el 94.62% de los casos respetan los atributos de estos derechos.

## **10. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCTRINA.** **APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA TEORÍA.** **APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA LEGISLACIÓN.** **APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA** **JURISPRUDENCIA. ANTEPROYECTO DE LEY**

El desarrollo realizado hasta este momento nos permite realizar una serie de aportes en diferentes áreas, como son la doctrina, la teoría, la legislación y la jurisprudencia, permitiéndonos de esa manera concluir con la proposición de un anteproyecto de ley.

### **10.1. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA DOCTRINA**

- Los procesos judiciales constituyen el principal ámbito que origina la interposición de demandas de hábeas corpus.
- No obstante, también se acredita la existencia de demandas de hábeas corpus interpuestas por la presunta vulneración del derecho a la libertad personal.

- El presupuesto para la interposición de demandas de hábeas corpus contra resoluciones judiciales se sustenta en la presunta vulneración de derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal.
- Sin embargo, se constata que en los procesos judiciales no se produce la vulneración de los derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal al ser desestimadas las demandas interpuestas por esta causal.
- Ello se acredita en que el Tribunal Constitucional ha declarado que los derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal son resguardados por los operadores jurisdiccionales en el trámite de los procesos en los que se discute una causa relativa a la identificación de una conducta antijurídica cuya consecuencia posible es la privación de la libertad personal.

## **10.2. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA TEORÍA**

- Las situaciones expuestas nos permiten advertir la innecesaria interposición de demandas de hábeas corpus en razón que las pretensiones no se refieren al contenido constitucionalmente protegido de la libertad personal o de la tutela procesal efectiva, sino que se desea convertir a la sede constitucional en una suprainstancia que realice nuevos pronunciamientos de fondo que sustituyan los recurridos que han sido efectuados resguardando la motivación de resoluciones judiciales.
- Sin perjuicio de lo señalado, se ha aprecia la existencia de un reducido porcentaje de demandas que son estimadas en causas instauradas sobre hábeas corpus contra resoluciones judiciales que habrían vulnerado derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal.
- Las irregularidades advertidas en las resoluciones judiciales que habrían vulnerado derechos fundamentales procesales conexos a la libertad personal residen

principalmente en deficiencias en la motivación de los pronunciamientos judiciales, como también en la falta de actuación de diligencias procesales.

### **10.3. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA LEGISLACIÓN**

- Las dimensiones del debido proceso es resguardada por los jueces penales en el trámite de procesos penales cuya posible consecuencia es la limitación de la libertad personal.
- Esto revela que los magistrados respetan parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad al impartir justicia en dichos procesos, con lo cual respetan las cláusulas contenidas en la tutela procesal efectiva, comprendidas como derechos conexos a la libertad personal.
- Sin embargo, debe señalarse que existen determinados casos en los cuales la libertad personal y los derechos procesales conexos a ella son vulnerados debido a que se desconoce la dimensión sustantiva y formal del debido proceso.
- Esta situación también se produce cuando los jueces penales desconocen los parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad al tramitar las mencionadas causas, con lo cual se genera un serio agravio en torno al desarrollo del mismo.

### **10.4. APORTES A LA JURISPRUDENCIA**

- Los juzgadores penales conocen los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional sobre la libertad personal y respecto a los derechos conexos a ella.
- Esta situación permite el respeto de los magistrados sobre los derechos que componen la tutela procesal efectiva en los procesos penales.



- Sin embargo, existe un porcentaje minoritario de casos en los que los magistrados no han aplicado los precedentes vinculados expedidos por el Tribunal Constitucional sobre la libertad personal y derechos conexos a ella.
- Esta situación ha generado que los operadores jurisdiccionales vulneren derechos que componen la tutela procesal efectiva en el trámite de los procesos penales, tales como el debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales.
- En consecuencia, de los resultados obtenidos en la presente investigación obtenemos aportes a la jurisprudencia, los cuales son expresados a través del establecimiento de criterios de interpretación en relación a la relación de conexidad entre los derechos fundamentales afectados con la libertad personal. Para ello sería pertinente que el Tribunal Constitucional se valiera de las disposiciones establecidas en el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional a efectos que establezca precedentes vinculantes sobre esta materia, a fin de evitar la innecesaria interposición de demandas que serán desestimadas.

## **10.5. ANTEPROYECTO DE LEY**

Sobre la base de los criterios expuestos, se propone el siguiente anteproyecto de ley:

### **ANTEPROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL**

#### **a. Exposición de motivos**

En diciembre de 2004 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, cuyo artículo 25 establece los supuestos de acción del proceso de hábeas corpus.

Sin embargo, un estudio acucioso de las sentencias expedidas durante enero y febrero de 2010 por el Tribunal Constitucional sobre esta materia ha revelado que existe una grave

deficiencia en cuanto a la identificación de los supuestos de conexión de los diversos derechos con la libertad personal por parte de los jueces penales.

En consecuencia, se identifica que el artículo 25 del Código Procesal Constitucional tiene un vacío legislativo que debe ser subsanado a través de la dación del presente anteproyecto de ley.

## **b. Propuesta legislativa**

Por tal motivo, se propone modificar el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Constitucional a través del texto sombreado y cursivo que se encuentra subrayado:

*“Artículo 25.- Derechos protegidos*

*Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual:*

*También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Para la identificación de la conexidad será necesario que se establezca la relación causa-consecuencia entre el hecho y la afectación sobre la libertad personal”.*

## **11. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL**

La elaboración del informe final se realiza sobre la base de los siguientes ejes:

### **- Alcances generales**

La presente investigación es una que se adecua a la categoría de empírico jurídico social debido a que trasciende la mera recopilación de las tendencias doctrinarias y

jurisprudenciales sobre el hábeas corpus, la libertad personal y los derechos conexos a ella, ya que aborda también un trabajo empírico social, es decir, un trabajo de campo que ha sido elaborado sobre la base de la investigación relativa a las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional peruano durante los meses de enero y febrero de 2010.

- **Marco del proceso de hábeas corpus**

Sobre la base de tales lineamientos, se ha permitido definir el marco de acción del proceso de hábeas corpus, contemplado en el artículo 200.1 de la Constitución Política, el que si bien en un primer momento aborda la protección de la libertad personal, en aras de una adecuada y efectiva tutela de los derechos fundamentales, ha ampliado su marco de actuación proyectándose sobre aquellos atributos inherentes al ser humano cuya afectación origine el menoscabo de la libertad personal.

- **La interpretación sobre la conexidad de la libertad personal con otros derechos fundamentales**

Sin embargo, este reconocimiento doctrinario no ha encontrado un correlato con nuestra realidad, ya que la revisión de las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional durante enero y febrero 2010 ha permitido revelar que las demandas interpuestas por esta causal son desestimadas debido a que no se ha acreditado la conexidad entre los derechos cuya tutela se recurre y la libertad personal, situación que nos permite apreciar la necesidad de incorporar criterios de interpretación en torno a la vinculación de los derechos fundamentales con la libertad personal en el ejercicio profesional de los abogados para la identificación del nexo entre la libertad personal y los derechos vinculados a ella. Por tal motivo, se hace necesaria la modificación del extremo final del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, a efectos de que cuando se interponga una demanda de hábeas corpus sustentada por

la vulneración de un derecho conexo a la libertad personal, se requiera demostrar la conexión entre los derechos.

## **12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **12.1. CONCLUSIONES**

- El proceso de hábeas corpus es uno de naturaleza constitucional que tutela la libertad personal.
- Sin embargo, el ámbito de acción de este proceso no se agota con la protección de este derecho frente a situaciones en las que se atente contra la libertad locomotora de la persona. En efecto, la libertad personal también es afectada a través de la vulneración directa de derechos fundamentales conexos a ella, los cuales pueden ser de naturaleza sustantiva o procesal.
- Así pues, existirán situaciones en las que se acredite que un hecho que genere la vulneración de cierto derecho fundamental podrá incidir sobre la libertad personal en la medida que se acredite la relación causa-consecuencia.
- En la investigación realizada sobre las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional durante el periodo enero y febrero de 2010 se acredita que en las demandas interpuestas por dicha causal no han generado la afectación de un derecho conexo a la libertad personal, lo cual revela la inexistencia de conexidad entre el derecho presuntamente vulnerado y la libertad personal, situación que genera un serio perjuicio a la administración de justicia por el trámite innecesario de causas que finalmente serán desestimadas.

### **12.2. RECOMENDACIONES**

- A efectos de solucionar la situación antes expuesta, recomendamos que se identifique la relación de conexidad entre los derechos fundamentales vinculados con la libertad personal.
- La correcta identificación de los supuestos de conexidad entre los derechos fundamentales y la libertad personal permitirá la previsibilidad en la administración de justicia cuando se demande la vulneración de un derecho conexo.
- En efecto, al establecerse criterios delimitados sobre la conexidad, tanto los abogados en ejercicio en realidad fáctica como los juzgadores contarán con parámetros que les permitirá identificar los casos en los que se produce o no la referida vinculación entre los derechos fundamentales con la libertad personal.
- Ello permitirá maximizar los fines de la administración de justicia, contemplados en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado y, a su vez, permitir que los justiciables puedan identificar claramente los supuestos en los que la referida conexidad se presente. Por tal motivo, la presente investigación constituye un aporte a la legislación debido a que nos permite dotar de un mayor contenido a los artículos 5 y 25 del Código Procesal Constitucional. Ello, a su vez, permitirá hacer efectiva la serie de cláusulas contenidas en el Título Preliminar del referido Código debido a que los principios insertos en él permitirán trasladarse a la realidad a través del establecimiento de criterios de interpretación que unifiquen la identificación de la referida conexidad.
- En consecuencia, se recomienda modificarse el párrafo final del artículo 25 del Código Procesal Constitucional debido a que con la inclusión del extremo propuesto en el anteproyecto se garantizará que el abogado en la práctica profesional y el juzgador se encuentren en la obligación de demostrar la mencionada conexidad.
- De igual manera, se recomienda la realización de labores de difusión sobre el ámbito de acción del proceso de hábeas corpus a efectos de que quede claro que este

no procede sólo por la afectación directa de la libertad personal sino por vulneraciones a otros derechos que terminan repercutiendo sobre esta.

### 13. **BIBLIOGRAFÍA**

#### 13.1. **LIBROS Y REVISTAS**

1. **ABAD QUPANQUI**, Samuel. “Derecho Procesal Constitucional”. Gaceta Jurídica. Lima, 2004.
2. **ALMAGRO NOSETE**, José. “Constitución y proceso”. Bosch Editores. Barcelona, 1984.
3. **ÁLVAREZ LANDETA**, Joaquín. “El derecho de defensa como derecho devaluado”. En: *Jueces para la democracia*. Asociación Jueces para la democracia. N. 15. Madrid, 1992.
4. **BARRETO ARDILA**, Hernando. “Observaciones sobre el tratamiento del derecho de defensa en la implementación del sistema acusatorio”. En: *Dikaion: Revista de actualidad jurídica*. Universidad de la Sabana. N. 13. Bogotá, 2004.
5. **BELDA PÉREZ-PEDRERO**, Enrique. “El derecho a la libertad y a la seguridad personal”. En: *Anuario Parlamento y Constitución*. Nº 3. Cortes de Castilla- La Mancha. Castilla-La Mancha, 1999.
6. **BERNAL CUELLAR**, Jaime y **MONTEALEGRE**, Lynett. “El proceso penal”. Universidad del Externado. Bogotá, 1995.
7. **BIDART CAMPOS**, Germán y **PIZZOLO**, Calogero (Coords.). “Derechos Humanos- Corte Interamericana. Comentarios a las Opiniones Consultivas de la

- Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza, 2000.
8. **BOREA ODRÍA**, Alberto. “Evolución de las garantías constitucionales”. Fe de Erratas. Lima, 2000.
  9. **BUSTAMANTE ALARCÓN**, Reynaldo. “Derechos fundamentales y proceso justo”. Ara editores. Lima, 2001.
  10. **CARRUITERO LECCA**, Francisco y **GUTIERRES CANALES**, Mario Raúl. “El Proceso Constitucional de Hábeas Corpus”. Studio editores. Callao, 2008.
  11. **CASAL**, Jesús María. “Libertad personal, seguridad individual y debido proceso en Venezuela”, en *Ius et praxis*, Vol. 5, Nº 1, Universidad de Talca, Talca, 1999.
  12. **CASTILLO CÓRDOVA**, Luis. “Hábeas corpus, amparo y hábeas data”. Ara Editores. Lima, 2004.
  13. **CASTILLO CÓRDOVA**, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”, Palestra, Lima, 2006.
  14. **COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS**. “Protección de los derechos humanos: Definiciones operativas”. Comisión Andina de Juristas. Lima, 1997.
  15. **DE BERNARDIS**, Luis Marcelo. “La garantía procesal del debido proceso”. Cultural Cuzco. Lima, 1995.
  16. **DEFENSORÍA DEL PUEBLO**. “Hábeas corpus y personas privadas de libertad”. Lima, 2005.
  17. **DÍAZ REVORIO**, Francisco. “La interpretación constitucional de la ley. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional”. Palestra. Lima, 2003.

18. **DÍAZ RICCI**, Sergio. “Necesidad de un Código Procesal Constitucional”. En: VEGA GÓMEZ, Juan y CORZO SOSA, Edgar (Coordinadores). En: *Instrumentos de tutela y justicia constitucional*. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 2002.
19. **DOMÍNGUEZ GUILLÉN**, María Candelaria. “Sobre los derechos de la personalidad”. En: *Dikaion: revista de actualidad jurídica*. N° 12. Madrid, 2003.
20. **DONAYRE MONTESINOS**, Christian. “El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional”. Jurista editores. Lima, 2005.
21. **EGUIGUREN PRAELI**, Francisco. “Estudios constitucionales”. Ara Editores. Lima, 2002.
22. **ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**, Eloy. “Código Procesal Constitucional, Proceso contencioso administrativo y Derechos del administrado”. Palestra editores. Lima, 2004.
23. **ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**, Eloy. “Jurisdicción constitucional, impartición de justicia y debido proceso”. Ara Editores. Lima, 2003.
24. **FERNÁNDEZ SESSAREGO**, Carlos. En: “La Constitución comentada”. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2006.
25. **FRANCO ALZAMORA**, Carlos, “Consideraciones de carácter legal sobre la detención policial”, en *Revista de la Policía Nacional del Perú*, N° 22, Lima, 1995.
26. **GARCÍA BELAÚNDE**, Domingo. “El hábeas corpus en el Perú”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1979.



27. **GARCÍA BELAÚNDE**, Domingo. “El hábeas corpus en América Latina”. En: *Revista de estudios políticos*. N° 97. Madrid, 1997.
  
28. **GARCÍA BELAÚNDE**, Domingo, “Constitución y Política”, Eddili, Lima 1991.
  
29. **GARCÍA BELAÚNDE**, Domingo. “Derecho Procesal Constitucional”. Marsol Editores. Trujillo, 1998.
  
30. **GARZÓN DIAZGRANADOS**, Tulia y **GUERRA TAMARA**, Angélica. “Privación de la libertad y responsabilidad del Estado”. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2000.
  
31. **GONZÁLES BLANCO**, Carlos y **ÁLVAREZ MORENO**, José Ismael. “El amparo”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México D.F., 2006.
  
32. **HERRERÍAS TELLERÍAS**, Armando. “Orígenes externos del juicio de amparo”. En: *Revista de la Facultad de Derecho de México*. N° 19. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 1955.
  
33. **HUERTA GUERRERO**, Luis. Libertad personal y hábeas corpus. Estudios sobre jurisprudencia constitucional”. Comisión Andina de Juristas. Lima, 2003.
  
34. **LANDA ARROYO**, César. “Teoría del Derecho Procesal Constitucional”. Palestra Editores. Lima, 2003.
  
35. **LANDA ARROYO**, César. “Tribunal Constitucional y Estado Democrático”. Palestra Editores. Lima, 2003.
  
36. **LANDA ARROYO**, César. “El hábeas corpus en el nuevo Código Procesal Constitucional peruano”, en *Constitución y fuentes del Derecho*, Palestra, Lima,

2006, p. 401. Citado por AA.VV. “Proceso de hábeas corpus”, Gaceta Jurídica, Lima, 2008.

37. **LORCA NAVARRETE**, Antonio María. “El derecho procesal como sistema de garantías”. En: *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. Universidad Nacional Autónoma de México. N. 107. Distrito Federal de México, 2003.
38. **MANTILLA MARTÍNEZ**, Marcela. “El hábeas corpus: Derecho fundamental y garantía constitucional”. En: *Universitas Estudiantes*. N° 1. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2004.
39. **MESÍA RAMÍREZ**, Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. Gaceta Jurídica. Lima, 2004.
40. **MOLINA**, Teresa, “La entrada y registro practicada por la política en el supuesto de la flagrancia y la posesión de drogas en domicilio particular”, en *Anuario jurídico y económico escurialense*, N° 37, Real Centro Universitario escurial, Madrid, 2004.
41. **MONROY GÁLVEZ**, Juan. "Debido proceso y tutela jurisdiccional." En: “La Constitución comentada”. Gaceta Jurídica S.A. Tomo II. Lima, 2005.
42. **NOGUERA ALCALÁ**, Humberto. “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile”. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). N° 102. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1998.
43. **PACHECO GÓMEZ**, M. “Los derechos humanos documentos básicos”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago.

44. **PEREIRA CHUMBE**, Roberto Carlos, “El hábeas corpus para la defensa de los derechos conexos a la libertad personal”, en *Actualidad Jurídica*, N° 138, Lima, 2005.
45. **PÉREZ ROYO**, Javier. “Tribunal Constitucional y división de poderes”. Tecnos, Madrid, 1998.
46. **QUISPE ASTOQUILCA**, Carlos Luis. “El hábeas corpus conexo”, en *Jus Jurisprudencia*, N° 2, Grijley, Lima, 2008.
47. **RIBEIRO TORAL**, Gerardo. “Teoría de la argumentación jurídica”. Plaza y Valdés Editores. Distrito Federal de México, 2006.
48. **RIVERA SANTIVANEZ**, José. “Supremacía constitucional y sistemas de control de constitucionalidad”. En: CASTAÑEDA OTSU, Susana (Coordinadora). “Derecho Procesal Constitucional”. Jurista editores. Lima, 2003.
49. **SAGÜÉS**, Néstor Pedro. “Elementos de Derecho constitucional”. Astrea. Buenos Aires, 1993.
50. **SAGÜÉS**, Néstor. “Derecho procesal constitucional. Hábeas corpus”. Volumen 4. 2° ed. Astrea. Buenos Aires, 1988.

### **13.2. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

1. Expediente N° 00214-2007-HC/TC
2. Expediente N° 01014-2007-PHC/TC
3. Expediente N° 01043-2007-HC/TC
4. Expediente N° 01068-2007-HC/TC
5. Expediente N° 01097-2007-HC/TC
6. Expediente N° 01099-2007-HC/TC

7. Expediente N° 01218-2007-HC/TC
8. Expediente N° 02037-2007-HC/TC
9. Expediente N° 02079-2007-HC/TC
10. Expediente N° 02492-2007-HC/TC
11. Expediente N° 02546-2007-HC/TC
12. Expediente N° 02591-2007-HC/TC
13. Expediente N° 02901-2007-HC/TC
14. Expediente N° 02953-2007-HC/TC
15. Expediente N° 03155-2007-HC/TC
16. Expediente N° 03321-2007-HC/TC
17. Expediente N° 03361-2007-HC/TC
18. Expediente N° 03377-2007-HC/TC
19. Expediente N° 03425-2007-HC/TC
20. Expediente N° 03510-2007-HC/TC
21. Expediente N° 03666-2007-HC/TC
22. Expediente N° 04747-2007-HC/TC
23. Expediente N° 00014-2006-AI/TC
24. Expediente N° 00402-2006-HC/TC
25. Expediente N° 00617-2006-PHC/TC
26. Expediente N° 00649-2006-HC/TC
27. Expediente N° 00932-2006-HC/TC
28. Expediente N° 01209-2006-AA/TC
29. Expediente N° 01207-2006-HC/TC
30. Expediente N° 01454-2006-HC/TC
31. Expediente N° 01673-2006-HC/TC
32. Expediente N° 02110-2006-HC/TC
33. Expediente N° 02179-2006-HC/TC
34. Expediente N° 02665-2006-HC/TC
35. Expediente N° 02730-2006-AA/TC
36. Expediente N° 03014-2006-HC/TC
37. Expediente N° 03037-2006-HC/TC

38. Expediente N° 03062-2006-HC/TC
39. Expediente N° 04388-2006-HC/TC
40. Expediente N° 04496-2006-HC/TC
41. Expediente N° 04956-2006-HC/TC,
42. Expediente N° 06086-2006-HC/TC
43. Expediente N° 06094-2006-HC/TC
44. Expediente N° 06142-2006-HC/TC
45. Expediente N° 06450-2006-HC/TC
46. Expediente N° 06573-2006-HC/TC
47. Expediente N° 06648-2006-HC/TC
48. Expediente N° 07064-2006-HC/TC
49. Expediente N° 07181-2006-HC/TC
50. Expediente N° 07395-2006-HC/TC
51. Expediente N° 07666-2006-HC/TC
52. Expediente N° 07811-2006-HC/TC
53. Expediente N° 07851-2006-HC/TC
54. Expediente N° 07915-2006-HC/TC
55. Expediente N° 8202-2006-HC/TC
56. Expediente N° 08688-2006-HC/TC
57. Expediente N° 08751-2006-HC/TC
58. Expediente N° 08787-2006-HC/TC
59. Expediente N° 08841-2006-HC/TC
60. Expediente N° 09291-2006-HC/TC
61. Expediente N° 09403-2006-HC/TC
62. Expediente N° 09544-2006-HC/TC
63. Expediente N° 09809-2006-HC/TC
64. Expediente N° 09877-2006-HC/TC
65. Expediente N° 10382-2006-HC/TC
66. Expediente N° 10556-2006-HC/TC
67. Expediente N° 10713-2006-HC/TC
68. Expediente N° 00003-2005-AI/TC

- 69. Expediente N° 00019-2005-AI/TC
- 70. Expediente N° 00249-2005-AC/TC
- 71. Expediente N° 00506-2005-AA/TC
- 72. Expediente N° 0618-2005-HC/TC
- 73. Expediente N° 01711-2005-HC/TC
- 74. Expediente N° 02494-2005-AA/TC
- 75. Expediente N° 02521-2005-HC/TC
- 76. Expediente N° 02877-2005-HC/TC
- 77. Expediente N° 03390-2005-HC/TC
- 78. Expediente N° 03491-2005-HC/TC
- 79. Expediente N° 03873-2005-HC/TC
- 80. Expediente N° 05994-2005-HC/TC
- 81. Expediente N° 06712-2005-HC/TC
- 82. Expediente N° 06075-2005-HC/TC
- 83. Expediente N° 06227-2005-HC/TC
- 84. Expediente N° 06260-2005-HC/TC
- 85. Expediente N° 06314-2005-HC/TC
- 86. Expediente N° 07039-2005-HC/TC
- 87. Expediente N° 07510-2005-HC/TC
- 88. Expediente N° 08123-2005-HC/TC
- 89. Expediente N° 08311-2005-HC/TC
- 90. Expediente N° 08323-2005-HC/TC
- 91. Expediente N° 08453-2005-HC/TC
- 92. Expediente N° 08646-2005-HC/TC
- 93. Expediente N° 08817-2005-HC/TC
- 94. Expediente N° 09057-2005-HC/TC
- 95. Expediente N° 09598-2005-HC/TC
- 96. Expediente N° 10107-2005-HC/TC
- 97. Expediente N° 00981-2004-HC/TC
- 98. Expediente N° 02192-2004-AA/TC
- 99. Expediente N° 02915-2004-HC/TC

- 100. Expediente N° 03242-2004-AA/TC
- 101. Expediente N° 04080-2004-AC/TC
- 102. Expediente N° 00010-2003-HC/TC
- 103. Expediente N° 02663-2003-HC/TC
- 104. Expediente N° 00010-2002-AI/TC
- 105. Expediente N° 00290-2002-HC/TC
- 106. Expediente N° 00726-2002-HC/TC
- 107. Expediente N° 01230-2002-HC/TC
- 108. Expediente N° 01260-2002-HC/TC
- 109. Expediente N° 00005-2001-AI/TC

### **13.3. SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA**

- 1. Sentencia C-620 de 2001.
- 2. Sentencia C-010 de 1994.
- 3. Sentencia C-557 de 1992.

## **14. ANEXOS**

Como anexos se incorporan las matrices de datos correspondientes a cada una de las hipótesis formuladas, a efectos que se aprecien los resultados obtenidos y el diagnóstico efectuado sobre cada una de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional durante enero y febrero de 2010.

### **14.1. MATRIZ DE DATOS DE LA HIPÓTESIS GENERAL 1**

El texto de la hipótesis es el siguiente:

*“El principal ámbito en el que se vulneran los derechos conexos a la libertad personal es el de los procesos judiciales penales debido a que en ellos se menoscaban los derechos que componen la tutela procesal efectiva”.*

En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:



<b>MUESTRA</b>	<b>SENTENCIA</b>	<b>V. INDEP. (Libertad personal)</b>	<b>V. DEP. (Tutela procesal efectiva)</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>
<b>1</b>	00815-2007- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>2</b>	5122-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>3</b>	5205-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>4</b>	04253-2009- PHC/TC	1	1	Vulneración de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>5</b>	03391-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>6</b>	02998-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>7</b>	05935-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>8</b>	04156-2009- PHC/TC	1	1	Vulneración de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>9</b>	04162-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>10</b>	06423-2007- PHC/TC	2	1	Vulneración de la libertad personal
<b>11</b>	06226-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>12</b>	03782-2008-	1	2	Respeto de

	PHC/TC			derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>13</b>	04901-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>14</b>	04971-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>15</b>	05007-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>16</b>	02976-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>17</b>	03628-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>18</b>	05047-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>19</b>	02503-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>20</b>	03568-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>21</b>	4845-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>22</b>	05640-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>23</b>	5261-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>24</b>	05351-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>25</b>	05437-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>26</b>	03542-2009-	1	2	Respeto de

	PA/TC			derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>27</b>	00216-2008- PHC/TC	1	1	Vulneración de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>28</b>	04304-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>29</b>	02669-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>30</b>	02670-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>31</b>	02673-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>32</b>	02675-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>33</b>	02683-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>34</b>	02684-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>35</b>	02685-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>36</b>	02800-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>37</b>	02570-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la

				libertad personal
<b>38</b>	02569-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>39</b>	02568-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>40</b>	02833-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>41</b>	02834-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>42</b>	02835-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>43</b>	03202-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>44</b>	03203-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>45</b>	03205-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>46</b>	03453-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>48</b>	03459-2008-	1	2	Respeto de

	PHC/TC			derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>49</b>	03460-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>51</b>	03742-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>52</b>	4998-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>53</b>	02801-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>54</b>	00865-2008- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>55</b>	05004-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>56</b>	05068-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>57</b>	05233-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>58</b>	05017-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>59</b>	05083-2009-	1	2	Respeto de

	PHC/TC			derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>60</b>	05542-2009- HC/TC	1	1	Vulneración de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>61</b>	5586-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>62</b>	01521-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>63</b>	4994-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>64</b>	05186-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>65</b>	04991-2009-PHC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>66</b>	00698-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>67</b>	02357-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>68</b>	04723-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>69</b>	02448-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>70</b>	03576-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la

				libertad personal
<b>71</b>	05284-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>72</b>	02528-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>73</b>	03732-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>74</b>	04373-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>75</b>	03834-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>76</b>	02188-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>77</b>	04805-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>78</b>	04641-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>79</b>	04854-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>80</b>	05230-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>81</b>	05565-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>82</b>	04717-2009-	2	2	Respeto de la

	PHC/TC			libertad personal
<b>83</b>	5601-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>84</b>	05867-2008- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>85</b>	03728-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>86</b>	04529-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>87</b>	04546-2009- HC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>88</b>	04806-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>89</b>	05571-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>90</b>	02967-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>91</b>	4032-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal
<b>92</b>	01424-2008- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>93</b>	05203-2009- PHC/TC	1	2	Respeto de derecho procesal conexo a la libertad personal



## 14.2. MATRIZ DE DATOS DE LA HIPÓTESIS GENERAL 2

El texto de la hipótesis es el siguiente:

*Los juzgadores penales desconocen los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional relativos al respeto de los derechos conexos a la libertad personal debido a que se vulneran los derechos que componen la tutela procesal efectiva en los procesos judiciales penales recurridos.*

En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:

<b>MUESTRA</b>	<b>SENTENCIA</b>	<b>V. INDEP. (Actuación procesal)</b>	<b>V. DEP. (Libertad personal)</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>
<b>1</b>	00815-2007- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>2</b>	5122-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>3</b>	5205-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>4</b>	04253-2009- PHC/TC	1	1	Las actuaciones procesales han vulnerado el debido proceso
<b>5</b>	03391-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>6</b>	02998-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>7</b>	05935-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>8</b>	04156-2009- PHC/TC	1	1	Las actuaciones procesales han vulnerado el debido proceso
<b>9</b>	04162-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>10</b>	06423-2007- PHC/TC	1	2	La actuación de un particular ha vulnerado la libertad personal
<b>11</b>	06226-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el

				debido proceso
<b>12</b>	03782-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>13</b>	04901-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>14</b>	04971-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>15</b>	05007-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>16</b>	02976-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>17</b>	03628-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>18</b>	05047-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>19</b>	02503-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>20</b>	03568-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>21</b>	4845-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>22</b>	05640-2009-	2	1	Las actuaciones

	PHC/TC			procesales han respetado el debido proceso
<b>23</b>	5261-2009-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>24</b>	05351-2009-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>25</b>	05437-2009-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>26</b>	03542-2009-PA/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>27</b>	00216-2008-PHC/TC	1	1	Las actuaciones procesales han vulnerado el debido proceso
<b>28</b>	04304-2009-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>29</b>	02669-2008-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>30</b>	02670-2008-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>31</b>	02673-2008-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>32</b>	02675-2008-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>33</b>	02683-2008-PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el

				debido proceso
<b>34</b>	02684-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>35</b>	02685-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>36</b>	02800-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>37</b>	02570-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>38</b>	02569-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>39</b>	02568-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>40</b>	02833-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>41</b>	02834-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>42</b>	02835-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>43</b>	03202-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>44</b>	03203-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>45</b>	03205-2008-	2	1	Las actuaciones

	PHC/TC			procesales han respetado el debido proceso
<b>46</b>	03453-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>48</b>	03459-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>49</b>	03460-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>51</b>	03742-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>53</b>	4998-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>53</b>	02801-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>54</b>	00865-2008- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la

				libertad personal
<b>55</b>	05004-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>56</b>	05068-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>57</b>	05233-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>58</b>	05017-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>59</b>	05083-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>60</b>	05542-2009- HC/TC	1	1	Las actuaciones procesales han vulnerado el debido proceso
<b>61</b>	5586-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>62</b>	01521-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>63</b>	4994-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>64</b>	05186-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>65</b>	04991-2009-PHC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>66</b>	00698-2008-	2	1	Las actuaciones

	PHC/TC			procesales han respetado el debido proceso
<b>67</b>	02357-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>68</b>	04723-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>69</b>	02448-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>70</b>	03576-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>71</b>	05284-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>72</b>	02528-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>73</b>	03732-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>74</b>	04373-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>75</b>	03834-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>76</b>	02188-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>77</b>	04805-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el



				debido proceso
<b>78</b>	04641-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>79</b>	04854-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>80</b>	05230-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>81</b>	05565-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>82</b>	04717-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>83</b>	5601-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>84</b>	05867-2008- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>85</b>	03728-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>86</b>	04529-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>87</b>	04546-2009- HC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>88</b>	04806-2009- PHC/TC	2	1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>89</b>	05571-2009-	2	1	Las actuaciones

	PHC/TC					procesales han respetado el
						debido proceso
<b>90</b>	02967-2009- PHC/TC		2		2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>91</b>	4032-2009- PHC/TC		2		1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso
<b>92</b>	01424-2008- PHC/TC		2		2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>93</b>	05203-2009- PHC/TC		2		1	Las actuaciones procesales han respetado el debido proceso

#### 14.3. MATRIZ DE DATOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

El texto de la hipótesis es el siguiente:

*Los juzgadores penales desconocen los precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional relativos al respeto de los derechos conexos a la libertad personal debido a que se vulneran los derechos que componen la tutela procesal efectiva en los procesos judiciales penales recurridos.*

En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:

<b>MUESTRA</b>	<b>SENTENCIA</b>	<b>V. INDEP.  (Precedente vinculante)</b>	<b>V. DEP.  (Tutela procesal efectiva)</b>	<b>V. INTERF.  (Emisor)</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>
<b>1</b>	00815-2007- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>2</b>	5122-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>3</b>	5205-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>4</b>	04253-2009- PHC/TC	2	1	1	Vulneración de la tutela procesal efectiva por el juez debido a la inaplicación del precedente vinculante del TC
<b>5</b>	03391-2009- PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal
<b>6</b>	02998-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela

					procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>7</b>	05935-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>8</b>	04156-2009-PHC/TC	2	1	1	Vulneración de la tutela procesal efectiva por el juez debido a la inaplicación del precedente vinculante del TC
<b>9</b>	04162-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>10</b>	06423-2007-PHC/TC	2	1	1	Vulneración de la libertad personal por el desconocimiento sobre el precedente vinculante del TC
<b>11</b>	06226-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>12</b>	03782-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el

					conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>13</b>	04901-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>14</b>	04971-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>15</b>	05007-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>16</b>	02976-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>17</b>	03628-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>18</b>	05047-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente

					vinculante del TC
<b>19</b>	02503-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>20</b>	03568-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>21</b>	4845-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>22</b>	05640-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>23</b>	5261-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>24</b>	05351-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del

					juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>25</b>	05437-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>26</b>	03542-2009-PA/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>27</b>	00216-2008-PHC/TC	2	1	1	Vulneración de la tutela procesal efectiva por el juez debido a la inaplicación del precedente vinculante del TC
<b>28</b>	04304-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>29</b>	02669-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>30</b>	02670-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el

					conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>31</b>	02673-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>32</b>	02675-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>33</b>	02683-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>34</b>	02684-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>35</b>	02685-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>36</b>	02800-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela



					procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>37</b>	02570-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>38</b>	02569-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>39</b>	02568-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>40</b>	02833-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>41</b>	02834-2008-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC

<b>42</b>	02835-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>43</b>	03202-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>44</b>	03203-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>45</b>	03205-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>46</b>	03453-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el

					precedente vinculante del TC
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>48</b>	03459-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>49</b>	03460-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>51</b>	03742-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el

					conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>52</b>	4998-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>53</b>	02801-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>54</b>	00865-2008- PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>55</b>	05004-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>56</b>	05068-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>57</b>	05233-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva

					por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>58</b>	05017-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>59</b>	05083-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>60</b>	05542-2009-HC/TC	2	1	1	Vulneración de la tutela procesal efectiva por el juez debido a la inaplicación del precedente vinculante del TC
<b>61</b>	5586-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>62</b>	01521-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>63</b>	4994-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela

					procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>64</b>	05186-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>65</b>	04991-2009- PHC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>66</b>	00698-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>67</b>	02357-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>68</b>	04723-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC

<b>69</b>	02448-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>70</b>	03576-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>71</b>	05284-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>72</b>	02528-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>73</b>	03732-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>74</b>	04373-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el

					precedente vinculante del TC
<b>75</b>	03834-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>76</b>	02188-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>77</b>	04805-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>78</b>	04641-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>79</b>	04854-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>80</b>	05230-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el



					conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>81</b>	05565-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>82</b>	04717-2009- PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>83</b>	5601-2009- PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>84</b>	05867-2008- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>85</b>	03728-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>86</b>	04529-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el

					conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>87</b>	04546-2009-HC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>88</b>	04806-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>89</b>	05571-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>90</b>	02967-2009-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>91</b>	4032-2009-PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>92</b>	01424-2008-PHC/TC	2	2	1	Respeto de la libertad personal por el

					conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC
<b>93</b>	05203-2009- PHC/TC	2	2	1	Resguardo de la tutela procesal efectiva por el conocimiento del juez sobre el precedente vinculante del TC

#### 14.4. MATRIZ DE DATOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2

El texto de la hipótesis es el siguiente:

*La dimensión sustantiva del debido proceso resulta ser más vulnerada que la dimensión formal por parte de los jueces penales, ya que existe mayor propensión a desconocer parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad, generándose la vulneración de los derechos conexos a la libertad personal.*

En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:

### HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2

<b>MUESTRA</b>	<b>SENTENCIA</b>	<b>V. INDEP. (Debido proceso)</b>	<b>V. DEP. (Libertad personal)</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>
<b>1</b>	00815-2007- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>2</b>	5122-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>3</b>	5205-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>4</b>	04253-2009- PHC/TC	1	1	No se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, se han vulnerado los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>5</b>	03391-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>6</b>	02998-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en

				consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>7</b>	05935-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>8</b>	04156-2009- PHC/TC	1	1	No se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, se han vulnerado los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>9</b>	04162-2009- PHC/TC	2	2	Respeto de la libertad personal
<b>10</b>	06423-2007- PHC/TC	1	2	La actuación de un particular ha vulnerado la libertad personal
<b>11</b>	06226-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>12</b>	03782-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>13</b>	04901-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad

				personal
<b>14</b>	04971-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>15</b>	05007-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>16</b>	02976-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>17</b>	03628-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>18</b>	05047-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>19</b>	02503-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>20</b>	03568-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>21</b>	4845-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los

				derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>22</b>	05640-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>23</b>	5261-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>24</b>	05351-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>25</b>	05437-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>26</b>	03542-2009- PA/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>27</b>	00216-2008- PHC/TC	1	1	No se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal

				del debido proceso y, en consecuencia, se han vulnerado los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>28</b>	04304-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>29</b>	02669-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>30</b>	02670-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>31</b>	02673-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>32</b>	02675-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal



<b>33</b>	02683-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>34</b>	02684-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>35</b>	02685-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>36</b>	02800-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>37</b>	02570-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>38</b>	02569-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales

				conexos a la libertad personal
<b>39</b>	02568-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>40</b>	02833-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>41</b>	02834-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>42</b>	02835-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>43</b>	03202-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>44</b>	03203-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en

				consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>45</b>	03205-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>46</b>	03453-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>47</b>	03457-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>48</b>	03459-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>49</b>	03460-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva

				y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>50</b>	03559-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>51</b>	03742-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>52</b>	4998-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>53</b>	02801-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal

<b>54</b>	00865-2008- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>55</b>	05004-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>56</b>	05068-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>57</b>	05233-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>58</b>	05017-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>59</b>	05083-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>60</b>	05542-2009- HC/TC	1	1	No se ha resguardado la dimensión

				sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, se han vulnerado los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>61</b>	5586-2009-PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>62</b>	01521-2009-PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>63</b>	4994-2009-PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>64</b>	05186-2009-PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>65</b>	04991-2009-PHC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad

				personal
<b>66</b>	00698-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>67</b>	02357-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>68</b>	04723-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>69</b>	02448-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>70</b>	03576-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>71</b>	05284-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los

				derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>72</b>	02528-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>73</b>	03732-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>74</b>	04373-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>75</b>	03834-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>76</b>	02188-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>77</b>	04805-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido



				proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>78</b>	04641-2008- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>79</b>	04854-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>80</b>	05230-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>81</b>	05565-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>82</b>	04717-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>83</b>	5601-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>84</b>	05867-2008-	2	1	Se ha resguardado la

	PHC/TC			dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>85</b>	03728-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>86</b>	04529-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>87</b>	04546-2009- HC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>88</b>	04806-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>89</b>	05571-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad

				personal
<b>90</b>	02967-2009- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>91</b>	4032-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal
<b>92</b>	01424-2008- PHC/TC	2	2	Las actuaciones procesales han respetado la libertad personal
<b>93</b>	05203-2009- PHC/TC	2	1	Se ha resguardado la dimensión sustantiva y formal del debido proceso y, en consecuencia, los derechos procesales conexos a la libertad personal